

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA  
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN  
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
Vigésima Tercera Reunión del Comité de Expertos  
Del 17 al 21 de marzo de 2014  
Washington, DC

OEA/Ser.L.  
SG/MESICIC/doc.409/13 rev.4  
19 marzo 2014  
Original: español

ECUADOR

(INFORME FINAL)

(Aprobado en la sesión plenaria del 21 de marzo de 2014)

## SUMARIO

El presente informe contiene el análisis integral de la implementación en la República del Ecuador del artículo III, Párrafo 9, de la Convención Interamericana contra la Corrupción, correspondiente a “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”, que fue seleccionada por el Comité de Expertos del MESICIC para la Cuarta Ronda; las buenas prácticas informadas por dichos órganos; y el seguimiento de la implementación de las recomendaciones que se le formularon a Ecuador en la Primera Ronda.

El análisis se efectuó dentro del marco de la Convención, el Documento de Buenos Aires, el Reglamento del Comité, y las metodologías adoptadas por el mismo para la realización de las visitas *in situ* y para la Cuarta Ronda, incluidos los criterios allí establecidos para orientar el análisis sobre tratamiento igualitario para todos los Estados parte, equivalencia funcional, y el propósito tanto de la Convención como del MESICIC de promover, facilitar y fortalecer la cooperación entre los Estados Parte en la prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción.

Para llevar a cabo el análisis se contó con la respuesta de la República del Ecuador al cuestionario; la información recabada por la Secretaría Técnica; y con una nueva e importante fuente de información, como lo fue la visita *in situ* realizada entre el 1 al 3 octubre de 2013 por los miembros del subgrupo de análisis de Ecuador, integrado por Chile y Venezuela, con el apoyo de la Secretaría Técnica, con ocasión de la cual se pudo precisar, aclarar y complementar la información suministrada por Ecuador y escuchar opiniones de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, asociaciones profesionales, académicos e investigadores sobre temas útiles para el análisis, lo cual contribuyó a que el Comité contara con información objetiva y completa sobre dichos temas, facilitó la obtención de información sobre buenas prácticas, y brindó a Ecuador la oportunidad de ofrecer y/o requerir asistencia técnica para los propósitos de la Convención.

El análisis de los órganos de control superior se orientó, de acuerdo con lo previsto en la metodología para la Cuarta Ronda, a determinar si los mismos cuentan con un marco jurídico, si este es adecuado, y si producen los resultados esperados; y teniendo en cuenta lo observado se formularon las recomendaciones pertinentes al Estado analizado.

Los órganos de control superior de Ecuador analizados en este informe son: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Contraloría General del Estado (CGE) y la Función Judicial.

Algunas de las recomendaciones formuladas a Ecuador para su consideración, en relación con los anteriores órganos apuntan a propósitos tales como los que se destacan a continuación:

En relación con el CPCCS, fortalecer la coordinación interinstitucional; adoptar una reglamentación interna para el trámite de denuncias, quejas y reclamos relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su servicio, crear una Unidad de Auditoría Interna; y dotarle de los recursos humanos y presupuestarios necesarios para asegurar el cabal cumplimiento de sus labores en la prevención, detección e investigación de actos de corrupción.

En relación con la FGE, actualizar su manual de clasificación de cargos; fortalecer a la institución dotándole de los recursos humanos y presupuestarios que se requieran para el cabal cumplimiento de sus funciones; fortalecer los sistemas modernos de información y seguimiento de la FGE, a los

finde de asegurar el procesamiento oportuno de causas, especialmente aquellas relacionadas con actos de corrupción; y remover los obstáculos para que pueda proceder de manera oportuna con la instrucción fiscal de los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.

En relación con la CGE, concluir la implementación del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Contraloría General; fortalecer la institución dotándola con los recursos humanos y presupuestarios necesarios para ejercer a cabalidad su función de control de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios de la administración pública; y desarrollar mecanismos que permitan resarcir los daños causados al Estado de manera más eficiente y expedita.

En relación con los órganos jurisdiccionales y el Consejo de la Judicatura, imlementar la nueva carrera judicial; implementar el Manual de Clasificación de puestos, Orgánico Funcional y el Índice Ocupacional del Consejo de la Judicatura, así como los manuales internos que correspondan; implementar el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de la Judicatura; e implementar un sistema informático que recoja datos sobre la sustanciación de los diferentes tipos de delitos de manera general, y específicamente los contemplados en la Convención.

Las buenas prácticas sobre las que Ecuador suministró información se refieren sintéticamente a la implementación por parte de la FGE del Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales (SIAF), que entre otras cosas busca descongestionar las causas relacionadas con informes de indicios de responsabilidad penal remitidos por la CGE; y la creación de la Unidad de Transparencia de Gestión de la Función Judicial, cuyas atribuciones y responsabilidades incluyen velar por la transparencia y eficiencia en la Función Judicial y fortalecer la coordinación interinstitucional contra la corrupción.

Con respecto al seguimiento de las recomendaciones formuladas a Ecuador en la Primera Ronda, sobre las que el Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda Ronda, con base en la metodología de la Cuarta Ronda y teniendo en cuenta la información suministrada por Ecuador en su respuesta al cuestionario y en la visita in situ, se definieron cuales de dichas recomendaciones habían sido implementadas satisfactoriamente; cuáles requerían atención adicional; y cuáles precisaban ser reformuladas, y hizo un recuento de las que quedan vigentes, el cual se incluye como anexo I del informe.

Algunas de las recomendaciones formuladas a Ecuador en la Primera Ronda que quedan vigentes o que fueron reformuladas, apuntan a propósitos tales como el fortalecimiento del órgano de control de la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, continuar en la aplicación de medidas para el establecimiento de restricciones para quienes dejan de desempeñar un cargo público, y la derogación de las denominadas “leyes de desacato”.

**COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA  
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA  
CORRUPCIÓN**

**INFORME RELATIVO A LA IMPLEMENTACIÓN EN LA  
REPÚBLICA DEL ECUADOR DE LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN  
SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA, Y SOBRE EL  
SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS A  
DICHOS PAÍSES EN LA PRIMERA RONDA<sup>1</sup>**

**INTRODUCCIÓN**

**1. Contenido del Informe**

[1] El presente informe se referirá, en primer lugar, al análisis integral de la implementación en la República del Ecuador de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción que fue seleccionada por el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la misma (MESICIC) para la Cuarta Ronda de Análisis. Dicha disposición es la prevista en el Artículo III, Párrafo 9, de la Convención, correspondiente a “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”.

[2] En segundo lugar, aludirá a las buenas prácticas que en relación con los órganos de control superior objeto de análisis en el presente informe, el Estado analizado ha deseado voluntariamente compartir.

[3] En tercer lugar, de conformidad con lo acordado por el Comité de Expertos del MESICIC en su Decimoctava Reunión, en cumplimiento de la recomendación 9, a), de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, versará sobre el seguimiento de la implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas a la República del Ecuador por el Comité de Expertos del MESICIC en el informe que adoptó para este país en la Primera Ronda, y que ha estimado que requieren atención adicional en los informes que adoptó para el mismo en la Segunda y la Tercera Ronda, los cuales se encuentran publicados en la siguiente página en “Internet” [http://www.oas.org/juridico/spanish/mec\\_inf\\_ecu.pdf](http://www.oas.org/juridico/spanish/mec_inf_ecu.pdf)

**2. Ratificación de la Convención y vinculación al Mecanismo**

[4] De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, la República del Ecuador ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción el día 26 de mayo de 1997, depositando el instrumento respectivo de ratificación el 2 de junio del mismo año.

[5] Asimismo, la República del Ecuador suscribió la Declaración sobre el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el día 4 de junio de 2001.

---

<sup>1</sup> El presente informe fue aprobado por el Comité, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 g) y 25 del Reglamento y Normas de Procedimiento, en la sesión plenaria celebrada el día 21 de marzo de 2014, en el marco de su Vigésima Tercera Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 17 al 21 de marzo de 2014.

## **I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA**

### **1. Respuesta de la República del Ecuador**

[6] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida de la República del Ecuador en todo el proceso de análisis y, en especial, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la cual se hizo evidente, entre otros aspectos, en su respuesta al cuestionario y en la disponibilidad que siempre mostró para aclarar o completar el contenido de la misma, al igual que en el apoyo para la realización de la visita *in situ* a la que se hace referencia en el párrafo siguiente del presente informe. La República del Ecuador envió junto con su respuesta las disposiciones y documentos que estimó pertinentes. Dicha respuesta y tales disposiciones y documentos pueden consultarse en la siguiente página en “Internet” [http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_ecu.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_ecu.htm)

[7] Asimismo, el Comité deja constancia de que el Estado analizado otorgó su anuencia para la práctica de la visita *in situ* de conformidad con lo previsto en la disposición 5 de la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*, la cual se realizó durante los días 1 al 3 de octubre de 2013, por parte de los representantes de Chile y de Venezuela, en su calidad de integrantes del subgrupo de análisis, contando para ello con el apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC. La información obtenida en dicha visita se incluye en los apartados correspondientes del presente informe y su agenda se anexa al mismo, de conformidad con lo previsto en la disposición 34 de la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*.

[8] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por la República del Ecuador hasta el día 20 de junio de 2013, y la que fue aportada y le fue solicitada por la Secretaría y por los integrantes del subgrupo de análisis para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el *Reglamento y Normas de Procedimiento*; la *Metodología para el Análisis de la Implementación de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción Seleccionada en la Cuarta Ronda*; y la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*. [http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_ecu.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_ecu.htm)

### **2. Información recibida de organizaciones de la sociedad civil y /o, entre otros, de organizaciones del sector privado; asociaciones profesionales; académicos e investigadores.**

[9] El Comité no recibió, dentro del plazo fijado en el Calendario para la Cuarta Ronda, documentos de organizaciones de la sociedad civil de conformidad con lo previsto en el artículo 34 b) del Reglamento del Comité.

[10] No obstante, con ocasión de la práctica de la visita *in situ* realizada la República del Ecuador, se recabó información de la sociedad civil y del sector privado; asociaciones profesionales; académicos e investigadores que fueron invitados a participar en reuniones con tal fin, de conformidad con lo previsto en la disposición 27 de la *Metodología para la Realización de las Visitas in Situ*, cuyo listado se incluye en la agenda de dicha visita *in situ* que se anexa al presente informe. Esta información se refleja en los apartados correspondientes del mismo, en lo que resulta pertinente para sus propósitos.

## **II. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN POR EL ESTADO PARTE DE LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA LA CUARTA RONDA**

## **ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA CONVENCIÓN)**

[11] La República del Ecuador cuenta con un conjunto de órganos de control superior con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas, entre los que cabe destacar los siguientes: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS); Contraloría General del Estado (CGE); Superintendencia de Compañías; Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS); Superintendencia de Telecomunicaciones; Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; Superintendencia de Control del Poder de Mercado; Defensoría del Pueblo del Ecuador (DPE); Órganos Jurisdiccionales y Consejo de la Judicatura; Fiscalía General del Estado; Consejo Nacional contra el Lavado de Activos (CONCLA); y Subsecretaría General de Transparencia y Gestión<sup>2</sup>.

[12] A continuación se hace una breve descripción de los propósitos y funciones de los cuatro órganos seleccionados por la República del Ecuador que serán analizados en el presente informe.

[13] El CPCCS promueve e incentiva el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, propicia la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción; establece mecanismos de rendición de cuentas, veeduría ciudadana y control social en los asuntos de interés público; investiga denuncias sobre actos u omisiones que afectan a la participación ciudadana o generan corrupción; y designa autoridades.

[14] La Fiscalía General del Estado, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, dirige, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal. Durante el proceso ejerce la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito, acusará a los presuntos infractores ante el juez competente e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal.

[15] La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos”. Tiene personería jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa, e integra la Función de Transparencia y Control Social.

[16] Los órganos jurisdiccionales y el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. La Corte Nacional de Justicia es el máximo órgano de administración de justicia ordinaria y en tal calidad se encarga de administrar justicia y sancionar a los responsables de los delitos previstos en la Convención Interamericana contra la Corrupción que se encuentran tipificados en la legislación ecuatoriana.

### **1. CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL (CPCCS)**

---

<sup>2</sup> El 10 de febrero de 2014, la República del Ecuador informó sobre la creación de la Superintendencia de la Información y Comunicación, mediante la Ley Orgánica de Comunicación publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 22, de 25 de junio de 2013.

### 1.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas.

[17] El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[18] En lo que corresponde a su naturaleza, objetivos y funciones, el artículo 204 de la Constitución de la República Ecuatoriana (CRE) determina que el CPCCS hace parte de la Función de Transparencia y Control Social, y por tanto goza de personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa.

[19] Los deberes y atribuciones del CPCCS se encuentran establecidos en el artículo 208 de la CRE, el cual dispone que además de los previstos en la ley, éstos serán los siguientes: 1. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción. 2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social. 3. Instar a las demás entidades de la Función para que actúen de forma obligatoria sobre los asuntos que ameriten intervención a criterio del Consejo. 4. Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción. 5. Emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que correspondan. 6. Actuar como parte procesal en las causas que se instaren como consecuencia de sus investigaciones. Cuando en sentencia se determine que en la comisión del delito existió apropiación indebida de recursos, la autoridad competente procederá al decomiso de los bienes del patrimonio personal del sentenciado. 7. Coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos de corrupción. 8. Solicitar a cualquier entidad o funcionario de las instituciones del Estado la información que considere necesaria para sus investigaciones o procesos. Las personas e instituciones colaborarán con el Consejo y quienes se nieguen a hacerlo serán sancionados de acuerdo con la ley. 9. Organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de las comisiones ciudadanas de selección de autoridades estatales. 10. Designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias de entre las ternas propuestas por la Presidenta o Presidente de la República, luego del proceso de impugnación y veeduría ciudadana correspondiente. 11. Designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, luego de agotar el proceso de selección correspondiente. 12. Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, luego de agotar el proceso de selección correspondiente.

[20] Por lo que respecta a las excepciones en el ámbito de sus funciones, durante la visita *in situ*, el CPCCS informó que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), establece que en caso de los gobiernos autónomos descentralizados, es a ellos a quienes les corresponde principalmente, mas no únicamente, impulsar la participación ciudadana<sup>3</sup>.

[21] Adicionalmente, por lo que respecta a sus atribuciones en el fomento a la transparencia y lucha contra la corrupción, el artículo 13 de la Ley Orgánica del CPCCS (LOCPCCS) establece que estas serán: 1. Promover políticas institucionales sobre la transparencia de la gestión de los asuntos públicos, la ética en el uso de los bienes, recursos y en el ejercicio de las funciones

---

<sup>3</sup> Ver presentación en Power Point:

[http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4\\_ecu\\_CPCCS4.ppt#277,1,Slide 1](http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4_ecu_CPCCS4.ppt#277,1,Slide 1)

públicas y el acceso ciudadano a la información pública. 2. Requerir de cualquier entidad o funcionario de las instituciones del Estado la información que considere necesaria para sus investigaciones o procesos. Las personas e instituciones colaborarán con el Consejo y quienes se nieguen a hacerlo serán sancionados de acuerdo a la ley. 3. Las personas naturales o jurídicas de derecho privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, que no entreguen la información de interés de la investigación dentro de los plazos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la información, serán sancionadas por el organismo de control correspondiente a petición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar. 4. Requerir de las instituciones del sector público la atención a los pedidos o denuncias procedentes de la ciudadanía así como investigar denuncias a petición de parte, que afecten la participación, generen corrupción o vayan en contra del interés social. 5. Emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad que sean calificados por el Consejo, de acuerdo a la reglamentación interna respectiva y siempre que esta determinación no haya sido realizada por otro órgano de la misma función, además de formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que correspondan. 6. Actuar como parte procesal, en tanto los informes emitidos son de trámite obligatorio y tendrán validez probatoria, en las causas que se instauren como consecuencia de sus investigaciones. 7. Solicitar a la Fiscalía la protección de las personas que denuncien o testifiquen en las investigaciones que lleve a cabo el Consejo, a través del sistema de protección de víctimas y testigos. En caso de riesgo inminente instará la actuación inmediata de la Fiscalía.

[22] En cuanto a los mecanismos para solucionar eventuales conflictos de competencia, el artículo 436, numeral 7 de la CRE confiere a la Corte Constitucional la atribución general de dirimir conflictos de competencias o de atribuciones entre funciones del Estado u órganos establecidos en la Constitución, como el caso del CPCCS.

[23] Con respecto a mecanismos de coordinación interinstitucional, el CPCCS ha firmado 28 diferentes convenios de tipo marco<sup>4</sup> y también convenios específicos de cooperación interinstitucional con gobiernos autónomos descentralizados, instituciones públicas, universidades y organizaciones no gubernamentales. Adicionalmente, desde el mes de enero de 2013 el CPCCS ha venido trabajando con la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado en una iniciativa encaminada a construir una “Red Nacional de Protección de Derechos y Lucha Contra la Corrupción”, que contempla entre otras cosas brindar respuestas adecuadas y eficaces a la ciudadanía que presenta requerimientos o denuncias respecto a la protección de sus derechos y la lucha contra la corrupción, en las instituciones involucradas; reforzar procedimientos que permitan derivar ágilmente las demandas ciudadanas recibidas en cualquiera de estos espacios hacia la institución que sea competente; dar tratamiento preferente a grupos de atención prioritaria que enfrentan vulnerabilidad social y económica, así como contempla la realización de reuniones periódicas de seguimiento a las estrategias establecidas y a los casos remitidos, para compartir información y dar seguimiento a las acciones emprendidas.<sup>5</sup>

[24] En lo que se refiere a la manera en la que se adoptan sus decisiones, de conformidad con el artículo 39 de la LOCPCCS, éstas se toman por la mayoría absoluta de los miembros del Pleno del Consejo y, en caso de empate en la votación, la Presidenta o Presidente tiene voto dirimente. Asimismo, en cuanto a si estas decisiones son recurribles, el artículo 173 de la CRE establece que los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial.

---

<sup>4</sup> El 10 de febrero de 2014, Ecuador informó que existen a la fecha 72 convenios firmados.

<sup>5</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 114.



[25] La selección de las altas autoridades del CPCCS, que son los consejeros y consejeras, está prevista en el artículo 207, inciso final de la CRE, que establece que el Consejo se integrará por siete consejeras o consejeros principales y siete suplentes; y que los miembros principales elegirán de entre ellos a la Presidenta o Presidente, quien será su representante legal, por un tiempo que se extenderá a la mitad de su período. La selección de las consejeras y los consejeros se realizará de entre los postulantes que propongan las organizaciones sociales y la ciudadanía. El proceso de selección será organizado por el Consejo Nacional Electoral, que conducirá el concurso público de oposición y méritos correspondiente, con postulación, veeduría y derecho, a impugnación ciudadana de acuerdo con la ley.

[26] En lo concerniente al período en que las autoridades permanecen en sus funciones, el artículo 205 de la Constitución establece que *“los representantes de las entidades que forman parte de la Función de Transparencia y Control Social ejercerán sus funciones durante un período de cinco años, tendrán fuero de Corte Nacional y estarán sujetos al enjuiciamiento político de la Asamblea Nacional.”*

[27] Los detalles del proceso para elegir a las consejeras y consejeros están establecidos en los artículos 19 a 35 de la LOCPCCS, e incluyen los detalles correspondientes a requisitos, prohibiciones, convocatoria, postulaciones, proceso de admisibilidad, oposición y méritos, criterios de calificación, medidas de acción afirmativa, calificación, recalificación, difusión de resultados, impugnación, orden de asignación, proclamación y posesión, veeduría al concurso, e impedimentos para ejercer la veeduría.

[28] La determinación de los recursos humanos necesarios para su funcionamiento y la manera en que los mismos son seleccionados para su ingreso al CPCCS se rige por la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 294 de 6 de octubre de 2010. Esto incluye el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y responsabilidad por sus actuaciones, que están incluidos en la misma LOSEP.

[29] Los requisitos para el ingreso al servicio público se encuentran en el artículo 5 de la LOSEP, cuyo inciso h) establece que para ello será necesario “Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y oposición, salvo en los casos de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción”.

[30] Adicionalmente, el CPCCS cuenta con un Reglamento Interno de Administración de Personal, del 10 de abril de 2010, mismo que establece los requisitos básicos para ingresar al CPCCS, enmarcados en la Constitución y la ley orgánica de la materia vigente al momento de su expedición;<sup>6</sup> y aplica el Subsistema de Reclutamiento y Selección de Personal previsto en la LOSEP y normas técnicas del Ministerio de Relaciones Laborales, en donde se regula el procedimiento de los concursos por méritos y oposición.<sup>7</sup>

[31] En cuanto a la descripción puntual de funciones del personal del CPCCS, éstas se encuentran definidas en el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos, aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales, mediante Resolución N° MRL-2012-057, de 14 de septiembre del año 2012.

---

<sup>6</sup> Ver <http://www.cpccs.gob.ec/docs/6.CPCCS.pdf>

<sup>7</sup> Ver presentación en Power Point de la CPCCS durante la visita *in situ*:  
[http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4\\_ecu\\_CPCCS7.ppt#264,1,Slide 1](http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4_ecu_CPCCS7.ppt#264,1,Slide 1)

[32] El Estado analizado, en su respuesta<sup>8</sup>, informa que sobre la base del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos institucional se realiza progresivamente el análisis ocupacional de las posiciones que ocupan los servidores y optimizando al personal en función de sus competencias y perfiles, proporcionando la capacitación necesaria en el ámbito de sus competencias y anexan el plan de capacitación 2009-2013.<sup>9</sup>

[33] En relación con la existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o de manuales o guías relativas a las mismas, el CPCCS cuenta con un Manual de Procedimientos, aplicable no solo en Quito sino también en las oficinas provinciales; contando asimismo con el Reglamento Orgánico por Procesos y el Reglamento de funcionamiento del Pleno del CPCCS, entre otros.<sup>10</sup>

[34] El CPCCS ha desarrollado acciones de fortalecimiento institucional y de mejoramiento de la calidad, entre ellas cuenta con varios proyectos de instructivos internos para mejorar la eficiencia; el proyecto de inversión pública denominado “Desconcentración de procesos agregadores de valor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en las 24 provincias del Ecuador” aprobado por el pleno del organismo mediante resolución No. 006-209-CPCCS 2012 del 25 de octubre de 2012; y la contratación de una consultoría para elaboración de un Plan Estratégico Institucional que se espera se encuentre listo para su implementación en un futuro próximo.<sup>11</sup>

[35] El Estado analizado, en su respuesta, informa que el CPCCS, ha trabajado en el desarrollo de herramientas tecnológicas que se ajusten a la normativa y que permitan eficacia y eficiencia en el desempeño de sus actividades, permitiendo además un adecuado control de la institución, procesos que implican una cadena de producción ordenada de la organización con la utilización de recursos humanos, tecnológicos, físicos y financieros, y provee un listado detallado de estas herramientas, entre las que se encuentran los sistemas electrónicos de adquisiciones, de rendición de cuentas, los utilizados para procesos de selección de autoridades, así como los utilizados para la acreditación de veedores, entre otros.<sup>12</sup>

[36] En su respuesta, el Estado analizado informa que el CPCCS suministra A la ciudadanía, a través de su página Web, información acerca de sus objetivos y funciones; los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones; y proporciona orientación sobre cómo realizar gestiones ante el mismo. Adicionalmente, informa que a través de la Coordinación General de Comunicación Social, Comunicación Participativa y Atención al Ciudadano, ha organizado actividades en diferentes campos tales como publicaciones, multimedia, campañas de radio y televisión, atención a medios de comunicación y en general difusión de las actividades del Consejo dentro de sus tres ejes: Transparencia y lucha contra la corrupción, participación ciudadana y control social y designación de autoridades.<sup>13</sup>

[37] Por lo que respecta a la manera en que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento, el artículo 54 de la LOCPCCS dispone que el Consejo se financiará con: 1. Recursos del Presupuesto General del Estado; los mismos que serán suficientes

---

<sup>8</sup> Respuesta de la República del Ecuador al Cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 64.

<sup>9</sup> Ver plan de capacitación para el personal del CPCCS, para los años 2009-2013

[http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4\\_ecu\\_capa.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_capa.pdf)

<sup>10</sup> Respuesta de la República del Ecuador al Cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, págs. 72-75.

<sup>11</sup> *Idem*, pág. 76.

<sup>12</sup> *Idem*, págs. 77-78.

<sup>13</sup> *Idem*, págs. 90-94.

para garantizar el pleno funcionamiento y ejecución de las atribuciones conferidas a este organismo; 2. Los recursos provenientes de convenios con organismos nacionales o internacionales públicos o privados que trabajen temas relativos a la participación ciudadana, control social, transparencia y lucha contra la corrupción, previo informe de la Procuraduría General del Estado; y 3. Los demás recursos que le corresponda de acuerdo con la ley.

[38] Asimismo, el Estado analizado en su respuesta agrega que el Ministerio de Finanzas, una vez aprobado el Presupuesto General del Estado del año, asigna el presupuesto Anual del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mediante el Sistema de Gestión Financiera eSIGEF, de acuerdo con la formulación presentada por la entidad, en una sola cuenta llamada cuenta corriente única.<sup>14</sup>

[39] En lo referente a la rendición de cuentas, el CPCCS cuenta con una metodología para rendir cuentas a la ciudadanía, la cual es ejecutada por la Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas, que contempla la recopilación de información, publicación en su página Web, espacios participativos que incluyen foros ciudadanos, y la presentación del Informe de Rendición de Cuentas Institucional al Presidente de la Instancia de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social (FTCS).<sup>15</sup>

## **1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas**

[40] El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tiene un conjunto de disposiciones y/u otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 1.1. de este informe. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[41] En primer lugar, el Comité toma nota de que la Constitución de la República del Ecuador (CRE), en su artículo 208, numeral 4, establece entre los deberes y atribuciones de la CPCCS, *“investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten la participación ciudadana o generen corrupción”*. En ese mismo sentido, el artículo 13, numeral 4, de la Ley Orgánica del CPCCS (LOCPCCS), establece que deberá *“...investigar denuncias a petición de parte, que afecten la participación, generen corrupción o vayan en contra del interés social”*. Adicionalmente, el artículo 13 de la LOCPCS, en su párrafo 5, estipula que es atribución del CPCCS *“Emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad que sean calificados por el Consejo, de acuerdo a la reglamentación interna respectiva y siempre que esta determinación no haya sido realizada por otro órgano de la misma función además de formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que correspondan”*.

[42] Sobre el particular, los representantes del CPCCS manifestaron durante la visita *in situ*, que los informes concluyentes de investigación del Consejo no siempre son acogidos en la investigación y procesamiento de conductas delictivas tipificadas en el Código Penal, y que se encuentran coordinando con la Fiscalía para trabajar conjuntamente en el manejo de la información, evitar la duplicación de investigaciones y optimizar recursos del estado. En vista de lo anterior, el Comité considera que existe la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a los fines de dar mayor efectividad a la disposición constante en el artículo 13, numeral 6 de la LOCPCCS que dispone que los informes emitidos por el CPCCS son de trámite obligatorio y tienen validez probatoria. El Comité formulará recomendaciones (ver recomendación 1.4.1. del capítulo II de este informe)”

---

<sup>14</sup> *Idem*, págs. 108-109.

<sup>15</sup> *Idem*, págs. 116-118.

[43] En segundo lugar, en relación con la protección de los derechos de participación ciudadana en la gestión pública, el Comité toma nota de que el referido artículo 208, numeral 4, de la CRE y el artículo 13 de la LOCPCCS, establecen que corresponde al CPCCS investigar “*actos u omisiones que afecten la participación ciudadana*” o “*que afecten el interés social*”, mientras que los numerales 5 y 6 establecen respectivamente que el Consejo deberá “*Emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones que correspondan*” y “*actuar como parte procesal en las causas que se instauran como consecuencia de sus investigaciones...*”.

[44] Al respecto el Comité advierte que no se encuentra en ninguna normativa una definición que determine claramente en qué consisten los actos u omisiones que determinen la afectación del interés social que se supone deberá investigar el CPCCS. Consecuentemente, no queda claro tampoco cómo se determina la responsabilidad que éstos actos u omisiones generan, a quién se le formularían las recomendaciones, cuál sería el alcance de las investigaciones realizadas, ante qué autoridad habría que impulsar las acciones legales que correspondieran, ni cuál sería la instancia ante la cuál se instaurarían estas causas como consecuencia de dichas investigaciones. En vista de lo anteriormente expuesto, el Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.2. del capítulo II de este informe)

[45] En tercer lugar, el Comité observa que además de las funciones de lucha contra la corrupción que le confiere la CRE, el CPCCS tiene entre sus cometidos el fomento a la participación de la ciudadanía en la gestión pública. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 208 de la CRE, el CPCCS deberá “*promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción*”. Asimismo, el párrafo 2 del mismo artículo 208, les encomienda “*... coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social*”. Sobre el particular, durante la visita in situ, los representantes del CPCCS indicaron que la tarea de designación de altas autoridades que les confiere el artículo 208 de la CRE, en sus numerales 9 al 12, les ocupa un alto porcentaje de tiempo y de recursos institucionales considerando el total disponible para cumplir a cabalidad sus tres principales atribuciones, las cuales tienen igual relevancia según el mandato de los artículos 207 y siguientes de la CRE. Al respecto, el Comité considera que el Estado analizado podría fortalecer estas áreas, de manera que el CPCCS cuente con recursos humanos y presupuestarios suficientes para que pueda ejercer a cabalidad las funciones que la CRE le encomienda con respecto a la promoción de mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública, y a la prevención y lucha contra la corrupción, y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.3. del capítulo II de este informe)”

[46] En ese sentido, el Comité toma nota que durante la *visita in situ*, durante las entrevistas con las organizaciones de la sociedad civil, sector privado y académicos, el representante de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) – Ecuador, expresó durante el panel correspondiente a mecanismos de participación de la sociedad civil en la gestión pública, que una de las dificultades percibidas era que el CPCCS estaba más involucrado en la selección de las autoridades de control que en la función de apoyo a la participación ciudadana.

[47] En cuarto lugar, durante la visita *in situ*, los representantes del CPCCS señalaron entre sus dificultades que, a diferencia de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), que fue su organismo predecesor, el CPCCS no está facultado para actuar de oficio. En efecto, el artículo 208 de la CRE, en su numeral 4 establece claramente que será función del CPCCS “*Investigar denuncias sobre actos u omisiones ...*”. Con base en ello, es claro que la Constitución misma establece que el Consejo investigará solamente denuncias y no le otorga la facultad de

iniciar investigaciones de oficio. Si bien el Comité toma nota de esta dificultad, debido a que es una cuestión de orden constitucional, no se pronunciará sobre ello.

[48] De la misma manera, durante la visita *in situ*, los representantes del CPCCS manifestaron que entre sus dificultades se encontraba el hecho de que no cuentan con facultades de sanción. Al respecto, el Comité advierte que es la misma Constitución la que, en el numeral 5 de su artículo 208, instruye al CPCCS para que emita informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, formule recomendaciones necesarias e impulse las acciones legales que correspondan, pero no lo faculta para imponer sanciones. Al respecto, el Comité toma nota de la dificultad expresada por el CPCCS, pero siendo una cuestión de orden constitucional, tampoco se pronunciará al respecto.

[49] En quinto lugar, el Comité toma nota de que la CRE, en su artículo 208, numeral 3, instruye al CPCCS a “*Instar a las demás entidades de la Función para que actúen de forma obligatoria sobre los asuntos que ameriten intervención a criterio del Consejo*”. Asimismo, como ha quedado registrado en párrafos anteriores, la Carta Magna faculta al CPCCS a formular recomendaciones (numeral 5 del artículo 208) e impulsar acciones legales. Al respecto, durante la visita *in situ* el CPCCS expresó que uno de sus retos era la “obligación de las entidades públicas de recoger las recomendaciones resultado de la contraloría social”<sup>16</sup>, ya que estas entidades no siempre implementan las recomendaciones emitidas por el CPCCS.

[50] Sobre el particular, el Comité señala que la Constitución no otorga una naturaleza obligatoria a dichas recomendaciones, sin embargo la LOCPCCS establece en su artículo 13, numeral 6, que los informes emitidos por el CPCCS son de trámite obligatorio y tienen validez probatoria, como fue mencionado anteriormente. Asimismo, la Constitución faculta al CPCCS a instar a las entidades de la Función para que actúen de forma obligatoria sobre los asuntos que ameriten su intervención. Al respecto, el Comité considera que el Estado analizado podría llevar a cabo un estudio sobre el grado de implementación de las recomendaciones formuladas por el CPCCS y, en los casos en que éstas no están siendo implementadas, cuál es la causa de ello, a los fines de identificar retos y adoptar medidas correctivas. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.4. del capítulo II de este informe)

[51] En sexto lugar, el Comité advierte que el numeral 7 del artículo 208 de la CRE, establece entre las funciones del CPCCS el coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos de corrupción, y que el artículo 13 de la LOCPCCS, en su numeral 7 establece que el CPCCS solicitará a la Fiscalía la protección de las personas que denuncien o testifiquen en las investigaciones que lleve a cabo el Consejo, a través del sistema de protección de víctimas y testigos. Al respecto, durante la visita *in situ*, los representantes del CPCCS pusieron de presente que, si bien existe un sistema de protección para víctimas y testigos en el proceso penal, no existe un sistema propio de protección para los denunciantes de actos de corrupción en otros ámbitos tales como el administrativo. En ese sentido, resaltaron la necesidad de garantizar los derechos de estos denunciantes, especialmente de los servidores públicos, incluida su estabilidad laboral.

[52] El Comité es consciente de la importancia que tiene, para el logro de los propósitos del CPCCS, el que se fortalezca el marco jurídico de protección de denunciantes y de quienes puedan aportarle información valiosa para los procedimientos de investigación que son de su competencia, pero teniendo en cuenta que el Comité ya le formuló al Estado analizado recomendaciones en materia de protección de denunciantes de actos de corrupción en las dos

---

<sup>16</sup> [http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4\\_ecu\\_CPCCS3.ppt#263,8,ACOMPANAMIENTO FUNCION JUDICIAL RETOS](http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4_ecu_CPCCS3.ppt#263,8,ACOMPANAMIENTO FUNCION JUDICIAL RETOS)

primeras rondas de análisis, se pronunciará al respecto en el acápite del presente informe correspondiente al seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda de Análisis.

[53] Cabe señalar, que en la visita *in situ*, durante las entrevistas con organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, investigadores y académicos, los representantes de la Fundación ESQUEL expresaron que existe un desinterés por parte de la ciudadanía para denunciar actos de corrupción, debido a temor, desinformación y falta de protección.

[54] En séptimo lugar, por lo que respecta a la manera en que se da curso a las denuncias, quejas y reclamos relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su servicio, el Comité toma nota de que el Estado analizado puso de presente en su respuesta al cuestionario que *“No existe una unidad de reclamos, quejas o denuncias, pero se está preparando el delineamiento a seguir dentro de la estructura organizativa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para atender todos los reclamos, quejas y controversias que deban presentarse con todas las formalidades”*.<sup>17</sup> En ese sentido, durante la visita *in situ*, los representantes del CPCCS agregaron que han elaborado una propuesta de reformas al Reglamento Interno de Administración de Personal del CPCCS y un proyecto de Reglamento para el trámite de quejas y pedidos sobre actos u omisiones de las y los funcionarios, servidores y obreros del CPCCS, que están en estudio para su posterior presentación, revisión y aprobación del Pleno de la CPCCS.<sup>18</sup> El Comité considera que es importante que el CPCCS cuente dentro de su estructura organizativa con una reglamentación interna para el trámite de estas quejas y denuncias, sobre todo teniendo en cuenta la naturaleza del Consejo y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.5. del capítulo II de este informe)

[55] En octavo lugar, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, los representantes del CPCCS indicaron que el Consejo, si bien cuenta con un auditor interno nombrado por el Contralor General, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCGE), no cuenta con una unidad de auditoría interna. Asimismo, el artículo 14 de la LOCGE dispone que *“Las instituciones del Estado, contarán con una Unidad de Auditoría Interna, cuando se justifique, que dependerá técnica y administrativamente de la Contraloría General del Estado, que para su creación o supresión emitirá informe previo. El personal auditor, será nombrado, removido o trasladado por el Contralor General del Estado y las remuneraciones y gastos para el funcionamiento de las unidades de auditoría interna serán cubiertos por las propias instituciones del Estado a las que ellas sirven y controlan...”*

[56] En ese contexto, el Comité considera que Estado analizado podría analizar si es que el nivel de responsabilidad y funciones asignados al CPCCS justifica la creación de una Unidad de Auditoría Interna<sup>19</sup>, de conformidad con el artículo 14 de la LOCGE y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.6. del capítulo II de este informe).

[57] En noveno lugar, el Estado analizado, en su respuesta, informa que dado que el Reglamento Interno de Administración de Personal del CPCCS fue aprobado con anterioridad a la expedición de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), actualmente se encuentran en revisión los siguientes nuevos proyectos de reglamento para adaptarlos a las disposiciones de dicha Ley y su Reglamento de aplicación: Reglamento Interno del CPCCS para la administración de Talento Humano de

---

<sup>17</sup> Respuesta de la República del Ecuador al Cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 105.

<sup>18</sup> Ver [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_ecu\\_resum.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_resum.pdf), pág. 19.

<sup>19</sup> En su documento de observaciones al proyecto de informe preliminar, el Estado analizado informó que CPCCS ha creado en su Reglamento Orgánico por Procesos la “Dirección Nacional de Auditoría Interna” la cual está a cargo de un Director que al momento no está designado. Sin embargo, el CPCCS está en proceso de designación del Director en coordinación con la Contraloría General del Estado

Trabajadores amparados por el Código de Trabajo; Reglamento Interno de Administración de Personal del CPCCS; y Reglamento de Sanciones para los Servidores y Servidoras del CPCCS. Sobre el particular, el Comité resalta la importancia de mantener actualizados los reglamentos internos, de manera que estén en concordancia con la legislación vigente, y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.7. del capítulo II de este informe)

[58] En décimo lugar, por lo que respecta al tema de capacitación, durante la visita *in situ*, al analizar el presupuesto del CPCCS correspondiente al año 2012, se identificó que de un presupuesto total codificado de USD \$14.345.659 se consideró una partida ascendente de USD \$203.244,07 para la capacitación del personal de todas las áreas de la entidad, habiéndose ejecutado durante el 2012 el setenta y dos por ciento de este monto. Sobre el particular, el Comité considera que el Estado analizado podría fortalecer la capacitación sobre temas anticorrupción dentro de su presupuesto, a los efectos de contar con personal suficientemente capacitado y concientizado, sobre todo teniendo en consideración las funciones que le confiere al CPCCS su propia Constitución en el tema de prevención y lucha contra la corrupción. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.8. del capítulo II de este informe)

[59] Finalmente, durante la visita *in situ*, el CPDDS puso de presente entre sus necesidades de cooperación técnica, dentro del ámbito de sus competencias, el desarrollo de herramientas metodológicas; seguimiento, monitoreo y evaluación; sistematización y registro histórico; intercambio de prácticas, mecanismos o herramientas innovadoras; y el diseño y la elaboración de material educativo.<sup>20</sup> Al respecto, el Comité toma nota de las necesidades puestas de presente por el CPCCS, en cuanto a que el Estado analizado le proporcione el apoyo necesario e invita a los Estados Parte, así como a otras organizaciones de cooperación, a asistir a la Institución en estos temas. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.9. del capítulo II de este informe)

### 1.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[60] A través de la respuesta del Estado analizado al cuestionario y de la visita *in situ* se recabó información relativa a los resultados del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), de la cual se destaca la siguiente:

[61] En primer lugar, el Estado analizado, con ocasión de la visita *in situ*, presentó información estadística con respecto a los resultados de su función de detección e investigación de actos de corrupción, de la cual se destaca la siguiente:

#### a. Casos heredados de las extintas entidades desde el 2008 al 2010 y su estado actual.

**Cuadro No. 1**

<b>VARIABLE</b>	<b>Secretaría Nacional Anticorrupción (SNA)</b>	<b>Comisión de Control Cívico contra la Corrupción (CCCC)</b>	<b>TOTAL</b>
<b>No admitidos</b>	2242	255	<b>2497</b>
<b>Seguimiento</b>	319	36	<b>355</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2561</b>	<b>291</b>	<b>2852</b>

<sup>20</sup> Ver [http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4\\_ecu\\_CPCCS3.ppt#265,10,NECESIDADES COOPERACIÓN TÉCNICA](http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4_ecu_CPCCS3.ppt#265,10,NECESIDADES%20COOPERACION%20TECNICA)

[62] Sobre el particular, el Comité nota que la información del Cuadro No. 1 indica cuántas de las causas heredadas por el CPCCS durante el período de transición 2008/2010 fueron admitidas y cuántas fueron rechazadas, pero no indica cuántas fueron suspendidas por cualquier razón, cuántas resultaron en extinción de la responsabilidad por no haber sido concluidas en los términos establecidos, cuántas fueron archivadas sin que se hubiera podido adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado, ni a cuántas se les dio curso hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión.

**b. Casos presentados ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo a partir de marzo de 2010.**

**Cuadro No. 2**

<b>ADMISIÓN</b>				
<b>VARIABLES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>TOTAL</b>
<b>ADMITIDOS</b>	340*	12	133	485
<b>NO ADMITIDOS</b>	307	8	237	552
<b>ARCHIVADOS</b>	217	43	128	388
<b>TRANSPARENCIA</b>	228	148	55	431
<b>TOTAL</b>	1.092**	211	553	1.856

\*El valor incluye los 40 casos que pertenecen al CPCCS - Transitorio

\*\*El valor incluye los 314 casos del CPCCS – Transitorio

**Cuadro No. 3**

<b>INVESTIGACIÓN</b>				
<b>VARIABLES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Archivado</b>	7	226	65	298
<b>En patrocinio</b>	4	90	93	187
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>316</b>	<b>158</b>	<b>485</b>

[63] Al respecto, el Comité observa que los Cuadros 2 y 3 indican cuántas causas fueron admitidas, cuántas fueron no admitidas, cuántas fueron archivadas y a cuántas se les dio trámite interno en las Subcoordinaciones de Transparencia y Patrocinio. Sin embargo, no es posible conocer cuántas de ellas resultaron en extinción de la responsabilidad por no haber sido concluidas en los términos establecidos, cuántas se encontraban suspendidas por cualquier razón, y cuántas se encontraban en condiciones de permitir que con base en ellas se pudiera adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado.

**Cuadro No. 4**

<b>PATROCINIO</b>		
<b>Ex SNA y CCC</b>		265
<b>CPCCS – Transitorio</b>		40
<b>Archivo</b>		90
<b>Instituciones</b>	Contraloría	88
	Fiscalía	14



<b>TOTAL</b>	<b>497</b>
--------------	------------

[64] En relación con el cuadro No. 4 arriba, el Comité observa que la información no se encuentra desagregada por año y no es posible conocer si es que las 88 causas remitidas a la CGE y las 14 a la Fiscalía fueron presentadas todas en 2012 o si es que lo fueron a partir del 2008; como tampoco se indica si es que todas estas causas están relacionadas con indicios de actos de corrupción y de ser así, cuáles, o si se debieron a causas relacionadas con acciones u omisiones que afectarían los derechos de participación o interés social.

[65] En vista de las observaciones anteriores, el Comité considera que con base en la información suministrada por el Estado no es posible establecer de manera clara cuántas causas relacionadas con actos de corrupción en los últimos cinco años fueron suspendidas por cualquier razón, cuántas resultaron en extinción de la responsabilidad por no haber sido concluidas en los términos establecidos, cuántas fueron archivadas sin que se hubiera podido adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado, y a cuántas se les dio curso hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión, a los fines de identificar retos y recomendar medidas correctivas, y por lo tanto formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.10 del capítulo II de este informe).

[66] Asimismo, el Comité también estima conveniente la elaboración de información estadística sobre los procedimientos disciplinarios que se siguen al interior del CPCCS, con sujeción a la LOSEP y su Reglamento, así como al Reglamento Interno de Administración de Personal del CPCCS, entre otras normativas, que incluya, entre otros aspectos, el número total de casos investigados; el número de decisiones adoptadas en relación con los mismos; el número de estas decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos (ver recomendación 1.4.11 del capítulo II de este informe)

[67] Finalmente, el Comité también advierte que, como se hace referencia en la sección 1.2. anterior, relativa a la adecuación del marco jurídico, de conformidad con el numeral 5 del artículo 208 constitucional, parte de la función del CPCCS, además de emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad e impulsar las acciones legales que correspondan, es la de formular las recomendaciones necesarias. En ese sentido, el Comité considera que sería de gran utilidad al Estado analizado que el CPCCS compilara estadísticas relativas a cuántas recomendaciones han emitido, cuáles de ellas corresponden al tema de prevención y lucha contra la corrupción, cuántas han sido implementadas y por cuáles instituciones, cuántas se encuentran aún en proceso de implementación, y cuántas no se han implementado y las razones de ello, a efectos de identificar retos y tomar medidas correctivas. En vista de lo anteriormente expuesto, el Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.12. del capítulo II de este informe)

#### **1.4. Conclusiones y recomendaciones**

[68] Con base en el análisis integral realizado con respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[69] **La República del Ecuador ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 1 del capítulo II de este informe.**

[70] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 1.4.1. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional, cuando sea apropiado, entre el CPCCS, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Contraloría General del Estado (CGE), a los fines de dar mayor efectividad a la disposición constante en el artículo 13, numeral 6 de la LOCPCCS que dispone que los informes emitidos por el CPCCS son de trámite obligatorio y tienen validez probatoria (ver sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.2. Considerar asimismo el desarrollo del artículo 208, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE), así como el artículo 13, numeral 4 de la Ley Orgánica del CPCCS (LOCPCCS), a los fines de definir con claridad en qué consisten los actos u omisiones “*que afecten el interés social,*” que el CPCCS debe investigar; así como la manera en que se determina la responsabilidad que éstos generan, a quién se le formularían recomendaciones, cuál sería el alcance de las investigaciones realizadas, ante qué autoridad habría que impulsar las acciones legales que correspondieran, y cuál sería la instancia ante la cual se instaurarían estas causas como consecuencia de dichas investigaciones (ver sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.3. Fortalecer las áreas del CPCCS que tengan dentro de sus funciones la de prevención y lucha contra la corrupción, el fomento y promoción de la participación de la ciudadanía en la gestión pública, de manera que cuente con los recursos humanos y presupuestarios suficientes para poder cumplir a cabalidad con las funciones que le asigna la Constitución y la LOCPCCS, teniendo en consideración los recursos disponibles (ver sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.4. Llevar a cabo un estudio sobre el grado de implementación de las recomendaciones que se derivan de los informes realizados por el CPCCS, en los cuales se hayan determinado indicios de responsabilidades, y se hayan remitido a las autoridades competentes; y, en los casos en que estas recomendaciones no estén siendo implementadas por las entidades públicas, analizar cuál es la causa de ello, a los fines de identificar retos e implementar medidas correctivas. (ver sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.5. Tomar las medidas que sean necesarias para asegurar que el CPCCS cuente con una estructura organizativa y una reglamentación interna para el trámite de las denuncias, quejas y reclamos relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su servicio (ver sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.6. Crear una Unidad de Auditoría Interna en el CPCCS, en los términos del Capítulo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCGE) (ver sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.7. Asegurar que los reglamentos internos de recursos humanos del CPCCS estén actualizados, de manera que se encuentren en concordancia con la legislación vigente en la materia (ver sección 1.2. del capítulo II de este informe).

- 1.4.8. Fortalecer dentro de su presupuesto el rubro destinado a la capacitación sobre temas anticorrupción, teniendo en cuenta los recursos disponibles, a los efectos de contar con personal suficientemente capacitado y concientizado en la materia, sobre todo teniendo en consideración las funciones que le confiere al CPCCS su propia Constitución en el tema de prevención y lucha contra la corrupción (ver sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.9. Promover las gestiones necesarias con otros Estados y organizaciones de cooperación para proveer al CPCCS con la cooperación técnica necesaria para el desarrollo de herramientas metodológicas; seguimiento, monitoreo y evaluación; sistematización y registro histórico; intercambio de prácticas, mecanismos o herramientas innovadoras; y el diseño y la elaboración de material educativo (ver sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.10. Completar y desglosar por años la información estadística referida a la detección de los actos de corrupción, incluyendo el período de transición, de manera que incluya datos que permitan establecer de manera clara cuántas causas fueron suspendidas por cualquier razón, cuántas resultaron en extinción de responsabilidad por no haber sido concluidas en los términos establecidos, cuántas fueron archivadas sin que se hubiera podido adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado, y a cuántas se les dio curso hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión, a los fines de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas (ver sección 1.3. del capítulo II de este informe).
- 1.4.11. Elaborar información estadística sobre los procedimientos disciplinarios que se siguen al interior del CPCCS, con sujeción a la LOSEP y su Reglamento, así como al Reglamento Interno de Administración de Personal del CPCCS, entre otras normativas, que incluya, entre otros aspectos, el número total de casos investigados; el número de decisiones adoptadas en relación con los mismos; el número de estas decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos, en orden a identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas (ver sección 1.3. del capítulo II de este informe).
- 1.4.12. Compilar estadísticas relativas a cuántas recomendaciones ha emitido el CPCCS, cuáles de ellas corresponden al tema de prevención y lucha contra la corrupción, cuántas han sido implementadas y por cuáles instituciones, cuántas se encuentran aún en proceso de implementación, y cuántas no se han implementado y las razones de ello, a efectos de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas (ver sección 1.3. del capítulo II de este informe).

## **2. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (FGE)**

### **2.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas.**

[71] La Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[72] En lo que corresponde a su naturaleza, el artículo 194 de la Constitución de la República Ecuatoriana (CRE), dispone que la FGE es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, que funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera; y cuya máxima autoridad y representante legal será el o la Fiscal General, quien actuará con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso.

[73] Por lo que respecta a sus objetivos y funciones, el artículo 195 de la CRE establece que la FGE *“dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal...”* Adicionalmente, no se contemplan excepciones al ámbito de sus funciones.

[74] En lo que se refiere a mecanismos de coordinación interinstitucional, el Estado analizado, en su respuesta indica que cuenta con convenios de cooperación con instituciones tales como el Ministerio del Interior, Policía Nacional, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Consejo de la Judicatura, Ministerio de Justicia, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Secretaría Nacional de Planificación, Defensoría Pública, Asamblea Nacional, Función de Transparencia y Control Social, Contraloría General del Estado, a fin de cumplir con sus objetivos, metas y demás competencias asignadas por la Constitución y la ley, asignaciones que pudieren darse en forma directa o indirecta.<sup>21</sup> Asimismo, se crearon las Unidades Interinstitucionales de Flagrancias, generadas en proyecto Interinstitucional con el Consejo de la Judicatura y todos los demás actores del proceso Penal para reducir tiempos en el tratamiento de las *noticias criminis* de tipo flagrantes y para ello cuentan con dos unidades localizadas en Quito y Guayaquil.<sup>22</sup>

[75] En relación con los mecanismos para obtener el apoyo de la ciudadanía para el cumplimiento de sus funciones, durante la visita *in situ*, los representantes de la FGE informaron que cuentan con 35 puntos a nivel nacional del servicio de atención integral – SAI, que consiste en lugares físicos con salas de espera, sistemas organizados de atención (turnos) y cubículos con total privacidad para el relato de los hechos por parte de los usuarios de la administración de justicia que acuden a denunciar en la Fiscalía.<sup>23</sup>

[76] En lo concerniente a la manera en que se adoptan sus decisiones, el Estado analizado, en su respuesta, indica que las decisiones se toman de forma jerárquica de acuerdo a su estructura organizacional. Asimismo, señalaron que el ámbito de competencia de la Fiscalía General del Estado, los Fiscales Provinciales y los Fiscales en general, adoptan decisiones, según la fase y/o etapa del proceso penal en la que se encuentre el proceso, mediante resoluciones, a fin de cumplir a cabalidad con las funciones a ellos asignadas según la Constitución y demás normas penales, tanto adjetivas como sustantivas.<sup>24</sup>

[77] Por lo que corresponde a los recursos de revisión sobre las decisiones de la FGE, el artículo 76 de la CRE, numeral 7, apartado m) dispone que: *“En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluye como garantía básica la posibilidad de recurrir el fallo o resolución en*

---

<sup>21</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, págs. 110-113.

<sup>22</sup> *Ídem*, pág. 67.

<sup>23</sup> Ver presentación Power Point en [http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4\\_ecu\\_fge4.ppt](http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4_ecu_fge4.ppt)

<sup>24</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 38.

*todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos*". En tal sentido, el Estado analizado, en su respuesta, señala que todo sujeto que interviene en un proceso penal tiene derecho a interponer los recursos que distingue el Código de Procedimiento Penal<sup>25</sup>.

[78] En lo concerniente a sus máximas autoridades, el artículo 195 de la CRE, señala que *"...La Fiscal o el Fiscal General es su máxima autoridad y representante legal y actuará con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso"*. Asimismo, el artículo 196 constitucional establece que el o la Fiscal General del Estado deberá reunir los siguientes requisitos: 1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos; 2. Tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país y conocimientos en gestión administrativa; y 3. Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal por un lapso mínimo de diez años.

[79] En lo tocante al término de sus funciones, el citado artículo 196 de la CRE dispone que el o la Fiscal General del Estado desempeñará sus funciones durante seis años y no podrá ser reelegido(a). Asimismo, el artículo 208, numeral 11 de la CRE, en concordancia con el artículo 283 de la Función Judicial, dispone que la designación del Fiscal General le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), de acuerdo a los procedimientos establecidos en los artículos 120, 209 y 210 constitucionales.

[80] En lo referente a la instancia competente para exigir al Fiscal General responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de su permanencia en el cargo, el artículo 131 de la CRE dispone que la Asamblea Nacional podrá enjuiciar políticamente al Fiscal General por incumplimiento de sus funciones, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y su destitución requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea nacional.

[81] Por cuanto a la atención de reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal al servicio de la FGE, compete al Consejo de la Judicatura su conocimiento, tramitación y resolución. Para este proceso se exceptúa al Fiscal General del Estado, quien está sometido a fiscalización de la Asamblea Nacional<sup>26</sup>.

[82] En relación con la determinación de los recursos humanos necesarios para su funcionamiento y en la que son provistos los mismos, el Estado analizado, en su Respuesta al cuestionario, informa que los cargos de nivel jerárquico superior son de libre nombramiento y remoción y que estos están listados en el artículo 8 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional de la FGE<sup>27</sup>; a excepción del Fiscal General del Estado que es un cargo por periodo fijo, de conformidad con el artículo 196 de la CRE que indica que desempeñará sus funciones durante seis años y no podrá ser reelegido; y de los Fiscales Provinciales que de acuerdo al artículo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial pertenecen a la carrera fiscal.

[83] Por otra parte, el artículo 52 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que todo ingreso de personal de la Función Judicial se realizará mediante concurso público de oposición y méritos, sujeto a procesos de impugnación, control social y se propenderá a la paridad entre hombres y mujeres. Al respecto, siendo que la FGE forma parte de la Función Judicial, esta norma le es aplicable. Asimismo, el Estado analizado en su respuesta informó que los aspirantes a puestos que no pertenecen al nivel jerárquico superior son seleccionados

---

<sup>25</sup> *Ídem*, págs. 38-39.

<sup>26</sup> *Ídem*, pág. 46.

<sup>27</sup> *Ídem*, pág. 53.

mediante concurso de méritos y oposición, normado y supervisado por el Consejo de la Judicatura, mediante instructivo No. 140-2012<sup>28</sup>.

[84] Las inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades se encuentran establecidos en los artículos 77, 78, 79, 102, 103, 104, 107, 108 y 109 del Código Orgánico de la Función Judicial.

[85] En lo que corresponde a manuales u otros documentos en los que se describan las funciones del personal a su servicio, el Estado analizado, en su respuesta, informa que la FGE cuenta con el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Cargos del Ministerio Público, vigente desde 2007<sup>29</sup>. Adicionalmente cuenta con otros documentos tales como el Manual de Políticas de Administración de Recursos Humanos, el Manual de Evaluación del Desempeño y el Manual del Subsistema de Planificación de Recursos Humanos.

[86] Por lo que toca a la capacitación periódica para el personal en relación con sus funciones, el Estado analizado en su respuesta informa que desde el año 1997 la FGE cuenta con la Dirección Nacional de la Escuela de Fiscales y que, según Resolución No 003-A-FGE-2012 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, aprobado el 23 de marzo del 2012, la misión de la Escuela de Fiscales es: *“Formular, coordinar y ejecutar programas de capacitación para fortalecer los conocimientos de los servidores de la Fiscalía General del Estado, a fin de mejorar sus niveles de competencia y que puedan desarrollar con eficacia sus atribuciones y responsabilidades, lo que pueda contribuir a su profesionalización, permanencia y promoción dentro de la carrera fiscal y fiscal administrativa”*<sup>30</sup>.

[87] Por lo que respecta a la existencia de procedimientos documentados las tareas y acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de calidad implementadas, el Estado analizado cuenta con el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Fiscalía General del Estado<sup>31</sup>, el cual de conformidad con la información puesta de presente durante la visita *in situ*, se encuentra en proceso de implementación. Asimismo, de conformidad con el artículo 9 del Estatuto, se ha integrado ya el Comité de Gestión de Calidad de Servicio y de Desarrollo Institucional, que tiene la responsabilidad de proponer, monitorear y evaluar la aplicación de las políticas, normas y prioridades relativas al mejoramiento de la eficiencia institucional; han creado dos coordinaciones para mejorar la coordinación dentro de la institución; y se ha creado el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que implica incorporación de peritos a la FGE.<sup>32</sup>

[88] En lo correspondiente a la implementación de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de sus labores, el Estado analizado, en su respuesta, informa que, entre otros, se inició la automatización de procesos con un Plan de Diseño y Desarrollo de la Herramienta Informática de Registros de Impulsos Fiscales (Macro 2). Asimismo informaron que *“También se inició con el Proyecto de Archivos físicos de las causas en todas las provincias del país, que actualmente funcionan incluso con herramienta informática propia para Gestión de estos documentos físicos y con los estándares de tratamiento de documentos enmarcados en procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional.- Estos sitios permiten hoy por hoy un rápido acceso a los documentos por*

---

<sup>28</sup> *Ídem*, págs. 53-54.

<sup>29</sup> *Ídem*, pág. 61.

<sup>30</sup> *Ídem*.

<sup>31</sup> Registro Oficial, Suplemento 268, 23 de marzo de 2012.

<sup>32</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, págs. 65-69.

Ver también [http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicio4\\_ecu\\_fge3.ppt](http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicio4_ecu_fge3.ppt)

*parte de abogados y otros actores del Sector Justicia que requieren de copias de expedientes físicos para trámites, a la vez que brindan seguridad en el tratamiento documental y acceso a los expedientes.*”<sup>33</sup> Por otra parte, durante la visita *in situ*, informaron que cuentan con un nuevo sistema electrónico de causas, que agiliza en gran parte el trabajo de la FGE.

[89] En lo tocante a la manera en la que se suministra a los ciudadanos información acerca de sus objetivos y funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones ante los mismos, la FGE informó durante la visita *in situ*, que esto se realiza a través de la Dirección de Comunicación Social cuyo objetivo es generar procesos informativos y comunicacionales eficientes, oportunos e incluyentes sobre la gestión de la Fiscalía a través de la revista institucional “Fiscalía Ciudadana”, comunicados y boletines de prensa, el portal institucional de Internet de la FGE, redes sociales, material impreso, contacto con los medios de comunicación, y el centro de llamadas 1800- Fiscalía.

[90] En lo que se refiere a los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su servicio, puesto que la FGE forma parte de la Función Judicial, las denuncias, quejas o reclamos en contra de sus funcionarios son competencia del Consejo de la Judicatura, conforme lo dispuesto en los artículos 198 y 181 de la Constitución, organismo cuyos procedimientos serán analizados en la sección correspondiente a la Función Judicial.

[91] Sin perjuicio de lo expresado, la Dirección de Gestión Procesal Penal de la FGE es la encargada de revisar los casos en los que servidores de la Fiscalía General del Estado, en el ejercicio de sus funciones inobservan las normas de carácter procesal o incurren en conductas que constituyen infracciones de carácter disciplinario, de este modo la Dirección de Gestión Procesal Penal recibe la denuncia o queja y procede a analizar los contenidos o documentos que se anexan. De encontrar algún indicio de responsabilidad administrativa, se remite al Consejo de la Judicatura para el procedimiento y sanción disciplinaria correspondiente, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar.

[92] La manera en que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para el funcionamiento de la FGE está contemplada en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en sus artículos 95, 96, 108-111 y 113.

[93] Finalmente, en lo que toca a la rendición de cuentas, según el artículo 12, literal b), numeral 9 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la FGE, el Fiscal General del Estado deberá presentar a la ciudadanía, a la Asamblea Nacional y al Consejo de la Judicatura, un informe anual de labores/rendición de cuentas, que incluirá necesariamente una relación de las causas y procesos judiciales en los que hayan intervenido, clasificados por materias, clase y número de solicitudes recibidas, y las medidas adoptadas para su atención y trámite; así como los datos estadísticos que permitan una visión clara de la gestión realizada. Por otra parte, la Secretaría General de la FGE es la encargada de recopilar y procesar la información generada por cada una de las direcciones y dependencias, a fin de que la Dirección de Comunicación Social de la Institución realice la rendición de cuentas institucional

## **2.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas**

---

<sup>33</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 67.

[94] La Fiscalía General del Estado (FGE) tiene un conjunto de disposiciones y/u otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 2.1. de este informe. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[95] En primer lugar, en relación con la determinación de los recursos humanos necesarios para su funcionamiento y la manera en que son provistos los mismos, el Comité observa que si bien el Estado analizado en su respuesta indica que los cargos de nivel jerárquico superior son de libre nombramiento y remoción, de conformidad con el artículo 8 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional de la FGE (EOGOGFE), este artículo simplemente lista cuáles son los cargos directivos, pero no dispone en ninguna parte que estos son los de libre nombramiento y remoción.

[96] En efecto, el artículo 8 del EOGOGFE lista 18 cargos directivos, entre los cuales se encuentra el cargo del Fiscal General, que no es de libre nombramiento y remoción, sino que se rige por su propio procedimiento de acuerdo con el artículo 208, numeral 11 la CRE, en concordancia con el artículo 283 de la Función Judicial y los artículos 120, 209 y 210 constitucionales<sup>34</sup>. El Comité tampoco encuentra que se encuentre claramente especificado en ninguna normativa cuáles son los puestos de libre nombramiento y remoción, y considera que el Estado analizado podría determinar esto de manera clara dentro de la normativa correspondiente y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.1. del capítulo II de este informe)

[97] En segundo lugar, por lo que respecta a manuales en los que se describen las funciones del personal a su servicio, el Comité advierte que si bien la FGE cuenta con un manual de clasificación de cargos, éste es anterior a la Constitución de 2008. En efecto, se trata del documento identificado como “Manual de Clasificación de Cargos del Ministerio Público”<sup>35</sup>. Al respecto, el Comité considera que el Estado analizado podría actualizar este manual de manera que esté al día, de conformidad con CRE vigente<sup>36</sup>. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.2. del capítulo II de este informe)

[98] En tercer lugar, el Comité toma nota de que el Estado analizado en su respuesta, señaló entre sus dificultades para prevenir, detectar y sancionar prácticas corruptas, que la Corte Nacional de

---

<sup>34</sup> Art. 8.- Puestos directivos.- Los puestos directivos establecidos en la estructura organizacional de la Fiscalía General del Estado son: 1. Fiscal General del Estado. 2. Fiscal Provincial. 3. Coordinador/a de Gestión Misional. 4. Coordinador/a de Gestión de Recursos. 5. Director/a de Asesoría Jurídica. 6. Director/a de Planificación. 7. Director/a de Asuntos Internacionales. 8. Director/a de Comunicación Social. 9. Director/a de Auditoría Interna. 10. Director/a de Política Criminal. 11. Director/a de Gestión Procesal. 12. Director/a de Investigaciones. 13. Director/a de Protección a Víctimas. 14. Director/a de Comisión de la Verdad y Derechos Humanos. 15. Director/a de Talento Humano. 16. Director/a Administrativo Financiero. 17. Director/a de Tecnologías de la Información. 18. Director/a de la Escuela de Fiscales.

<sup>35</sup> Ídem, pág. 61.

<sup>36</sup> En su documento de observaciones al proyecto de informe preliminar, el Estado analizado informó que “... durante el año 2013 la Fiscalía estuvo trabajando en la elaboración del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de la institución. Una vez realizado el estudio técnico, se remitió al Ministerio de Relaciones Laborales para su revisión; fue aprobado y enviado al Ministerio de Finanzas de conformidad al oficio No. MRL-2013-0396, de 16 de agosto del 2013. Con oficio No. MINFIN-DM-2014-0018, de 09 de enero del 2014, el Ministro de Finanzas emite dictamen presupuestario favorable a fin de que el Ministerio de Relaciones Laborales expida, en el ámbito de sus competencias, dicho manual...”



Justicia, mediante resolución de 24 de febrero de 2010, publicada en Registro Oficial No. 154<sup>37</sup>, dispone que para el ejercicio de la acción penal pública por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado, se requiere el informe previo de la Contraloría General del Estado, en el que se determine indicios de responsabilidad penal<sup>38</sup>. Durante la visita *in situ*, los representantes de la FGE pusieron de presente que si bien esta resolución no requiere el informe de la CGE para la indagación previa, sí lo requiere para la instrucción fiscal, lo que resulta en demoras y obstáculos tales como el hecho de que no puede dictarse prisión preventiva hasta tanto la CGE no se pronuncie. Al respecto, el Comité considera que el Estado analizado podría remover estos obstáculos a fin de agilizar el procesamiento de los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito y para ello formulará una recomendación en la sección correspondiente a la Función Judicial (ver recomendación 4.4.2. del capítulo II de este informe)

[99] En cuarto lugar, el Estado analizado en su respuesta puso de presente entre sus dificultades que *“Los equipos de investigación de delitos de corrupción en todas y cada una de las instituciones que luchan contra la misma son muy reducidos (Fiscalía General del Estado, Secretaría de Transparencia<sup>39</sup>, CPCCS, Quito Honesto), en virtud de cuentan con poco personal, y con escasos recursos tanto en lo económico como en lo logístico y medios técnicos de recolección de evidencias por medios digitales.”*

[100] *“No se cuentan con equipos de escucha, de intervenciones telefónicas, ni cámaras de captación de imágenes y voz importantes para descubrir y levantar escenas de los hechos en los delitos de corrupción menor.”*<sup>40</sup>

[101] Adicionalmente, durante la visita *in situ*, los representantes de la FGE manifestaron que cuentan con alrededor de 540 fiscales, pero que han sufrido una pérdida de 150 fiscales que han pasado a cumplir funciones en los Órganos Jurisdiccionales de la Función Judicial<sup>41</sup>. Asimismo, la pérdida de fiscales continúa porque un número de los mismos que siguen cumpliendo funciones en la FGE se encuentran entre la lista de elegibles para jueces nuevos. Asimismo, manifestaron que en términos de carga de trabajo la FGE recibió alrededor de 250,000 ingresos solamente en 2012, y que había enviado una solicitud de aumento de 250 plazas, cuya aprobación estaba aún pendiente al tiempo de la visita<sup>42</sup>. Al respecto, el Comité considera que el Estado analizado podría fortalecer a la FGE, dotándole de los recursos humanos y presupuestarios necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones, para lo cual formulará una recomendación (ver recomendación ver recomendación 2.4.3. del capítulo II de este informe).

[102] Finalmente, durante la visita *in situ*, los representantes de la FGE pusieron de presente entre sus necesidades de cooperación técnica, las siguientes: Capacitación técnica especializada para el fortalecimiento de equipos interninstitucionales; capacitación a los operadores de justicia en buenas prácticas estatales y resultados obtenidos; provisión de recursos económicos y logísticos para el combate a la corrupción; donación de equipos de escucha, intervenciones telefónicas, captación de imagen y voz; y fortalecimiento de la Cooperación Internacional. Al

---

<sup>37</sup> Ver

[http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/resoluciones\\_obligatorias/32%20Informe%20previo%20de%20Contraloria.pdf](http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/resoluciones_obligatorias/32%20Informe%20previo%20de%20Contraloria.pdf)

<sup>38</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, págs 174-175.

<sup>39</sup> Hoy Subsecretaría General de Transparencia y Gestión.

<sup>40</sup> *Ídem*, pág. 176.

<sup>41</sup> Durante la sesión plenaria, el Estado analizado informó que este proceso había sido mediante concurso de méritos y oposición.

<sup>42</sup> En su documento de observaciones al proyecto de informe preliminar, el Estado analizado manifestó que se han estado haciendo esfuerzos adicionales para dotar a la FGE de recursos humanos.


respecto, el Comité toma nota de las necesidades puestas de presente por la FGE, de la necesidad de que el Estado analizado le proporcione el apoyo necesario e invita a los Estados Parte, así como a otras organizaciones de cooperación, a asistir a la Institución en estos temas. Adicionalmente, la FGE considera que la principal necesidad de cooperación técnica es la capacitación especializada para el fortalecimiento de equipos interinstitucionales e institucionales de los operadores de justicia en temas referidos a transparencia, anticorrupción, deontología jurídica y ética; así como el intercambio de experiencias y conocimientos con los Estados Partes, a través de pasantías y programas educativos sobre buenas prácticas, planes, programas y proyectos en la lucha contra la corrupción. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.4. del capítulo II de este informe)

### 2.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[103] A través de la respuesta del Estado analizado al cuestionario y de la visita *in situ* se recabó información relativa a los resultados de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la cual se destaca la siguiente:

[104] El Estado analizado, durante la visita *in situ*, presentó estadísticas relativas a resultados sobre el cumplimiento de sus funciones de investigación de actos de corrupción<sup>43</sup>, de las cuales se destacan las siguientes:

**Cuadro No. 1:**

 <b><u>DENUNCIAS SOBRE DELITOS DE CORRUPCIÓN QUE SE RECEPTÓ EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO SEGÚN AÑO DE LA DENUNCIA</u></b>					
DELITO	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013 (enero-junio)*
PECULADO	453	426	355	365	364
CONCUSIÓN	53	75	113	119	52
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO	60	75	37	22	18
COHECHO	148	111	154	116	54
<b>TOTAL</b>	<b>714</b>	<b>687</b>	<b>659</b>	<b>622</b>	<b>488</b>
<p>* Los datos de 2009 hasta el 2012 son del Sistema Integrado Nacional de Actuaciones y Estadísticas Procesales - SINAEP, mientras que los datos de 2013 (enero-junio) son del Sistema Integrado de  Fuente: Fiscalía General del Estado. Administración de Fiscalía - SIAF.  Elaborado por Dirección de Política Criminal - DELITOSCOPIO</p>					

[105] En primer lugar, en relación con el Cuadro No. 1 anterior, relativo al número de denuncias presentadas ante la FGE sobre los delitos de peculado, concusión, enriquecimiento ilícito y cohecho en los últimos 5 años, el Comité advierte que parece existir una tendencia a la baja en las denuncias de enriquecimiento ilícito. Sobre el particular, el Comité considera que

<sup>43</sup> Las estadísticas pueden consultarse en [http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4\\_ecu\\_fge1.ppt](http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4_ecu_fge1.ppt)

sería beneficioso para el Estado analizado realizar un estudio y recopilar información sobre las posibles causas de esta baja, a los efectos de identificar retos y recomendar medidas correctivas. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.5. del capítulo II de este informe).

**Cuadro No. 2:**

ESTADOS PROCESALES DE LAS CAUSAS	PECULADO				
	2009	2010	2011	2012	2013 (enero-junio)
INDAGACIONES PREVIAS	586	492	352	411	245
INSTRUCCIONES FISCALES	177	130	78	65	50
DICTAMENES ACUSATORIOS	18	71	55	60	39
DICTAMENES ABSTENTIVOS	8	18	11	18	6
DICTAMENES MIXTOS	5	19	15	8	8
SOBRESEIUMENTOS	46	38	32	20	13
SENTENCIAS CONDENATORIAS	26	47	30	49	21
SENTENCIAS ABSOLUTORIAS	11	24	22	24	10
SENTENCIAS MIXTAS	1	3	4	6	24
DESESTIMACIONES	206	207	118	106	22
ARCH. PROVISIONALES	4	22	34	11	9
ARCH. DEFINITIVOS	1	10	25	34	14

Fuente: Fiscalía General del Estado  
Elaborado por Dirección de Política Criminal  
DELITOSCOPIO

**Cuadro No. 3:**

ESTADOS PROCESALES DE LAS CAUSAS	ENRIQUECIMIENTO ILICITO				
	2009	2010	2011	2012	2013 (enero-junio)
INDAGACIONES PREVIAS	65	75	34	26	58
INSTRUCCIONES FISCALES	19	1	4	5	6
DICTAMENES ACUSATORIOS	0	1	1	0	0
DICTAMENES ABSTENTIVOS	0	1	1	0	0
DICTAMENES MIXTOS	0	0	0	0	0
SOBRESEIMIENTOS	0	1	1	0	0
SENTENCIAS CONDENATORIAS	0	0	1	0	1
SENTENCIAS ABSOLUTORIAS	0	0	0	0	0
SENTENCIAS MIXTAS	0	0	0	0	0
DESESTIMACIONES	23	17	5	23	6
ARCH. PROVISIONALES	0	6	1	3	2
ARCH. DEFINITIVOS	1	0	2	10	0

Fuente: Fiscalía General del Estado  
Elaborado por Dirección de Política Criminal  
DELITOSCOPIO

**Cuadro No. 4**

ESTADOS PROCESALES DE LAS CAUSAS	COHECHO				
	2009	2010	2011	2012	2013 (enero-junio)
INDAGACIONES PREVIAS	111	70	118	89	45
INSTRUCCIONES FISCALES	26	25	23	25	18
DICTAMENES ACUSATORIOS	9	19	11	6	4
DICTAMENES ABSTENTIVOS	2	8	3	4	7
DICTAMENES MIXTOS	0	0	1	1	0
SOBRESEIMIENTOS	16	9	15	3	6
SENTENCIAS CONDENATORIAS	2	3	4	3	2
SENTENCIAS ABSOLUTORIAS	1	4	6	3	2
SENTENCIAS MIXTAS	0	0	0	0	0
DESESTIMACIONES	110	80	75	28	21
ARCH. PROVISIONALES	3	11	53	12	2
ARCH. DEFINITIVOS	1	3	18	45	11

Fuente: Fiscalía General del Estado  
Elaborado por Dirección de Política Criminal  
DELITOSCOPIO

**Cuadro No. 5**

 <b>ESTADOS PROCESALES DE LAS CAUSAS</b>	<b>CONCUSIÓN</b>				
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013 (enero- junio)</b>
<b>INDAGACIONES PREVIAS</b>	53	71	101	118	53
<b>INSTRUCCIONES FISCALES</b>	11	15	13	13	4
<b>DICTAMENES ACUSATORIOS</b>	0	6	10	9	3
<b>DICTAMENES ABSTENTIVOS</b>	0	2	2	8	1
<b>DICTAMENES MIXTOS</b>	0	0	1	1	0
<b>SOBRESEIMIENTOS</b>	6	4	3	6	3
<b>SENTENCIAS CONDENATORIAS</b>	3	3	6	4	1
<b>SENTENCIAS ABSOLUTORIAS</b>	1	0	3	3	0
<b>SENTENCIAS MIXTAS</b>	2	0	0	0	1
<b>DESESTIMACIONES</b>	35	38	37	26	6
<b>ARCH. PROVISIONALES</b>	1	3	9	7	3
<b>ARCH. DEFINITIVOS</b>	0	1	6	19	5

Fuente: Fiscalía General del Estado  
Elaborado por Dirección de Política Criminal  
DELITOSCOPIO

[106] En segundo lugar, de la información suministrada por el Estado analizado en los cuadros 2 a 5, el Comité observa que Ecuador mantiene estadísticas sobre el estado procesal de los delitos de corrupción de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión. Sin embargo, la información tal y como está presentada no permite efectuar un análisis integral sobre el tema. Sobre el particular, el Comité considera que sería beneficioso para el Estado analizado realizar un estudio pormenorizado de la recurrencia y evolución de cada uno de los delitos de corrupción y su estado procesal, lo que permitiría que esta base estadística sea clara y de fácil interpretación para todos los usuarios, y utilizar esta información para identificar retos y adoptar medidas correctivas, de ser necesario. Al respecto, el Comité formulara una recomendación. (ver recomendación 2.4.6. del capítulo II de este informe)

[107] Finalmente, en relación con el tema de las indagaciones previas, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, los representantes de la FGE manifestaron que de acuerdo a la normativa vigente, estas indagaciones deberían tardar de uno a dos años. Sin embargo, están detectando que hay indagaciones que demoran mucho más que esto. Al respecto, indicaron que están trabajando en un nuevo sistema electrónico de asignación y seguimiento de causas para fiscales más eficiente de manera que estas indagaciones no demoren más de 6 meses y que contribuye a agilizar los procedimientos en general. Sobre el particular, el Comité considera que el Estado analizado se beneficiaría de la implementación de medidas y sistemas de tecnologías modernas de información que agilicen aún más el proceso a los fines de asegurar el procesamiento oportuno de las causas, y para ello formulará una recomendación (ver recomendación ver recomendación 2.4.7. del capítulo II de este informe).

## **2.4. Conclusiones y recomendaciones**

[108] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la Fiscalía General del Estado (FGE), en los acápite anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

**[109] La República del Ecuador ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer a la Fiscalía General del Estado (FGE), como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 1 del capítulo II de este informe.**

[110] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 2.4.1. Tomar las medidas que sean necesarias en el Estatuto General por Procesos de la FGE a los fines de especificar claramente cuáles son los cargos de libre nombramiento y remoción de la FGE (ver sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.2. Actualizar el Manual de Clasificación de Cargos del Ministerio Público, teniendo en consideración que este manual es anterior a la Constitución de 2008<sup>44</sup> (ver sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.3. Fortalecer a la FGE dotándola de los recursos humanos y presupuestarios que permitan asegurar el cabal cumplimiento de sus funciones, dentro de los recursos disponibles (ver sección 2.2. del capítulo II de este informe)
- 2.4.4. Promover las gestiones necesarias con otros Estados y organizaciones de cooperación para proveer a la FGE con la cooperación técnica necesaria para obtener capacitación técnica especializada para el fortalecimiento de equipos internacionales; capacitación a los operadores de justicia en buenas prácticas estatales y resultados obtenidos; provisión de recursos económicos y logísticos para el combate a la corrupción; donación de equipos de escucha, intervenciones telefónicas, captación de imagen y voz; y fortalecimiento de la Cooperación Internacional; así como capacitación especializada para el fortalecimiento de equipos interinstitucionales e institucionales de los operadores de justicia en temas referidos a transparencia, anticorrupción, deontología jurídica y ética; así como el intercambio de experiencias y conocimientos con los Estados Partes, a través de pasantías y programas educativos sobre buenas prácticas, planes, programas y proyectos en la lucha contra la corrupción. (ver sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.5. Realizar un estudio para determinar las razones de la tendencia a la baja en el número de denuncias de enriquecimiento ilícito presentadas ante la FGE, a los fines de identificar retos y recomendar medidas correctivas (ver sección 2.3. del capítulo II de este informe).

---

<sup>44</sup> En su documento de observaciones al proyecto de informe preliminar, el Estado analizado informó que “... durante el año 2013 la Fiscalía estuvo trabajando en la elaboración del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de la institución. Una vez realizado el estudio técnico, se remitió al Ministerio de Relaciones Laborales para su revisión; fue aprobado y enviado al Ministerio de Finanzas de conformidad al oficio No. MRL-2013-0396, de 16 de agosto del 2013. Con oficio No. MINFIN-DM-2014-0018, de 09 de enero del 2014, el Ministro de Finanzas emite dictamen presupuestario favorable a fin de que el Ministerio de Relaciones Laborales expida, en el ámbito de sus competencias, dicho manual...”

- 2.4.6. Realizar un estudio pormenorizado de la recurrencia y evolución de cada uno de los delitos de corrupción y su estado procesal, lo que permitiría que esta base estadística sea clara y de fácil interpretación para todos los usuarios, y utilizar esta información para identificar retos y adoptar medidas correctivas, de ser necesario (ver sección 2.3. del capítulo II de este informe).
- 2.4.7. Tomar las medidas que sean necesarias para fortalecer los sistemas modernos de información y seguimiento de la FGE, a los fines de asegurar el procesamiento oportuno de causas, especialmente aquellas relacionadas con actos de corrupción, teniendo en cuenta los recursos disponibles (ver sección 2.3. del capítulo II de este informe).

### **3. CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO (CGE)**

#### **3.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas.**

[111] La Contraloría General del Estado (CGE) cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[112] De conformidad con el artículo 211 de la Constitución de la República (CRE), la CGE “... es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos”. Asimismo, la CGE tiene personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa (artículo 204 de la CRE).

[113] Por lo que respecta a sus objetivos y funciones, el artículo 212 de la CRE establece que serán funciones de la CGE, además de las que determine la ley, 1. Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría externa y del control interno de las entidades del sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos; 2. Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la Fiscalía General del Estado; 3. Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones; y 4. Asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando se le solicite.

[114] En lo referente a funciones compartidas con otros órganos y autoridades, de conformidad con el artículo 204 de la CRE, la CGE, junto con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la Defensoría del Pueblo y las superintendencias hace parte de la Función de Transparencia y Control Social, la cual “*promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción*”.

[115] Por lo que respecta a los mecanismos de coordinación interinstitucional, además del mecanismo previsto en el artículo 206 de la CRE, que establece que los titulares de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social conformarán una instancia de coordinación, y elegirán de entre ellos, cada año, a la Presidenta o Presidente de la Función, la CGE ha firmado convenios de cooperación interinstitucional con otros organismos tales como el Servicio Nacional

de Contratación Pública (INCOP/SERCOP), la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social<sup>45</sup>.

[116] En lo concerniente a la manera en que se toman las decisiones institucionales<sup>46</sup>, el Estado analizado, en su respuesta, indicó que éstas son adoptadas por el Contralor General como representante legal de la entidad y máxima autoridad de control gubernamental y auditoría de la gestión pública, enmarcado en las normas constitucionales y legales. Las decisiones de la CGE que impliquen el establecimiento de responsabilidades administrativas y civiles culposas podrán impugnarse ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, conforme lo dispuesto en los artículos 45 y 52 de la LOCGE. No podrán impugnarse los informes de auditoría, de exámenes especiales, los que consistan en dictámenes o informes que le corresponde emitir de acuerdo con la Ley, ni las actuaciones que establecieren indicios de responsabilidad penal.

[117] Mediante el recurso de revisión la CGE examina las resoluciones originales que expida en todo lo concerniente a la determinación de responsabilidad civil culposa, de oficio o a petición del directamente afectado por aquellas, de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 60 a 64 de la LOCGE.

[118] En lo correspondiente a la manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, y de las instancias competentes para exigirles responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de su permanencia en el cargo, el artículo 205 de la CRE, determina que: *“Los representantes de las entidades que forman parte de la Función de Transparencia y Control Social ejercerán sus funciones durante un período de cinco años, tendrán fuero de Corte Nacional y estarán sujetos al enjuiciamiento político de la Asamblea Nacional. En caso de darse este enjuiciamiento, y de procederse a la destitución, se deberá realizar un nuevo proceso de designación. En ningún caso la Función Legislativa podrá designar al remplazo.*

[119] *Sus máximas autoridades deberán ser ecuatorianas o ecuatorianos en goce de los derechos políticos y serán seleccionadas mediante concurso público de oposición y méritos en los casos que proceda, con postulación, veeduría e impugnación ciudadana*<sup>47</sup>.

[120] En concordancia con la norma constitucional, los artículos 29 y 32 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establecen que la representación legal de esta entidad estará a cargo del Contralor General del Estado, quien es la máxima autoridad de control gubernamental y auditoría de la gestión pública.

[121] Por lo que corresponde a la determinación de los recursos humanos necesarios para su funcionamiento y en la que son provistos los mismos, de conformidad con el numeral 1 del artículo 3 de la LOSEP, publicada en 2010, los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial y Justicia Indígena, Electoral, Transparencia y Control Social, Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional están sujetas a la misma. Siendo que la CGE forma parte de la Función de Transparencia y Control Social, la determinación de sus recursos humanos está sujeta a esta normativa.

[122] Por lo que respecta a los requisitos para el ingreso al servicio público, a los que está sujeta la CGE, estos se encuentran contemplados en el artículo 5 de la LOSEP, cuyo inciso h) establece como uno de ellos *“Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y*

---

<sup>45</sup> Ver [http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4\\_ecu\\_cge4.ppt](http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4_ecu_cge4.ppt)

<sup>46</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, págs. 40-41.

<sup>47</sup> Como ya se ha mencionado anteriormente, la CGE hace parte de la Función de Transparencia.



*oposición, salvo en los casos de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción*”. Adicionalmente, los concursos de méritos y oposición se encuentran regulados por el Acuerdo MRL-2012-56 de 20 de abril de 2012, expedido por el Ministerio de Relaciones Laborales.

[123] El régimen de inhabilidades e incompatibilidades para el desempeño del servicio público, incluido el servicio en la CGE, se encuentra contemplado en los artículos 6 a 14 de la LOSEP.

[124] La CGE cuenta con el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de la Contraloría General del Estado, expedido por el Ministerio de Relaciones Laborales en 2012<sup>48</sup>. Adicionalmente, durante la visita *in situ*, los representantes de la CGE informaron que se capacita periódicamente al personal con respecto a dichas funciones mediante el Plan de Capacitación Anual.

[125] En lo concerniente a los procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, la CGE cuenta con el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Contraloría General del Estado, publicado en 2012<sup>49</sup>.

[126] En referencia a la implementación de sistemas o tecnologías modernas para el desarrollo de sus labores, el Estado analizado en su respuesta informó que *“En materia de implementación de sistemas o tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores, con la finalidad de continuar con el fortalecimiento del sistema de control externo llevado a cabo por el Organismo Técnico de Control a través de la ejecución de la auditoría gubernamental, la Dirección de Planificación y Evaluación Institucional planificó para el año 2011, el desarrollo y continuidad del proyecto de mejoramiento institucional relacionado con la “Implementación de la herramienta informática AutoAudit”, el mismo que se encuentra actualmente en ejecución, aprobado mediante Acuerdo 002 CG de 12 de enero del 2010”*. Además, en la misma respuesta se informa que han implementado la videoconferencia como herramienta de trabajo y que se ha iniciado la implementación del Sistema Integrado de Control SISCO, para optimizar el seguimiento de los planes operativos de control.<sup>50</sup>

[127] En relación con la manera en que se suministra a los ciudadanos información acerca de sus objetivos y funciones, así como para dar a conocer los procedimientos establecidos para su cumplimiento y orientación acerca de cómo realizar gestiones ante este organismo, el Estado analizado en su respuesta informa que la CGE difunde toda la información institucional a través de un portal de información en su página Web<sup>51</sup>.

[128] En lo referente a los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su servicio, la CGE cuenta con el Reglamento para la Recepción y Trámite de Denuncias para la Investigación Administrativa en la Contraloría General del Estado<sup>52</sup>.

---

<sup>48</sup> Resolución No. MRL-FI-2012-0337, del 3 de julio de 2012.

<sup>49</sup> [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_ecu\\_resFI.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_resFI.pdf)

<sup>50</sup> Registro Oficial No. 243 de 9 de febrero de 2012. Reformas, Registro Oficial 827 de 9 de noviembre de 2012.

<sup>51</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, págs. 69-70.

<sup>52</sup> [www.contraloria.gob.ec](http://www.contraloria.gob.ec)

<sup>53</sup> Acuerdo 034-CG-2009, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.50 de 20 de octubre de 2009.

[129] Por otra parte, el artículo 57, literal j) del Reglamento General de la LOSEP establece que corresponderá a la Dirección de Talento Humano administrar el régimen disciplinario institucional. En ese sentido, el artículo 79 del Reglamento General a la LOSEP (RGLOSEP) dispone que *“las UATH<sup>53</sup> elaborarán obligatoriamente, en consideración de la naturaleza de la gestión institucional los reglamentos internos de administración del talento humano, en los que se establecerán las particularidades de la gestión institucional que serán objeto de sanciones derivadas de las faltas leves y graves establecidas en la Ley”*.

[130] Los recursos presupuestales de la CGE se garantizan con base a lo establecido en los artículos 292 y 293 de la CRE<sup>54</sup>; así como el artículo 30 de la LOCGE<sup>55</sup>.

[131] Finalmente, por cuanto a los mecanismos de rendición de cuentas de la CGE a la ciudadanía, éstos se encuentran publicados en la página Web institucional, desde el año 2007 a 2012, con documentos a disposición del público. Asimismo, el Estado analizado en su respuesta informa que el documento que anualmente se pone en conocimiento de la ciudadanía es preparado con la información proporcionada por todas las unidades que conforman el organismo técnico de control, con la coordinación de la respectiva unidad administrativa<sup>56</sup>.

### **3.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas**

[132] La Contraloría General del Estado (CGE) tiene un conjunto de disposiciones y/u otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 3.1. de este informe. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[133] En primer lugar, el Comité toma nota de que la CGE cuenta con el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Contraloría General, publicado en 2012, en proceso de implementación. Al respecto, el Comité considera que es de gran importancia para el funcionamiento óptimo de la entidad que esta normativa sea implementada a la mayor brevedad posible y en ese sentido formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.1. del Capítulo II de este informe).

[134] En segundo lugar, en lo referente al régimen de recursos humanos y mecanismos de control interno, el Comité advierte que la CGE no cuenta con el Reglamento Interno del Talento

---

<sup>53</sup> Unidades Autónomas de Talento Humano.

<sup>54</sup> El artículo 292 de CRE establece: *“El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados”*; y el artículo 293: *“La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía”*.

<sup>55</sup> El artículo 30 de la LOCGE establece: *“... El presupuesto de la Contraloría General del Estado se financiará con: a) (Reformado por el Art. 2 de la Ley 2004-42, R.O. 404, 23-VIII-2004).- La transferencia del cinco por mil de los ingresos presupuestados, de todas las instituciones del Estado y, en la parte proporcional de las personas jurídicas de derecho privado, cuyo capital social, patrimonio, fondo o participación tributaria esté integrado, con recursos públicos, y que de conformidad con esta Ley, se encuentren sometidas al control de la Contraloría General del Estado (...); b) Los ingresos previstos en otras disposiciones legales; c) Los recursos de autogestión; y d) Otros ingresos.”*

<sup>56</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 116.

Humano que prevé artículo 79 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público (RGLOSEP), que entre otras cosas establecería las particularidades de la gestión institucional que serán objeto de las sanciones derivadas de las faltas leves y graves establecidas en la Ley, incluidas aquellas que no son resultado de una denuncia<sup>57</sup>. Teniendo en consideración la importancia que reviste la reglamentación del régimen de recursos humanos, incluido el régimen disciplinario de la entidad, el Comité formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.2. del Capítulo II de este informe).

[135] En tercer lugar, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, los representantes de la CGE pusieron de presente una serie de dificultades relacionadas con el registro y control de declaraciones patrimoniales. Puesto que este es un tema que tiene que ver con el seguimiento de las recomendaciones formuladas en la primera ronda, el Comité se referirá al tema en esa sección.

[136] Sin perjuicio de ello, el Comité toma nota también de que en esa ocasión los representantes de la CGE manifestaron que cuentan con poco personal para llevar el control de las declaraciones patrimoniales de toda la administración. Teniendo en cuenta la importancia que reviste esta función de la CGE, y que existen más de 500,000 servidores públicos en el Ecuador, el Comité considera que el Estado analizado podría asegurar que esta entidad cuente con los recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios suficientes para permitirle que cumpla a cabalidad con esta labor. En ese sentido, el Comité formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.3. del Capítulo II de este informe).

[137] En cuarto lugar, el Comité advierte que si bien la página Web de la CGE contiene una gran cantidad de información útil para la ciudadanía, incluyendo un enlace llamado “Únete al Control”, en el cual se encuentra un formulario para la recepción y trámite de denuncias para investigación administrativa en la CGE, este formulario se refiere específicamente al ingreso de denuncias sobre uso indebido de vehículos del Estado, y denuncias relacionadas con la indebida, ilegal o ineficiente gestión y/o uso de los recursos y bienes del Estado, pero no para ingresar denuncias sobre otras irregularidades cometidas por funcionarios, ni para formular sugerencias y comentarios. Al respecto, el Comité considera que sería muy beneficioso que la institución ampliara el alcance de su buzón de quejas en su Portal de Internet, a los fines de facilitar aún más a la ciudadanía la presentación de sus quejas y denuncias, y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.4. del Capítulo II de este informe).

[138] Finalmente, durante la visita *in situ*, los representantes de la CGE pusieron de presente entre sus necesidades de cooperación técnica, las siguientes: fortalecimiento de procesos, sistemas, normativa del control, talento humano, vinculación con la sociedad civil, y gestión y ética pública, indicando que se encuentran trabajando en un proyecto de fortalecimiento institucional, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Al respecto, el Comité toma nota de las necesidades puestas de presente por la CGE, de la necesidad de que el Estado analizado le proporcione el apoyo necesario e invita a los Estados Parte, así como a otras organizaciones de cooperación, a asistir a la Institución en estos temas. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.5. del capítulo II de este informe)

### **3.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas**

---

<sup>57</sup> En su documento de observaciones al proyecto de informe preliminar, de 10 de febrero de 2014, el Estado analizado manifestó que mientras tanto contaba con el Reglamento Sustitutivo de Administración de Personal de la CGE, expedido en 2006 mediante Acuerdo No. 025-RH.

[139] A través de la respuesta del Estado analizado al cuestionario y de la visita *in situ* se recabó información relativa a los resultados de la Contraloría General del Estado (CGE), de la cual se destaca la siguiente:

[140] En primer lugar, el Estado analizado, en su respuesta<sup>58</sup>, presentó estadísticas relativas a resultados sobre el cumplimiento de sus funciones de detección de actos de corrupción, mismas que presentó nuevamente durante la visita *in situ*<sup>59</sup>. Posteriormente, la CGE presentó información estadística adicional<sup>60</sup>. Sin embargo, fuera de la información relativa a las acciones suspendidas o no ejecutadas por la CGE, esta información no permite efectuar un análisis integral sobre el tema.

[141] Al respecto, el Comité considera que el Estado analizado se beneficiaría con la estandarización de la información recopilada en este tipo de estadísticas, de manera que sea consistente y facilite su análisis, a los fines de identificar retos y recomendar medidas correctivas, de ser necesario, y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.6. del capítulo II de este informe)

[142] Sobre el particular, el Comité constata una tendencia al incremento de las acciones de control suspendidas o no ejecutadas por la CGE en base a la aplicación de criterios técnicos. Al respecto, el Comité considera que el Estado analizado se beneficiaría de que dichas acciones sean ejecutadas en los periodos posteriores por la CGE, de considerarlo necesario. Para ello, formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.7. del capítulo II de este informe)

[143] En segundo lugar, por lo que respecta al monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los resarcimientos patrimoniales ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado al erario público en cada uno de los últimos cinco años, durante la visita *in situ*, el Estado analizado presentó información estadística correspondiente al período 2008 a 2012<sup>61</sup>, que se resume a continuación<sup>62</sup>:

**Cuadro No. 1**

RESULTADOS DE GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD					
Descripción	Monto determinado				
	2008	2009	2010	2011	2012
Responsabilidades administrativas sugeridas	13,974,139.62	19,059,864.67	10,459,606.62	6,166,345.61	6,658,628.82

<sup>58</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, págs. 152-154.

<sup>59</sup> Las estadísticas pueden consultarse también en [http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4\\_ecu\\_cge1.ppt](http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4_ecu_cge1.ppt)

<sup>60</sup> Ver los enlaces de Internet en [http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_ecu.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_ecu.htm) bajo la sección “Documentos Recibidos durante la visita *in situ*”, en la sección correspondiente a la CGE, bajo el rubro “Información adicional”.

<sup>61</sup> Ver [http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4\\_ecu\\_cge1.ppt#269,11](http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4_ecu_cge1.ppt#269,11),

<sup>62</sup> El desglose de estas estadísticas puede encontrarse en [http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_ecu.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_ecu.htm) bajo la sección “Documentos Recibidos durante la visita *in situ*”, en la sección correspondiente a la CGE, bajo el rubro “Información adicional”.

Responsabilidades civiles sugeridas	215,754,033.89	233,401,493.72	102,079,252.71	67,476,830.05	111,180,344.57
Indicios de responsabilidad penal	71,074,065.10	15,105,432.59	4,846,773.70	60,253,211.91	134,173,034.72
Acciones de control ejecutadas	1584	2006	1575	1649	2279
<b>Total monto determinado</b>	<b>300,802,238.61</b>	<b>257,566,791.98</b>	<b>117,382,633.03</b>	<b>133,896,387.57</b>	<b>252,012,088.11</b>

**Cuadro No. 2<sup>63</sup>**

<b>Recaudaciones<sup>64</sup></b>				
2008	2009	2010	2011	2012
1,231,478.49	1,130,999.51	1,502,117.26	1,068,876.59	2,434,907.49

[144] En relación con la información suministrada en los cuadros 1 y 2 anteriores, el Comité observa que existe una necesidad de desarrollar mecanismos que permitan resarcir al Estado los daños causados de manera más eficiente y expedita; así como desarrollar un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones resultantes de responsabilidades civiles, administrativas e indicios de responsabilidad sugeridas por parte de la CGE, por lo que, teniendo en consideración la importancia de resarcir los daños causados al Estado, formulará recomendaciones (ver recomendaciones 3.4.8 y 3.4.9 del capítulo II de este informe)

### **3.4. Conclusiones y recomendaciones**

[145] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la Contraloría General del Estado (CGE), en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[146] **La República del Ecuador ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer a la Contraloría General del Estado (CGE), como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 1 del capítulo II de este informe.**

[147] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

<sup>63</sup> Ver el enlace de Internet “[MESICIC Recaudaciones](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_ecu.htm)” en [http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_ecu.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_ecu.htm) bajo la sección “Documentos Recibidos durante la visita *in situ*”, en la sección correspondiente a la CGE, bajo el rubro “Información adicional”.

<sup>64</sup> Únicamente recaudado por parte de la CGE.

- 3.4.1 Tomar las medidas necesarias a los fines de concluir la implementación del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Contraloría General, publicado en 2013 (ver sección 3.3. del capítulo II de este informe).
- 3.4.2 Elaborar e implementar el reglamento interno de administración del talento humano de la CGE, estableciendo las particularidades de la gestión institucional que serán objeto de sanciones derivadas de las faltas leves y graves establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), de conformidad con el artículo 79 del Reglamento de la LOSEP (ver sección 3.3. del capítulo II de este informe).
- 3.4.3 Fortalecer a la CGE, asegurando que cuente con los recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios necesarios para ejercer a cabalidad su función de control de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios de la administración pública, cuando se requiera, teniendo en consideración los recursos disponibles (ver sección 3.3. del capítulo II de este informe).
- 3.4.4 Adoptar las medidas pertinentes para facilitar la participación de la ciudadanía en el proceso de quejas y denuncias, tales como la ampliación del alcance de su buzón de quejas en el portal de Internet de la CGE con respecto de las irregularidades cometidas por sus funcionarios (ver sección 3.3. del capítulo II de este informe).
- 3.4.5 Promover las gestiones necesarias con otros Estados y organizaciones de cooperación para proveer a la CGE con la cooperación técnica necesaria para el fortalecimiento de procesos, sistemas, normativa del control, talento humano, vinculación con la sociedad civil, y gestión y ética pública (ver sección 3.3. del capítulo II de este informe).
- 3.4.6 Asegurar que la información estadística respecto a los resultados de la gestión de la CGE con respecto a sus funciones de detección de actos de corrupción esté recopilada y presentada de una manera consistente y congruente, de manera que pueda facilitar su análisis, a los fines de identificar retos y recomendar medidas correctivas, de ser necesario (ver sección 3.3. del capítulo II de este informe).
- 3.4.7 Evaluar los mecanismos de revisión periódica de la planificación anual y garantizar que las acciones que se suspenden o posponen por razones técnicas fundamentadas sean reprogramadas para los siguientes periodos (ver sección 3.3. del capítulo II de este informe).
- 3.4.8 Tomar las medidas necesarias a los fines de desarrollar mecanismos que permitan resarcir los daños causados al Estado de manera más eficiente y expedita (ver sección 3.3. del capítulo II de este informe).
- 3.4.9 Tomar las medidas necesarias a los fines de desarrollar un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones sugeridas por la CGE a las entidades bajo su competencia, en términos de los montos resultantes de responsabilidades administrativas, civiles o por indicios de responsabilidad penal, a los fines de poder determinar cuál es el resultado efectivo de estas recomendaciones, y poder así identificar retos y recomendar acciones correctivas, de ser necesario (ver sección 3.3. del capítulo II de este informe).

#### **4. ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y CONSEJO DE LA JUDICATURA**

##### **4.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas.**

[148] Los órganos jurisdiccionales y el Consejo de la Judicatura cuentan con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[149] La Constitución de la República del Ecuador (CRE), en su artículo 167 establece que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución.

[150] De conformidad con el artículo 177 de la CRE, la Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos.

[151] Por su parte, el artículo 178 de la CRE determina que *“Los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de otros órganos con iguales potestades reconocidos en la Constitución, son los encargados de administrar justicia, y serán los siguientes: 1. La Corte Nacional de Justicia. 2. Las cortes provinciales de justicia. 3. Los tribunales y juzgados que establezca la ley. 4. Los juzgados de paz. El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial (...)”*

[152] El artículo 155 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), establece, que en base a la división territorial del Estado, las cortes, tribunales y juzgados se organizan así: 1. La Corte Nacional de Justicia, con jurisdicción en todo el territorio nacional, con sus correspondientes salas especializadas; 2. Las cortes provinciales, con sus correspondientes salas especializadas, con jurisdicción en una provincia, que constituyen los distritos judiciales; 3. Los tribunales y juzgados con jurisdicción en todo el territorio distrital, o en una sección del mismo, pudiendo abarcar dicha sección uno o varios cantones de una provincia, o una o varias parroquias de un cantón; y, 4. Los juzgados de paz, que pueden tener jurisdicción en un barrio, recinto, anejo o área determinada de una parroquia.

[153] En relación con la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el artículo 184 de la CRE dispone que sus funciones, además de las determinadas en la ley, serán: 1. Conocer los recursos de casación, de revisión y los demás que establezca la ley. 2. Desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentado en los fallos de triple reiteración. 3. Conocer las causas que se inicien contra las servidoras y servidores públicos que gocen de fuero, y 4. Presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia.

[154] Por lo que respecta al Consejo de la Judicatura, el artículo 254 del COFJ establece que éste es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.

[155] En lo correspondiente a los principios que rigen la administración de justicia, incluyendo los temas relacionados con la autonomía de la Función Judicial, el artículo 168 de la CRE dispone lo siguiente: 1. Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. 2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera. 3. En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución. 4. El acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley establecerá el régimen de costas procesales. 5. En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los casos expresamente señalados en la ley. 6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a

cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo.

[156] En lo tocante al ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otras autoridades, el Estado analizado en su respuesta informa que la administración de justicia ordinaria le corresponde exclusivamente a la Función Judicial, misma que se realiza a través de los órganos mencionados en el Artículo 178 de la CRE. Sin embargo, el control constitucional y electoral se lleva a cabo mediante la Corte Constitucional y el Tribunal Contencioso Electoral respectivamente.<sup>65</sup>

[157] En el ámbito jurisdiccional, los posibles conflictos de competencia se relacionan directamente con las normas procesales, las que establecen principios, procedimientos, órganos e instancias, que constan en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).<sup>66</sup>

[158] Por lo que respecta a los mecanismos de coordinación interinstitucional, el Estado analizado, tanto en su respuesta como en la visita *in situ*, informó que cuenta con una serie de convenios con la FGE y el Ministerio del Interior para los proyectos “Unidad Interinstitucional de Delitos Flagrantes”, “Unidad Interinstitucional de Servicios de Flagrancia”, y “Atención temprana de autores, cómplices y encubridores”. Las Unidades de Flagrancia tienen como uno de sus objetivos la disminución del tiempo del proceso judicial, lo cual evita la sobresaturación de causas y aporta a la realización de la justicia, a la lucha contra la impunidad y la corrupción, todo lo que redundará a favor de la confianza ciudadana en su institucionalidad democrática.

[159] Las decisiones de los jueces se adoptan por medio de decretos, autos y sentencias y son impugnables vía recursos judiciales. Por disposición del artículo 76, numeral 7, literal l) de la CRE, todas las decisiones judiciales deberán ser debidamente motivadas, entendiéndose por tal la enunciación de las normas o principios jurídicos en los que se funda y la explicación de la pertinencia de la aplicación a los antecedentes de hecho.<sup>67</sup>

[160] Las decisiones del Consejo de la Judicatura (CJ) se adoptan a través de mayoría simple y, en caso de empate, el voto de quien preside la sesión será decisorio (Arts. 181 inciso final Constitución y 263 del COFJ). Asimismo, el Art. 31 del COFJ señala que las resoluciones dictadas dentro de un procedimiento distinto a los jurisdiccionales, en que se reconozcan, declaren, establezcan, restrinjan o supriman derechos, constituyen actos de la administración pública o tributaria y son impugnables en sede jurisdiccional. Por otra parte, el artículo 119 del COFJ establece que en materia disciplinaria, las decisiones del CJ serán susceptibles de revisión por la vía jurisdiccional más no por la administrativa.

[161] Para el cumplimiento de las sentencias el artículo 230 del COFJ crea los juzgados de garantías penitenciarias, en tanto que en materias no penales es el juzgado especializado de primera instancia el llamado a la ejecución de las correspondientes sentencias. Por otra parte, la aplicación y seguimiento de las decisiones aprobadas por el Pleno del CJ en el ámbito de sus competencias corresponde a la Dirección General y Direcciones Provinciales.<sup>68</sup>

[162] Por cuanto a la manera en que se eligen sus máximas autoridades, el artículo 179 de la CRE dispone que el CJ se integrará por 5 delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán

---

<sup>65</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 16.

<sup>66</sup> *Ídem*.

<sup>67</sup> *Ídem*, págs. 32-38.

<sup>68</sup> *Ídem*. Ver también [http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4\\_ecu\\_cos4.ppt](http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4_ecu_cos4.ppt)



elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de un proceso público de escrutinio y veeduría, de las ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá; por el Fiscal General del Estado, por el Defensor Público, por la Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional. Estos delegados durarán en sus funciones 6 años. Asimismo, el CJ rendirá su informe anual ante la Asamblea Nacional, que podrá fiscalizar y juzgar a sus miembros.

[163] De conformidad con el artículo 183 de la CRE, las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) serán elegidos por el Consejo de la Judicatura conforme a un procedimiento con concurso de oposición y méritos, impugnación y control social. Asimismo, el artículo 182 de la CRE dispone que la CNJ estará conformada por veintiún jueces/as, quienes serán designados para un período de 9 años; no podrán ser reelectos, se renovarán por tercios cada 3 años y cesarán en sus cargos conforme a la ley.

[164] El Estado analizado cuenta asimismo con el Reglamento de Concurso de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social<sup>69</sup>, el Instructivo para Concurso de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social para la selección y designación de juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia<sup>70</sup> y el Reglamento Sustitutivo de Concurso de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social para selección y designación de servidoras y servidores de la Función Judicial<sup>71</sup>.

[165] La selección de personal para el cumplimiento de sus funciones se realiza a través del Pleno del Consejo de la Judicatura previo el informe técnico correspondiente. El ingreso se realiza previo concurso de merecimientos y oposición, impugnación ciudadana y control social, por lo tanto no están sujetos a libre nombramiento o remoción, salvo los cargos directivos y, asesores. Tanto el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) como la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), exigen requisitos para acceder a los cargos y, de igual manera contempla causales de inhabilidad, incompatibilidad y responsabilidad por sus actuaciones en el desempeño del cargo.<sup>72</sup>

[166] En relación con la existencia de manuales u otros documentos en los que se describen las funciones del personal, el Estado analizado en su respuesta informa que el Manual de Clasificación de Puestos, Orgánico Funcional y el Índice Ocupacional se encuentran aprobados.<sup>73</sup>

[167] Por lo que toca a la capacitación continua al personal de la Función Judicial sobre sus funciones, se ha creado la Escuela de la Función Judicial que según se informó durante la visita in situ, ya está en funcionamiento y ha implementado cursos de formación y mejora continua para su personal, entre otros.

[168] En lo que tiene que ver con acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de la calidad implementadas, el Estado analizado en su respuesta informa que el Consejo de la Judicatura, de manera conjunta con la CNJ, la FGE y la Defensoría Pública (DP), elaboraron el Plan Estratégico de la Función Judicial 2013-2019.<sup>74</sup>

---

<sup>69</sup> Resolución 006-2011 de 19 de Agosto de 2011, reformada mediante resolución 0119-2011 de 10 de noviembre de 2011.

<sup>70</sup> Resolución 007-2011 de 24 de Agosto de 2011.

<sup>71</sup> Resolución 108-2012, reformado por Resolución 021-2013 de 15 de Abril de 2013 y Resolución 067-2013 de 9 de Julio de 2013.

<sup>72</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 48.

<sup>73</sup> *Ídem*, pág. 61.

<sup>74</sup> *Ídem*, pág. 64.

[169] En relación con la implementación de sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores, durante la visita *in situ*, el Estado analizado informó que cuentan con el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano “SATJE”, que permite realizar ágilmente todas las actividades de los procesos judiciales como son: Sorteo electrónico - automático, recepción de escritos, seguimiento de causas (desde cuando se recepta el proceso en la judicatura hasta su resolución), notificaciones electrónicas, antecedentes penales y de tránsito, recaudación y pagos de pensiones alimenticias, arrendamiento de casilleros judiciales, citaciones, información en pantallas táctiles (*touch screen*), información en el Internet y otras aplicaciones fundamentales para un buen desempeño de la Institución<sup>75</sup>. Asimismo, informaron que este sistema será sustituido por el Sistema de Información Judicial Justicia 2.0, que ya está siendo implementado en los tribunales de primera instancia y se planea tener una interconexión con la FGE<sup>76</sup>.

[170] En lo que respecta a la manera en la que se provee a los ciudadanos de información acerca de sus objetivos y funciones; se les da a conocer los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones ante los mismos, el Estado analizado en su respuesta, informa que la información para la ciudadanía y el usuario del sistema de justicia, en general, se encuentra en la página Web de la CNJ, en el enlace relativo a Transparencia Institucional, mientras que el CJ publica esta información en los enlaces de Transparencia en su propio portal de Internet.

[171] En lo que corresponde a los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su servicio, el Estado analizado, en su respuesta<sup>77</sup>, informó que el CJ de la entidad disciplinaria de la Función Judicial, y los procedimientos para lo anteriormente señalado se encuentra regulado por el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria, y para ello se ha creado la Unidad de Control Disciplinario del CJ<sup>78</sup>.

[172] Los recursos presupuestales necesarios para el funcionamiento de la Función Judicial se garantizan a través del Plan Nacional de Desarrollo, que de conformidad con el artículo 280 de la Constitución es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos, entre otros.

[173] Por lo que respecta a la rendición de cuentas, el artículo 179 de la CRE, dispone que el “*El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea Nacional, que podrá fiscalizar y juzgar a sus miembros*”. Por su parte, tanto el CJ como la CNJ rinden cuentas ante la ciudadanía de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia

---

<sup>75</sup> Ver <http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/informatica/PLANESTRATEGICOOPERATIVODNI-CJ.pdf>

<sup>76</sup> Ver y <http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/25-consejo-judicatura/235-justicia-20>

<sup>77</sup> Respuesta de la República del Ecuador correspondiente a la cuarta ronda, pág. 99. Ver también [http://www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec/mis\\_modulos/resoluciones/RESOLUCION%20PDF%2016.pdf](http://www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec/mis_modulos/resoluciones/RESOLUCION%20PDF%2016.pdf)

<sup>78</sup> En su documento de observaciones al proyecto de informe preliminar, remitido el 10 de febrero de 2014, Ecuador informó que “...con posterioridad al envío de respuestas al Cuestionario del Ecuador y a la realización de la Visita in Situ, el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 168-2013 de 30 de octubre del 2013, aprobó el nuevo Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos, en cuyo numeral 3.1.3 crea la Subdirección Nacional de Control Disciplinario que reemplaza a la Unidad de Control Disciplinario”.

y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), y hacen accesible esta información a través de sus portales de Internet, que incluye sus informes anuales. Durante la visita *in situ*, los representantes de la Función Judicial indicaron que la metodología de recopilación para la rendición de cuentas se hace mediante el sistema electrónico e incluye los aspectos presupuestarios, de planificación y de resultados.

#### **4.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas**

[174] Los órganos jurisdiccionales y el Consejo de la Judicatura tienen un conjunto de disposiciones y/u otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 4.1. de este informe. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[175] En primer lugar en lo referente a mecanismos de coordinación interinstitucional el Comité toma nota de que no se identificó, ni en la respuesta ni en la Visita *in situ*, ningún mecanismo de esta índole cuyo propósito específico sea contribuir a la prevención detección investigación persecución y sanción de actos de corrupción. Teniendo en consideración que un mecanismo de esta naturaleza promovería una coordinación interinstitucional más amplia, el Comité formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.1. del capítulo II de este informe)

[176] En segundo lugar, el Comité toma nota de que durante las entrevistas con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la Fiscalía General del Estado (FGE) que tuvieron lugar en ocasión de la visita *in situ*, ambas entidades pusieron de presente entre sus dificultades que la resolución de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) del 24 de febrero de 2010, publicada en Registro Oficial No. 154, de 19-mar-2010, mediante la cual se requiere un informe previo de la Contraloría General del Estado (CGE) para la instrucción de la causa en los procesos penales por peculado y enriquecimiento ilícito, frecuentemente constituye un obstáculo para el procesamiento de estos casos. Al respecto, el Comité considera que el Estado analizado podría remover estos obstáculos a fin de agilizar el procesamiento de los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.2. del capítulo II de este informe).

[177] Sobre el particular, cabe resaltar que durante la visita *in situ*, en el transcurso de las entrevistas con las organizaciones de la sociedad civil, sector privado, investigadores y académicos, el representante de la Fundación ESQUEL manifestó que esta resolución de la CNJ ha generado problemas ya que sin el informe de la CGE no puede dictarse prisión preventiva en los casos de peculado y enriquecimiento ilícito.

[178] En tercer lugar, en relación con el tema de recursos humanos, el Comité toma nota de que si bien el Código Orgánico de la Función Judicial, en su Título II establece la carrera judicial, durante la visita *in situ*, los funcionarios de la CNJ manifestaron que al momento esta carrera no se encuentra reglamentada y no está siendo por lo tanto implementada. Al respecto, agregaron que la nueva carrera judicial está en diseño y que va a reglamentarse por resolución del Pleno del CJ<sup>79</sup>. Al respecto, el Comité considera de vital importancia que el Estado analizado apruebe e implemente a la brevedad la reglamentación de la carrera judicial, teniendo asimismo en cuenta las recomendaciones que se le hicieron en la segunda ronda, cuando se analizó la contratación de

---

<sup>79</sup> En su documento de observaciones al proyecto de informe preliminar, remitido el 10 de febrero de 2014, Ecuador informó que “...mediante Resolución No.014-2014, de 28 de enero de 2014, se resuelve aprobar la remuneración en las categorías en la carrera judicial jurisdiccional y en la carrera fiscal.”

servidores públicos. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.3. del capítulo II de este informe).

[179] En ese mismo orden de ideas, el Comité toma nota de que si bien el Manual de Clasificación de Puestos, Orgánico Funcional y el Índice Ocupacional se encuentran aprobados, tanto en la respuesta al cuestionario como en la visita *in situ* el Estado analizado puso de presente que si bien el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó los documentos en cuestión, éstos no habían sido aún implementados. Asimismo, agregaron que el manual de descripción, valoración y clasificación de puestos estaría siendo elaborado en los próximos seis meses<sup>80</sup>. Al respecto el Comité resalta la importancia de que el Consejo de la Judicatura cuente con esta normativa interna y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.4. del capítulo II de este informe).

[180] En cuarto lugar, con respecto a la existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, el Estado analizado en su respuesta al cuestionario, pone de presente que para asegurar el ordenamiento orgánico del CJ, se requiere que entre otros cuente con el “*Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del CJ, así como manuales y reglamentos internos que permitan la implantación de la meritocracia en la Función Judicial, mediante la gestión eficaz y eficiente del sistema integrado de Talento Humano*”<sup>81</sup>. Al respecto, durante la visita *in situ*, los funcionarios del CJ manifestaron que no se ha implementado el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del CJ, ni todos sus manuales y reglamentos internos porque están en proceso de reforma<sup>82</sup>. Indicaron que mientras tanto se están manejando con resoluciones para casos puntuales con base en análisis jurídicos. Al respecto el Comité resalta la importancia de que la Función Judicial cuente con esta normatividad interna a la brevedad posible y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.5. del capítulo II de este informe).

[181] En quinto lugar, por lo que respecta a la rendición de cuentas y a la información que se ofrece a la ciudadanía acerca de sus objetivos y funciones; procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones y orientación sobre cómo realizar gestiones ante los mismos, el Comité advierte que los informes anuales y otros documentos publicados en el Portal de Internet del CJ se encuentran en un formato ilegible (*flipping book*) y difícil de manejar, lo que dificulta el acceso a la información ofrecida. Asimismo, en su respuesta al cuestionario el Estado analizado manifiesta que la página Web de la CNJ cuenta con una “*guía básica de orientación en la página institucional, para que el público pueda ser encaminado en la forma y los sitios donde debe realizar los requerimientos*”<sup>83</sup>. Sin embargo, al acceder la página, dicha guía no se encuentra disponible<sup>84</sup>. Al respecto, el Comité considera que el Estado analizado podría optimizar el uso de los portales de Internet a los fines de ampliar y mejorar la utilización de estas

---

<sup>80</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente a la cuarta ronda, pág. 61.

Asimismo, ver [http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4\\_ecu\\_cos6.ppt#259,4,Slide 4](http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4_ecu_cos6.ppt#259,4,Slide 4)

<sup>81</sup> *Ídem*, pág. 60.

<sup>82</sup> En su documento de observaciones al proyecto de informe preliminar, remitido el 10 de febrero de 2014, Ecuador informó que “El 30 de octubre de 2013, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió aprobar el “*Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos que incluye la Cadena de Valor, el Mapa de Procesos, la Estructura Orgánica y la Estructura Descriptiva del Consejo de la Judicatura y su respectiva reforma.*”

<sup>83</sup> *Ídem*, pág. 78.

<sup>84</sup> En su documento de observaciones al proyecto de informe preliminar, remitido el 10 de febrero de 2014, Ecuador informó que “Asimismo, la página web de la CNJ cuenta con un Portal de Consultas Orientativas de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, para atender las inquietudes de los ciudadanos con respuestas informativas de carácter no vinculante”.

herramientas, para lo cual formulará recomendaciones (ver recomendaciones 4.4.6. y 4.4.7 del capítulo II de este informe).

[182] Asimismo, en relación a la atención de reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su servicio, el Comité advierte que ni la página Web del CJ ni la de la CNJ, que atienden la generalidad de la Función Judicial, cuentan con un buzón de quejas. Al respecto, el Comité considera que sería muy beneficioso que la institución incluyera un enlace de esta índole dentro de su portal de Internet, a los fines de facilitar aún más a la ciudadanía la presentación de sus quejas y denuncias, y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.8. del capítulo II de este informe).

[183] En sexto lugar, durante la visita *in situ*, los funcionarios de la CNJ pusieron de presente entre sus dificultades la ausencia de un sistema informático que recoja datos sobre la sustanciación de los diferentes tipos de delitos de manera general y específicamente los contemplados en la Convención. Cabe mencionar que el sistema informático SATJE se encuentra implementado únicamente en los tribunales de primera y segunda instancia. Al respecto, el Comité considera que el Estado analizado se beneficiaría de la provisión a la Función Judicial de los recursos presupuestarios y técnicos necesarios, a los efectos de que pueda contar con un sistema informático de esta naturaleza que sirva como herramienta para la sustanciación de datos relacionados con delitos de corrupción y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.9. del capítulo II de este informe).<sup>85</sup>

[184] Finalmente, durante la visita *in situ*, los funcionarios de la CNJ pusieron de presente entre sus necesidades de cooperación técnica, la necesidad de la implementación de un sistema informático integral que recoja datos sobre la sustanciación de los diferentes tipos de delitos establecidos en la Convención; y la necesidad de capacitación permanente a los operadores de justicia respecto de los tipos penales establecidos en la Convención. Al respecto, el Comité toma nota de las necesidades puestas de presente por la CNJ, de la necesidad de que el Estado analizado le proporcione el apoyo necesario e invita a los Estados Parte, así como a otras organizaciones de cooperación, a asistir a la entidad en estos temas. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.10. del capítulo II de este informe).<sup>86</sup>

### **4.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas**

[185] A través de la respuesta del Estado analizado al cuestionario y de la visita *in situ* se recabó información relativa a los resultados de los órganos jurisdiccionales y el Consejo de la Judicatura, de la cual se destaca la siguiente:

[186] En primer lugar, durante la visita *in situ*, los funcionarios de la CNJ pusieron de presente como una dificultad el hecho de que parte de la información se recaba a mano, y que no cuentan con un sistema informático integral que permita llevar estadísticas confiables y consistentes que puedan ser de utilidad para efectuar un análisis integral de sus resultados.

[187] En efecto, el Comité advierte que los cuadros estadísticos presentados por la CNJ tanto en la respuesta como en la visita *in situ* son incongruentes e inconsistentes y hacen imposible efectuar un análisis integral sobre los resultados de sus funciones de sanción<sup>87</sup>. Al respecto, el Comité resalta la importancia de poder contar con información estadística confiable que permita conocer con precisión el número de decisiones adoptadas en relación con los casos de corrupción,

<sup>85</sup> Ver [http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4\\_ecu\\_cnj2.ppt#256,1,Slide\\_1](http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4_ecu_cnj2.ppt#256,1,Slide_1)

<sup>86</sup> Ver [http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4\\_ecu\\_cnj2.ppt#256,1,Slide\\_1](http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4_ecu_cnj2.ppt#256,1,Slide_1)

<sup>87</sup> Ver [http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_ecu.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_ecu.htm), sección de la Función Judicial.

cuántas resultaron en imputación de responsabilidad o sanción, cuántas resultaron en no imputación de responsabilidad y cuántas resultaron en extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.11. del capítulo II de este informe).

[188] Adicionalmente, cabe resaltar que durante la visita *in situ*, durante la reunión sostenida con organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, investigadores y académicos, los representantes del Colegio de Abogados del Guayas expresaron que existía un gran rezago en los procesos judiciales, así como dificultades con el control de expedientes y otros problemas de corrupción en el sistema judicial. Al respecto, agregaron que estos problemas aún no están superados, pero que se espera que al agilizar el proceso y eliminar las visitas del operador judicial a los jueces, de conformidad con el proceso de reforma de la Función Judicial establecido por el Consejo de la Judicatura, estas dificultades disminuyan y con el tiempo desaparezcan.

[189] En lo referente a la información estadística sobre funciones de sanción de prácticas corruptas que generan responsabilidad disciplinaria, administrativa, patrimonial o civil, el Consejo de la Judicatura, en ocasión de la visita *in situ*, remitió la siguiente información:

SUMARIOS DISCIPLINARIOS RESUELTOS POR AÑOS DE GESTIÓN					
AÑO	DESTITUCIONES	SUSPENSIONES	MULTAS	AMONESTACIONES	TOTAL
2013	198	81	43	18	340
2012	365	247	95	12	719
2011	101	133	34	9	277
2010	36	45	58	31	170
2009	52	31	93	67	243
2008	114	59	265	114	552
TIPO DE MULTA				TOTAL DE SANCIONES	
MULTA DEL 40 % DE SU REMUNERACIÓN MENSUAL				1	
MULTA DEL 25 % DE SU REMUNERACIÓN MENSUAL				5	
MULTA DE 4 SALARIO BASICO UNIFICADO				6	
MULTA DEL 30 % DE SU REMUNERACIÓN MENSUAL				11	
MULTA DEL 20 % DE SU REMUNERACIÓN				16	

MENSUAL	
MULTA DE 3 SALARIO BASICO UNIFICADO	24
MULTA DE 1 SALARIO BASICO UNIFICADO	41
MULTA DEL 50 % DE SU REMUNERACIÓN MENSUAL	49
MULTA DEL 5 % DE SU REMUNERACIÓN MENSUAL	79
MULTA DE 2 SALARIO BASICO UNIFICADO	79
MULTA DEL 10 % DE SU REMUNERACIÓN MENSUAL	277
<b>TOTAL</b>	<b>588</b>

[190] En relación con la información estadística arriba transcrita, si bien puede apreciarse que el CJ ha estado realizando sus funciones disciplinarias, no es posible determinar si todas estas sanciones fueron resultado de prácticas corruptas o de otras causas que generan responsabilidad disciplinaria. Tampoco puede apreciarse si las multas que aparecen en el segundo cuadro fueron resultado de responsabilidades resultantes de prácticas corruptas o de otras causas, cuál fue el monto de las multas, si estas fueron hechas efectivas, como tampoco está desglosada esta información por año.

[191] En vista de lo anteriormente expuesto, el Comité formulará una recomendación al Estado analizado en el sentido de que considere completar y desglosar estas estadísticas bajo los términos establecidos en el Cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, a los fines de identificar retos y recomendar medidas correctivas, de ser necesario (ver recomendación 4.4.12. del capítulo II de este informe).

#### 4.4. Conclusiones y recomendaciones

[192] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la Función Judicial, en los acápite anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

**[193] La República del Ecuador ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer a la Función Judicial, como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 1 del capítulo II de este informe.**

- 4.4.1 Tomar las medidas que sean necesarias a los fines de implementar mecanismos de coordinación con otras entidades públicas, cuando sea apropiado, tales como la Fiscalía General del Estado (FGE), la Contraloría General del Estado (CGE) y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), entre otros, con la finalidad específica de colaborar en la optimización de la persecución, procesamiento y sanción de casos de corrupción (ver sección 4.2. del capítulo II de este informe)
- 4.4.2 Tomar las medidas que sean necesarias a los fines de asegurar que no existan obstáculos para que la FGE pueda proceder de manera oportuna con la instrucción fiscal de los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito (ver sección 4.2. del capítulo II de este informe)

- 4.4.3 Tomar las medidas que sean necesarias a los fines de aprobar e implementar la reglamentación de la nueva carrera judicial, teniendo en consideración las recomendaciones que se le formularon durante la segunda ronda de análisis (ver sección 4.2. del capítulo II de este informe)
- 4.4.4 Tomar las medidas que sean necesarias a los fines de implementar el Manual de Clasificación de puestos, Orgánico Funcional y el Índice Ocupacional del Consejo de la Judicatura, así como los manuales internos que correspondan (ver sección 4.2. del capítulo II de este informe)
- 4.4.5 Tomar las medidas que sean necesarias a los fines de implementar el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de la Judicatura (ver sección 4.2. del capítulo II de este informe)
- 4.4.6 Asegurar que los informes anuales del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia estén disponibles en sus portales de Internet en un formato legible y accesible de manera que le sea de utilidad a la ciudadanía y optimizar el proceso de rendición de cuentas (ver sección 4.2. del capítulo II de este informe)
- 4.4.7 Incorporar en el Portal de Internet de la Corte Nacional de Justicia la guía básica de orientación para que la ciudadanía pueda ser encaminada en la forma y los sitios donde debe realizar los requerimientos (ver sección 4.2. del capítulo II de este informe)
- 4.4.8 Incluir un buzón de quejas en los portales de Internet de los órganos jurisdiccionales y el Consejo de la Judicatura, a los fines de facilitar aún más a la ciudadanía la presentación de sus quejas y denuncias (ver sección 4.2. del capítulo II de este informe)
- 4.4.9 Proveer a los órganos jurisdiccionales y el Consejo de la Judicatura de los recursos presupuestarios y técnicos necesarios, a los efectos de que pueda contar con un sistema informático integral que recoja datos sobre la sustanciación de los diferentes tipos de delitos de manera general, y específicamente los contemplados en la Convención, dentro de los recursos disponibles, a los fines de identificar retos y recomendar medidas correctivas. (ver sección 4.2. del capítulo II de este informe)
- 4.4.10 Promover las gestiones necesarias con otros Estados y organizaciones de cooperación para proveer a la Función Judicial con la cooperación técnica necesaria para la implementación de un sistema informático integral que recoja datos sobre la sustanciación de los diferentes tipos de delitos establecidos en la Convención; y la necesidad de capacitación permanente a los operadores de justicia respecto de los tipos penales establecidos en la Convención (ver sección 4.2. del capítulo II de este informe)
- 4.4.11 Llevar información estadística consistente y confiable que permita conocer con precisión el número de decisiones adoptadas por los órganos jurisdiccionales en relación con casos de corrupción, cuántos resultaron en imputación de responsabilidad o sanción, cuántos resultaron en no imputación de responsabilidad y cuántos resultaron en extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos, a los fines de identificar retos y recomendar la adopción de medidas correctivas, de ser necesario (ver sección 4.2. del capítulo II de este informe).



- 4.4.12 Completar y desagregar la información estadística respecto de los procesos disciplinarios en la Función Judicial relacionados con prácticas corruptas que generan responsabilidad disciplinaria, administrativa, patrimonial o civil, de manera de que pueda conocerse el número total de casos investigados en los últimos cinco años, el número de decisiones adoptadas en relación con los mismos; el número de estas decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos, a los fines de identificar retos y recomendar la adopción de medidas correctivas, de ser necesario (ver sección 4.2. del capítulo II de este informe).

### III. BUENAS PRÁCTICAS

[194] De conformidad con lo previsto en el apartado V de la *Metodología para el Análisis de la Implementación de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción Seleccionada para la Cuarta Ronda* y en la *Estructura* adoptada por el Comité para los informes de dicha Ronda, se alude a continuación a las buenas prácticas identificadas por el Estado analizado, las cuales ha deseado compartir con los demás países integrantes del MESICIC, por considerar que pueden ser de beneficio para los mismos:

- En relación con la Fiscalía General del Estado (FGE):

[195] La FGE está implementando el Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales (SIAF)<sup>88</sup>, que entre otras cosas busca descongestionar las causas relacionadas con informes de indicios de responsabilidad penal remitidos por la CGE, además de acortar los términos de las investigaciones previas. El SIAF es una herramienta tecnológica que genera alertas para los fiscales y para los controladores de la Unidad de Gestión Procesal<sup>89</sup>.

- En relación con la Función Judicial:

[196] La creación de la Unidad de Transparencia de Gestión de la Función Judicial, creada mediante resolución 043-2013, 22 mayo 2013, cuyas atribuciones y responsabilidades incluyen velar por la transparencia y eficiencia en la Función Judicial; fomentar la cultura de transparencia y autocontrol; fortalecer la coordinación interinstitucional contra la corrupción; transparencia en contrataciones públicas y la creación de políticas de control de conflicto de intereses<sup>90</sup>

### IV. SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS<sup>91</sup>

[197] El Comité se referirá a continuación a los avances e información y desarrollos nuevos dados por la República del Ecuador en relación con las recomendaciones formuladas y las Medidas sugeridas por el Comité para su implementación en los informes de la Primera Ronda,

<sup>88</sup> Resolución No. 016 FGE-2013 [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_ecu\\_res016.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_res016.pdf)

<sup>89</sup> Ver ejemplo de alertas en [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_ecu Ejem.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu Ejem.pdf)

<sup>90</sup> Ver [http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4\\_ecu\\_cos2.ppt](http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4_ecu_cos2.ppt)

<sup>91</sup> El listado de las recomendaciones que después de este análisis aún requieren atención adicional o han sido reformuladas se encuentra incluido en el Anexo I de este Informe.

sobre las que estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas<sup>92</sup>, y procederá, según corresponda, a tomar nota de aquellas que han sido consideradas satisfactoriamente y de aquellas que necesitan atención adicional por el Estado analizado, y si es el caso, se referirá a la vigencia de tales recomendaciones y medidas y a su replanteamiento o reformulación, de acuerdo con lo previsto en la sección VI de la metodología adoptada por el Comité para la Cuarta Ronda.

[198] El Comité también tomará nota en este apartado del informe de las dificultades que para la implementación de las aludidas recomendaciones y medidas haya puesto de presente el Estado analizado, y de la cooperación técnica que haya sido requerida por el mismo con tal fin.

## **1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 y 2 DE LA CONVENCIÓN)**

### **Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento**

#### Recomendación 1.1.1.

*Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los conflictos de intereses.*

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Determinar con precisión implicancias, prohibiciones, incompatibilidades e inhabilidades relacionadas con conflictos de intereses privados con el interés público.*

[199] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida<sup>93</sup>, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la implementación de la misma, los siguientes:

[200] - Los formularios publicados por el Ministerio de Relaciones Laborales en noviembre de 2012, entre los cuales se encuentran los siguientes: Control de Pluriempleo; Nepotismo; No tener impedimento legal para el desempeño de un cargo de conformidad con el artículo 3 del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público (RLOSEP).

[201] - La adopción del subsistema de selección de personal, cuyo propósito, entre otros, es el de transparentar el proceso de contratación de funcionarios públicos de conformidad con la LOSEP y que éstos sean todos abiertos.

[202] - La entrada en vigencia de la nueva LOSEP (octubre de 2010), que incluye disposiciones contra el nepotismo y prohibiciones relacionadas con conflictos de intereses (arts. 6 y 24, incisos i) y j), tales como mantener relaciones comerciales, societarias o financieras, directa o indirectamente, con contribuyentes o contratistas de cualquier institución del Estado, en los casos en que el servidor público, en razón de sus funciones, deba atender personalmente dichos asuntos.

[203] - Ley Orgánica de Empresas Públicas (octubre de 2009), cuyo artículo 14 establece sus inhabilidades y prohibiciones, entre las cuales están las relacionadas con nepotismo; o el tener

<sup>92</sup>. Disponibles en: <http://www.oas.org/juridico/spanish/ecu.htm>

<sup>93</sup>. Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario, pág. 36.

suscritos contratos vigentes con la empresa pública o en general con el Estado en actividades relacionadas al objeto de la empresa pública.

[204] - Ley Orgánica de Participación Ciudadana (abril de 2010), cuyo artículo 79, relativo a observatorios, dispone que éstos se constituirán por grupos de personas u organizaciones ciudadanas que no tengan conflicto de intereses con el objeto observado.

[205] - Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (octubre de 2010), cuyo artículo 329 contempla prohibiciones a los miembros de los legislativos de los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados.

[206] - Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sector Financiero Popular y Solidario (mayo de 2011), cuyo artículo 148 contiene disposiciones relativas a conflictos de interés y nepotismo.

[207] - Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (octubre de 2011), cuyo artículo 46 se refiere a dedicación y diligencia, tocando el tema de prohibiciones y conflictos de interés.

[208] - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública cuyo artículo 63, literal 4 se refiere a los conflictos de interés por relaciones familiares o de consanguinidad.

[209] Al respecto, el Comité desea recordar que el origen de la medida a) de la recomendación de la sección 1.1.1. del capítulo IV de este informe, se remonta al análisis de la primera ronda, en donde el Comité expresó que:

[210] *“Aunque con una amplia interpretación del artículo 123 de la Constitución Política, que dispone que el funcionario público deberá abstenerse de actuar en los casos en que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad a los que preste sus servicios, pudiera entenderse que están cubiertos los casos de conflictos de intereses que para los mismos pudieran derivarse de sus intereses particulares de índole gremial, o de circunstancias tales como su pertenencia a una asociación profesional o a una organización no gubernamental, el Comité estima que sería conveniente que la República del Ecuador considere desarrollar legalmente tal precepto constitucional regulando específicamente las eventualidades que frente a tales situaciones se consideren mas relevantes, complementando las normas de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de su Reglamento que contienen previsiones frente a otras situaciones de conflictos de intereses.”*

[211] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida a) de la recomendación de la sección 1.1.1. del capítulo IV de este informe, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, toda vez que aún persiste la falta de reglamentación en las situaciones descritas arriba, relativas a las eventualidades que pudieran derivarse de intereses particulares tales como los de índole gremial, o de circunstancias tales como la pertenencia de un empleado público a una asociación profesional o a una organización no gubernamental, entre otras.

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

[212] *Establecer restricciones adecuadas, cuando corresponda, para quienes dejan de desempeñar un cargo público, por un período razonable.*

[213] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida<sup>94</sup>, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance de la implementación de la misma, los siguientes:

[214] La expedición de las siguientes normativas dentro de las cuales se incluyen restricciones en este sentido: Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero; Ley de Seguridad Social; Ley General de Instituciones del Sistema Financiero; y Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera.

[215] El Art. 153 de la CRE que establece que “*Quienes hayan ejercido la titularidad de los ministerios de Estado y las servidoras y servidores públicos de nivel jerárquico superior definidos por la ley, una vez hayan cesado en su cargo y durante los siguientes dos años, no podrán formar parte del directorio o del equipo de dirección, o ser representantes legales o ejercer la procuración de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, que celebren contrato con el Estado, bien sea para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual, ni ser funcionarias o funcionarios de instituciones financieras internacionales acreedoras del país*”.

[216] Por otra parte, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, los representantes del Estado analizado pusieron de presente que la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), adoptada en 2010, no establece restricciones adecuadas para quienes dejan de desempeñar un cargo público, por un período razonable.

[217] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida b) de la recomendación de la sección 1.1.1. del capítulo IV de este informe, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma.

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Diseñar e implementar mecanismos para difundir y capacitar a todos los servidores públicos sobre las normas de conducta, incluyendo las relativas a conflictos de intereses, y para resolver las consultas de los mismos al respecto, así como proporcionar capacitación y actualización periódica con relación a dichas normas.*

[218] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida<sup>95</sup>, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la implementación de la misma, los siguientes:

[219] - Los mecanismos para difundir y capacitar a los servidores públicos sobre los temas objeto de la medida c), tales como el Modelo de Prácticas transparentes del CPCCS;

[220] - Las capacidades y competencias del personal con respecto a la ética pública desarrollados por la CGE a través de su Dirección de Capacitación;

[221] - La capacitación continua en el tema anticorrupción, incluido los temas de la referencia, por la FGE;

---

<sup>94</sup> *Ídem*, págs. 40-44.

<sup>95</sup> *Ídem*, págs. 45-54

[222] - Los talleres y charlas a nivel nacional para la difusión del Código de Ética Institucional por parte de la Dirección de Talento Humano, a cargo de la Superintendencia de Compañías, entre otros<sup>96</sup>.

El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida c) de la recomendación de la sección 1.1.1. del capítulo IV de este informe, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, toda vez que si bien puede observarse que sus instituciones han desarrollado e implementado mecanismos para difundir y capacitar a los servidores públicos sobre las normas de conducta, no queda claro que el tema de conflictos de interés haya estado contemplado en los mismos; como tampoco se observa que se hayan previsto mecanismos para resolver las consultas de los servidores públicos al respecto.

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Realizar evaluación de la utilización y efectividad de las normas de conducta para prevenir conflictos de intereses y de los mecanismos para su cumplimiento existentes en Ecuador, como instrumentos para prevenir la corrupción y, como resultado de dicha evaluación, considerar la adopción de medidas para promover, facilitar y consolidar o asegurar la efectividad de los mismos con dicho fin.*

[223] En su respuesta, el Estado analizado presenta información en relación con la anterior medida, de la cual se destaca la siguiente:

[224] - Los estudios que realiza el Ministerio de Relaciones Laborales para identificar posibles anomalías y la verificación de información relativa a quejas o denuncias de la ciudadanía relativa a los diferentes servicios públicos.

[225] El Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado continúe dando atención a la medida d) de la recomendación de la sección 1.1.1. del capítulo IV de este informe, toda vez que aún no se ha realizado la evaluación de la utilización y efectividad de las normas de conducta para prevenir conflictos de intereses objeto de la misma.

.Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Realizar un estudio sobre la posibilidad de compilar las normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas a que se refiere la Convención.*

[226] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, un paso que contribuye a la implementación de la misma, la siguiente<sup>97</sup>:

[227] “En la República del Ecuador existen en vigencia un gran número de “códigos de ética” y otras normas de conducta expedidos en forma particular por cada institución pública razón por la cual en la respuesta del Ecuador al cuestionario de la Primera Ronda de Análisis, se adjuntó una recopilación de dichas normas. A este respecto cabe informar que la Asamblea Nacional ha iniciado el análisis de la indicada recopilación, encaminada a su actualización, a

---

<sup>96</sup>. Ídem, págs. 44-54.

<sup>97</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente al seguimiento, págs. 58-66.

*partir de las reformas provenientes de la Constitución de la República vigente desde octubre del 2008 en el Ecuador y toda la legislación desarrollada a partir de los nuevos postulados constitucionales (...)*”.

[228] Asimismo, el Comité toma nota de que la Asamblea Nacional pone de presente en la Respuesta al cuestionario que *“Una de las principales dificultades que se ha observado en la implementación de esta recomendación, es la significativa dispersión normativa relacionada con las normas éticas y de conducta expedidas para los servidores públicos, que lamentablemente por la multiplicidad de criterios institucionales no se ha logrado llegar a acuerdos que permitan su homologación”,* que *“Para la implementación de esta recomendación, debería intervenir la Asamblea Nacional como organismo representante de la Función Legislativa y como ente de control la Contraloría General del Estado”,* y que *“En lo que hace relación a las necesidades específicas de cooperación técnica, es importante señalar que las experiencias de implementación de la recomendación en otros países y la aplicación del derecho comparado, son sin duda herramientas que permiten una mejor adecuación en el ámbito interno”*.

[229] Al respecto, el Comité toma nota de que durante el transcurso de la visita *in situ*, la Asamblea Nacional completó la información suministrada en la respuesta y manifestó lo siguiente<sup>98</sup>:

[230] *“En el año 2004, la Asamblea Nacional realizó un primer análisis a partir de la identificación del universo de normas relacionadas con la temática y posteriormente, con el cambio constitucional de 2008 y las reformas legales producidas para armonizar el ordenamiento infraconstitucional con el nuevo régimen jurídico, actualizó dicha recopilación normativa y la adjuntó como respuesta al cuestionario de seguimiento a las Recomendaciones de la Primera Ronda, en el 2013.*

[231] *“La recopilación normativa antes señalada constituye parte de un proceso de análisis y estudio del marco jurídico constitucional y legal vigente en el Ecuador, que a la luz de la técnica jurídica, en concordancia con la recomendación formulada por el Comité de Expertos, permitirá realizar un análisis sobre la posibilidad de compilar las diferentes normas de conducta existentes y evaluar en qué grado la dispersión normativa puede ser reducida, considerando que en el Ecuador, los funcionarios públicos tenemos tres tipos de responsabilidades: administrativas, civiles y penales.”*

[232] El Comité, en vista de lo anterior, toma nota de del paso dado por el Estado analizado para la implementación de la medida e) de la anterior recomendación, de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, y toma nota de las dificultades puestas de presente por el Estado analizado.

## **1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos**

### **Recomendación 1.2.1**

*Fortalecer el sistema de control de los recursos de la administración pública.*

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

---

<sup>98</sup> Ver [http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4\\_ecu\\_seg1.ppt](http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4_ecu_seg1.ppt)

*Considerar la posibilidad de que, previos los trámites correspondientes, el Proyecto de Ley para la Modernización del Tratamiento Penal de la Corrupción al que se alude en la sección 1.2.2 del capítulo II del presente informe, sea aprobado como ley por parte de la autoridad competente.*

[233] En su respuesta, el Estado analizado presenta la siguiente información con respecto a la anterior medida<sup>99</sup>:

[234] *“El “Proyecto de Ley para la Modernización del Tratamiento Penal de la Corrupción”, al que se alude en la sección 1.2.2 del capítulo II del Informe de la Primera Ronda, no llegó a ser aprobado por la Función Legislativa. Sin embargo, en la República del Ecuador, conforme fuera informado en la respuesta al cuestionario de la Tercera Ronda, el “Anteproyecto de Código Orgánico de Garantías Penales, que plantea una reforma integral que contempla reformas a lo sustantivo, adjetivo penal y ejecución de penas, llevado a cabo por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sometido a la sociedad civil para las consideraciones correspondientes, el cual busca que el sistema penal ecuatoriano se adapte a los principios vigentes de la Constitución vigente y a la normativa internacional.”. Actualmente se encuentra en discusión (conforme se detalla más adelante) en la Asamblea Nacional (Función Legislativa), bajo la denominación de “Proyecto de Código Orgánico Integral Penal”(…)*

[235] Al respecto, el Comité toma nota de que la medida a) de la anterior recomendación se refiere a la adopción de un proyecto de ley que ya no existe y que por lo tanto, la medida a) de la recomendación de la sección 1.2.1. del capítulo IV de este informe, ha dejado de tener vigencia.

#### Medida b)

*Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar información sobre la misma.*

#### Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Realizar evaluación de la utilización y efectividad de las normas de conducta para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos públicos y de los mecanismos para su cumplimiento existentes en Ecuador, como instrumentos para prevenir la corrupción y, como resultado de dicha evaluación, considerar la adopción de medidas para promover, facilitar y consolidar o asegurar la efectividad de los mismos con dicho fin.*

[236] En su respuesta, el Estado analizado presenta información con respecto a la anterior medida<sup>100</sup>, de la cual se destaca la siguiente:

[237] *“La evaluación de la utilización y efectividad de las normas de conducta para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos públicos tiene como uno de sus mecanismos, las acciones de control que realiza la Contraloría General del Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 212, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (…)*

[238] El Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado continúe dando atención a la medida c) de la recomendación de la sección 1.2.1. del capítulo IV de este informe,

---

<sup>99</sup> *Ídem*, pág. 67.

<sup>100</sup> *Ídem*, pág. 76-80.

toda vez que aún no se ha realizado la evaluación de la utilización y efectividad de las normas de conducta para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos públicos y de los mecanismos para su cumplimiento existentes en Ecuador, objeto de la misma.

**1.3. Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento**

Recomendación 1.3.1

*Fortalecer los mecanismos con los que cuenta la República del Ecuador para exigir a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.*

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Desarrollar el texto constitucional (artículo 97, num. 14 de la Constitución Política) que establece el deber y responsabilidad de denunciar y combatir los actos de corrupción para el caso de los servidores públicos que omitan tales denuncias mediante la identificación de las responsabilidades administrativas pertinentes y sus sanciones.*

[239] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, un pasos que contribuyen a la consideración satisfactoria de la misma, la siguiente<sup>101</sup>:

[240] -El Art. 22 de la LOSEP que establece los deberes de las y los servidores públicos, que contempla, entre otros, el literal g) que cita: "*Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan causar daño a la administración*". Al respecto, el incumplimiento de los citados deberes, de conformidad con lo previsto en los Arts. 41 al 43 de la misma Ley, da lugar a sanciones administrativas, sin perjuicio de la acción civil o penal que pudiera originar el mismo hecho.

[241] - El artículo 292 del Código Penal que establece una sanción penal, de quince días a seis meses, para funcionarios públicos o agentes de policía, que teniendo noticia de la perpetración de un delito no lo pongan inmediatamente en conocimiento de un juez de instrucción (actualmente, de un fiscal).

[242] El Comité, en vista de lo anterior, toma nota de la consideración satisfactoria de la medida a) de la recomendación 1.3.1. anterior.

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Facilitar el cumplimiento de dicha obligación constitucional, a través de los medios de comunicación que se estimen adecuados, regulando su utilización; y desarrollar el programa de protección dispuesto por la ley, de tal manera que los denunciantes encuentren mayores garantías que las existentes frente a las amenazas o retaliaciones de las que puedan ser objeto como consecuencia del cumplimiento de esta obligación.*

---

<sup>101</sup> Ídem, págs. 81-90.



[243] En su respuesta, el Estado analizado presenta información con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca la siguiente<sup>102</sup>:

[244] “En la Constitución de la República del Ecuador de 2008, en actual vigencia, la Fiscalía General del Estado tiene a su cargo el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes dentro del Proceso Penal (...)”. Asimismo, en la respuesta, el Estado analizado procede a describir el sistema de protección de la referencia, así como estadísticas de su implementación por la FGE.

[245] Sobre el particular, el Comité desea señalar que la existencia del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes dentro del Proceso Penal ya había sido citado como un avance en el informe de la tercera ronda.

[246] Adicionalmente, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, los representantes del CPCCS pusieron de presente que, si bien existe este sistema de protección para víctimas y testigos en el proceso penal, no existe un sistema propio de protección para los denunciantes de actos de corrupción en otros ámbitos tales como el administrativo. En ese sentido, resaltaron la necesidad de garantizar los derechos de estos denunciantes, especialmente de los servidores públicos, incluida su estabilidad laboral.

[247] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de la medida b) de la anterior recomendación.

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Capacitar a los funcionarios públicos en relación con la existencia y el propósito de la responsabilidad de denunciar ante las autoridades competentes los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.*

[248] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la implementación de la misma, la siguiente<sup>103</sup>:

[249] - “En la capacitación especializada se ha estructurado la malla curricular en la que se encuentra el proyecto formativo sobre anticorrupción dirigido a Fiscales y personal Fiscal Administrativo Misional. Cabe anotar que la responsabilidad de capacitación de toda la Función Judicial le corresponde al Consejo de la Judicatura, y solamente la especializada en temas concernientes a la institución a la Escuela de Fiscales.”

[250] - “En el Reglamento Orgánico de la Escuela Judicial se indica que, ésta, tiene como objetivo la adecuada selección, formación inicial, formación continua, especializada y evaluación académica del desempeño de los servidores de la Función Judicial. Así como de los formadores y capacitadores de la Escuela Judicial. Su reglamento está publicado en el Registro Oficial 189 de 14 de octubre de 2003. Se adjunta Resolución.”

[251] - “La Escuela de Fiscales cooperó con el Consejo Nacional de la Judicatura, con la Escuela Judicial, en las áreas de capacitación en la lucha contra la corrupción. Igualmente,

---

<sup>102</sup> Ídem, págs. 91-96.

<sup>103</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente al seguimiento, págs. 97-98.

*debe extender su cooperación nacional con la Secretaría Nacional de Transparencia y con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, también con la cooperación internacional y con universidades y sociedades científicas especializadas.”*

[252] Asimismo, el Estado analizado en su respuesta, puso de presente entre sus dificultades que *“La estructura de la Escuela de Fiscales no permitía un adecuado desarrollo académico, no existía el presupuesto necesario para llevar a cabo los eventos académicos respectivos, carecía de equidad en la capacitación de fiscales y servidores, no contaba con un equipo multidisciplinario para trabajar y no se implementó la plataforma virtual para la capacitación. (www.fiscalia.gob.ec)”*

[253] El Comité, en vista de lo anterior, toma nota del paso dado por el Estado analizado para la implementación de la medida c) de la anterior recomendación y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, toda vez que si bien puede observarse que se ha capacitado a los funcionarios públicos en temas anticorrupción, no es posible determinar que se haya proporcionado capacitación específicamente en la existencia y el propósito de la responsabilidad de denunciar ante las autoridades competentes los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. Adicionalmente, el Comité toma nota de las dificultades puestas de presente por el Estado analizado.

## **2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCION)**

### Recomendación 2.1

*Fortalecer los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos*

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes, en que corresponda dar publicidad a las declaraciones patrimoniales juramentadas de los servidores públicos (incluye ingresos, activos y pasivos), cuando sea apropiado.*

[254] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos que permiten concluir que la medida a) de la recomendación 2.1. anterior no es aplicable al Estado analizado<sup>104</sup>:

[255] *“Sobre esta medida sugerida, el numeral 19 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza a las personas “el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley”. La citada disposición concuerda con lo previsto en el artículo 92 ibídem que regula la acción de habeas data.*

[256] *“El artículo 6 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece que se considera confidencial aquella información pública personal, que no*

---

<sup>104</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente al seguimiento, págs. 99-101.

*está sujeta al principio de publicidad, y comprende aquella derivada de sus derechos personalísimos y fundamentales garantizados por la Constitución.*

[257] *“Con la finalidad de que este derecho de las personas sea aplicado conforme al espíritu de la norma constitucional, la Contraloría General del Estado, mediante Acuerdo No. 011-CG, promulgado en el Registro Oficial Suplemento No. 600 de 28 de mayo de 2009, dispuso que: “Las servidoras y servidores de las instituciones del Estado y el personal encargado del control de las declaraciones patrimoniales juradas en la Contraloría General del Estado, mantendrán confidencialidad y absoluta reserva en el manejo de esas declaraciones. Solo cuando exista orden judicial se entregarán copias de aquellas declaraciones”.*

[258] *“La normativa relacionada con el registro y control de las declaraciones patrimoniales juradas se la puede obtener en la página web [www.contraloria.gob.ec/normatividad\\_vigente.asp](http://www.contraloria.gob.ec/normatividad_vigente.asp).”*<sup>105</sup>

[259] El Comité, en vista de lo anterior, concluye que la medida a) de la anterior recomendación no es aplicable al Estado analizado y por tanto ha dejado de tener vigencia.

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Realizar evaluación y seguimiento del cumplimiento de la obligación de presentar declaración patrimonial juramentada por parte de los servidores públicos (incluye ingresos, activos y pasivos), señalando el grado de cumplimiento y las medidas pertinentes que corresponda ajustar o corregir.*

[260] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la implementación de la misma, de la cual se destaca la siguiente<sup>106</sup>:

[261] *“En los últimos cuatro años, el grado de cumplimiento de la obligación de declarar el patrimonio por parte de los servidores públicos ecuatorianos que se posesionan en un cargo público, es de aproximadamente 95 %, considerando que la Constitución exige ese requisito para la posesión en el cargo, y si de hecho alguien inicia la gestión sin presentar la declaración patrimonial, la ley lo sanciona con la anulación inmediata del nombramiento, el cese definitivo de funciones del obligado, además de la remoción de la autoridad que infringiere esta disposición. La Contraloría General del Estado permanentemente realiza seguimiento al cumplimiento oportuno de la presentación de la declaración patrimonial jurada inicial, y comunica a la autoridad nominadora los casos de incumplimiento, para que adopte las acciones legales correspondientes.”*

[262] Por otra parte, en la respuesta, el Estado analizado puso de presente las siguientes dificultades:

[263] *“En el caso de la declaración patrimonial al finalizar la gestión, la ley concede al declarante el plazo de 20 días para realizarla. La Constitución dispone que por falta de presentación de tal declaración se presumirá enriquecimiento ilícito; sin embargo, no hay sanción, salvo la que se derive del resultado del examen especial de auditoría que se practicará por presunción de enriquecimiento ilícito. Como medida para evitar que los servidores públicos*

---

<sup>105</sup> Ídem, pág. 100.

<sup>106</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente al seguimiento, págs. 99-101.

*salientes omitan realizar la declaración patrimonial jurada al finalizar la gestión, la cual es fundamental para poder compararla con el patrimonio declarado al inicio, la Contraloría General del Estado dispuso a los jefes de personal de las instituciones que la exijan como un documento necesario para el trámite de salida.”*

[264] *“La única dificultad para realizar evaluación y seguimiento del cumplimiento de la obligación de presentar declaración patrimonial juramentada por parte de los servidores públicos, tiene relación con el universo de servidores obligados, que es de aproximadamente 500.000. Consecuentemente, además de las estrategias detalladas en los párrafos anteriores, se deben realizar controles aleatorios y también focalizar las acciones en determinados servidores que tienen la dirección política y administrativa del Estado, lo cual eventualmente deja al margen del control a servidores de nivel jerárquico inferior”<sup>107</sup>.*

[265] Por otra parte, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, los representantes de la CGE pusieron de presente las siguientes dificultades:

[266] - La Ley Orgánica de la CGE vigente establece una periodicidad de 2 años para la presentación de las declaraciones juradas. Sin embargo, no ha quedado claro si esta periodicidad es aplicable a todos los funcionarios. Al respecto, se ha solicitado una reforma legislativa y uno de los motivos del pedido es precisamente esclarecer este tema.

[267] El Comité, en vista de lo anterior, toma nota del paso dado por el Estado analizado para la implementación de la medida b) de la anterior recomendación y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma y toma nota de las dificultades puestas de presente por el Estado analizado.

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Optimizar los sistemas de análisis del contenido de las declaraciones juradas patrimoniales con el objeto de detectar y prevenir conflictos de intereses, así como detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito.*

[268] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la implementación de la misma, de la cual se destaca la siguiente<sup>108</sup>:

[269] *“Desde el año 2000, la Contraloría General del Estado implementó un sistema de registro y control informático de las declaraciones patrimoniales juradas, en el cual se ingresa la información del patrimonio de los servidores públicos. El sistema fue modificado en el año 2009 para que brinde mayores posibilidades para la comparación automatizada de las declaraciones. Bajo determinados parámetros, alerta sobre los casos de incremento patrimonial que deberían ser investigados, como paso previo a evidenciar presunciones de enriquecimiento ilícito.*

[270] *“Sin embargo, debido a la cantidad de declaraciones patrimoniales juradas cuya información se digita, en los últimos dos años se ha venido analizando la necesidad de implementar un software con nueva tecnología para registro en línea de la información, y que además alerte sobre casos de presunto enriquecimiento ilícito. El indicado software lo está desarrollando la Contraloría General del Estado, con técnicos propios, e inició en mayo de 2012*

---

<sup>107</sup> *Ídem*, pág. 104.

<sup>108</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente al seguimiento, pág. 110.

con la aprobación del documento de “Visión y Alcance del Proyecto de Declaraciones Patrimoniales Juradas”. El objetivo es que para el año 2013 se pueda automatizar el proceso de declaraciones patrimoniales juradas basado en estándares de tecnología moderna en una plataforma Web, permitiendo mantener una interoperabilidad con la infraestructura actual y futura de Contraloría General del Estado.

[271] “Por otra parte, la Contraloría General del Estado ha elaborado un proyecto de ley para el control y registro de las declaraciones patrimoniales juradas, considerando que es necesario actualizar la ley de la materia, vigente desde mayo de 2003, y armonizarla con las disposiciones de la actual Constitución de la República del Ecuador, así como establecer procedimientos efectivos para la detección de casos de presunto enriquecimiento ilícito. Ese proyecto de ley contempla la eliminación de la obligación de declarar el patrimonio a través de escritura pública (otorgada ante Notario); implementar el registro en línea de la declaración patrimonial, utilizando un formulario electrónico; mayor participación de las unidades administradoras de recursos humanos de las instituciones del Estado, para que efectúen el control de la presentación oportuna de las declaraciones y las remitan a la Contraloría General del Estado; y, determinar que la periodicidad para la actualización de la declaración patrimonial sea cada dos años”.

[272] Por otra parte, en la misma respuesta al cuestionario el Estado analizado pone de presente las siguientes dificultades:

[273] “De acuerdo con las atribuciones constitucionales y legales, a la Contraloría General del Estado le compete desarrollar acciones para detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito a través del examen y confrontación de las declaraciones patrimoniales juradas. Ese instrumento, no está concebido para detectar conflictos de intereses, y sí, de alguna manera, para prevenirlos, como se analiza a continuación:

[274] “De acuerdo con el artículo 232 de la Constitución de la República, no pueden ser funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan.

[275] “Los servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en los que presten servicios.

[276] “En consecuencia, el conflicto de intereses está regulado por la Constitución de la República como una inhabilidad para el ingreso al servicio público, y si se presentare el conflicto con posterioridad a la posesión o ejercicio del cargo, el servidor debe abstenerse de actuar; y, por tanto, el instrumento de declaración patrimonial jurada es eficaz para prevenir conflictos de intereses, considerando que por disposición de la Ley Orgánica de Servicio Público, el servidor debe incluir en la declaración patrimonial el juramento de que no se encuentra incurso en nepotismo, inhabilidades o prohibiciones previstas en la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico vigente. Por el contrario, ese instrumento, por sí mismo, no es el medio más eficaz para detectar conflictos de intereses.”

[277] Asimismo, durante la visita *in situ*, los representantes de la CGE manifestaron que el nuevo sistema informático agilizaría el proceso, sobre todo si es que se aprueba la disposición que elimina la obligación de declarar el patrimonio a través de escritura pública (otorgada ante Notario). Por otra parte subsiste la dificultad de que aún no se contempla la firma electrónica porque su implementación resulta muy costosa y por lo tanto, aún habría que presentar la

declaración físicamente. Al respecto, el Comité toma nota de la importancia de que se permitiera la firma electrónica simple<sup>109</sup> y que se contara con los recursos para implementar el sistema.

[278] El Comité, en vista de lo anterior, toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para la implementación de la medida c) de la anterior recomendación y toma nota de las dificultades puestas de presente por el Estado analizado, así como de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma.

### **3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN)**

#### Recomendación 3.1

*Fortalecer los órganos de control superior, en lo concerniente a las funciones que desarrollan en relación con el control del efectivo cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4, y 11 de la Convención, con el objeto de asegurar la eficacia en dicho control, dotándolas con los recursos necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones; procurando que cuenten para ello con un mayor apoyo; y estableciendo mecanismos que permitan la efectiva coordinación institucional de sus acciones, cuando corresponda, y una continua evaluación y seguimiento de las mismas.*

[279] En su respuesta, el Estado analizado ofrece información relacionada con la recomendación 3.1., de la cual se destaca la siguiente:<sup>110</sup>

[280] *“En ejercicio de las competencias asignadas a la Instancia de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social, el 15 de enero de 2013 fue aprobado el “Plan Nacional De Prevención y Lucha Contra La Corrupción 2013 – 2017, que se fundamenta “... en los principios del Estado Constitucional de Derechos y Justicia” y desarrolla una propuesta programática dirigida a generar una cultura de prevención y combate contra la corrupción en el país. Este Plan propone la creación de un sistema nacional en el que todas y todos los actores que tienen roles anticorrupción y la ciudadanía compartan espacios, buenas prácticas y proyectos que lleven a implantar una cultura de vivencia de los valores de la ética laica como requisito para la plena exigibilidad y garantía de derechos.”*

[281] *“El Plan es una primera acción que pretende sentar las bases para la construcción de un “Sistema Nacional” que reunirá planes, actores e instituciones con roles en la lucha contra la corrupción en el país, para lo cual se prevé la suscripción del “Acuerdo Nacional Anticorrupción”.*

[282] El Comité, en consideración a que en el capítulo II del presente informe se efectuó un análisis actualizado con respecto al fortalecimiento y a la coordinación interinstitucional en relación con los órganos de control mencionados en la recomendación 3.1. se acoge a lo indicado en dicho capítulo en relación con esta materia para cada uno de ellos, y estima, por lo tanto, que la recomendación 3.1. es redundante.

---

<sup>109</sup> El Artículo 13 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos (Ley No. 2002-67) define la firma electrónica de la siguiente manera: “Art. 13.- Firma electrónica.- Son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que puedan ser utilizados para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos, e indicar que el titular de la firma aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje de datos”.

<sup>110</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente al seguimiento, págs. 111-113.

### Recomendación 3.2

[283] Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar información sobre la misma.

## **4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA CONVENCION)**

### **4.1. Mecanismos para el acceso a la información**

#### Recomendación 4.1.1.

*Fortalecer los mecanismos para garantizar el acceso a la información pública.*

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Fortalecer los mecanismos para hacer efectivo el derecho de la sociedad civil y de los ciudadanos al acceso a la información pública y a recurrir las decisiones por medio de las cuales se deniegan las solicitudes de información, de tal manera que se garantice un fácil acceso ciudadano a dichos mecanismos y que los mismos sean efectivos en la protección del derecho a la información pública. A este respecto, se sugiere considerar la posibilidad de que, previos los trámites correspondientes, el Proyecto de Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública al que se alude en la sección 4.2.2 del capítulo II del presente informe, sea aprobado como ley por parte de la autoridad competente.*

[284] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la implementación de la misma, de la cual se destaca la siguiente<sup>111</sup>:

[285] - Las actividades de implementación de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) y su Reglamento (RLOTAIP), por parte de la Defensoría del Pueblo, que es el órgano ejecutor de dicha normativa, incluida la definición de la estructura del equipo de la Coordinación; la Planificación Operativa; el establecimiento y sociabilización de las directrices a cumplirse en cuanto a la recepción de los Informes Anuales sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública; la generación de herramientas metodológicas e informáticas para la vigilancia del cumplimiento de presentación de informes, incluidas las mejoras del sistema informático de indicadores y la sustentación de un nuevo catastro de entidades obligadas a cumplir con la LOTAIP, entre otros.

[286] - Las actividades de capacitación a instituciones públicas dirigidos a promocionar el derecho de acceso a la información, incluido el Programa Nacional de Capacitación a Instituciones Públicas, por parte de la Defensoría del Pueblo; y las actividades de capacitación a través de la Subsecretaría de Transparencia y Gestión<sup>112</sup>.

---

<sup>111</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente al seguimiento, pág. 113-141.

<sup>112</sup> *Ídem*, págs. 123-140.

[287] Por otra parte, en su respuesta, el Estado analizado plantea una serie de retos institucionales y dificultades que se resumen a continuación:

[288] Por parte de la Defensoría del Pueblo<sup>113</sup>:

- Necesidad de diseñar estrategias que permitan articular las acciones de la Coordinación Nacional de Transparencia con otras instancias de exigibilidad de derechos desde la sociedad civil.
- Contar con una propuesta permanente de capacitaciones cuya temática sea el Derecho de Acceso a la Información Pública con su doble dimensión que implica, por un lado, el derecho de todos los ciudadanos al acceso a la información pública; y por otro lado, la obligación de las Instituciones del Sector Público a proporcionar información oportuna.
- Fortalecer el Sistema Informático con miras a que las instituciones remitan su informe en versión digital.
- Implementar el proceso de monitoreo y vigilancia al cumplimiento de la LOTAIP fijando las respectivas directrices y procedimientos que conlleven a su consolidación dentro de la Defensoría del Pueblo, y su difusión hacia las instituciones públicas e instituciones privadas que reciben fondos públicos.
- Desarrollar vínculos de cooperación entre la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo, así como la articulación de una red donde se encuentre el Estado y las organizaciones ciudadanas para fortalecer el acceso a la información.

[289] Por parte de la Subsecretaría de Transparencia y de Gestión<sup>114</sup>:

- Inasistencia de los servidores/as públicos/as convocados/as a los talleres de capacitación.
- Los delegados no correspondían a las áreas que tienen como responsabilidad el ingreso o gestión de la información de la LOTAIP.
- No hay aún la total apertura de algunas instituciones para facilitar los procesos de entrega y publicación de la información, en especial la financiera.
- Las empresas públicas registran un menor desempeño en el cumplimiento del Art.7 de la LOTAIP respecto de las instituciones públicas, lo que denota el grado compromiso de las mismas.

[290] Por otra parte, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, los representantes de la Defensoría del Pueblo pusieron de presente que cuentan únicamente con una planta de 7 funcionarios que para dar servicio a las 1511 instituciones públicas sujetas a la LOTAIP. Adicionalmente, estos funcionarios no son especialistas. Al respecto, informaron que se encuentran en proceso de abrir nuevos perfiles para reemplazar a estas personas pero que no se espera que su número aumente. El Comité toma nota de que este es un número muy reducido de personal para atender el universo de instituciones públicas sujetas a la LOTAIP, sobre todo

---

<sup>113</sup> *Ídem*, pág. 125.

<sup>114</sup> *Ídem*, pág. 148.



teniendo en cuenta que en esa ocasión se informó también que se piensa agregar un catastro de instituciones privadas sujetas a la LOTAIP.

[291] Asimismo, agregaron que la DPE aún no cuenta con un *software* que le permita procesar la información de manera ágil y oportuna, que todo se está procesando manualmente y que han firmado un convenio con Eurosocietal para trabajar en la implementación de un *software* para 2014.

[292] Por lo que respecta a la información reservada, el artículo 17 b) de la LOTAIP dispone que “*No procede el derecho a acceder a la información pública, exclusivamente en los siguientes casos: ... b) Las informaciones expresamente establecidas como reservadas en leyes vigentes.*” Asimismo, de conformidad con el artículo 18 de la LOTAIP, “*Las instituciones públicas elaborarán semestralmente por temas, un índice de los expedientes clasificados como reservados. En ningún caso el índice será considerado como información reservada. Este índice de información reservada, detallará: fecha de resolución y período de vigencia de esta clasificación.*”

[293] Sobre este tema los representantes de la DPE expresaron durante la visita *in situ*, que existen dificultades ya que no todas las instituciones cuentan con leyes donde se dispone cuál es la información reservada, lo que otorga gran discrecionalidad a los funcionarios. Aún más, la información reservada tiene que ser comunicada a la DPE. Sin embargo, hasta la fecha las instituciones no han estado enviando esta información a la DPE, lo que dificulta aún más la aplicación efectiva de la LOTAIP. Asimismo, manifestaron que el Decreto Ejecutivo No. 16 de junio de 2013<sup>115</sup> ha sido fuertemente criticado por la sociedad civil, por considerar estas organizaciones que limita su acceso a la información.

[294] El Comité, en vista de lo anterior, toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para la implementación de la medida a) de la anterior recomendación y de las dificultades puestas de presente. En atención a ello, el Comité replantea la medida a) de la siguiente manera (ver Anexo I, recomendación 2.1., medida b):

*- Considerar fortalecer los mecanismos para hacer efectivo el derecho de la sociedad civil y de los ciudadanos al acceso a la información pública y a recurrir las decisiones por medio de las cuales se deniegan las solicitudes de información, de tal manera que se garantice un fácil acceso ciudadano a dichos mecanismos y que los mismos sean efectivos en la protección del derecho a la información pública. A este respecto, se sugiere considerar fortalecer al órgano de control encargado de implementar la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), de manera que cuente con los recursos humanos y presupuestarios necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones, teniendo en consideración los recursos disponibles.*

[295] Cabe señalar que durante la visita *in situ*, durante las entrevistas sostenidas con organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, académicos e investigadores, surgieron las siguientes observaciones:

[296] La organización de la sociedad civil, Corporación Participación Ciudadana expresó que entre los retos para la cabal implementación de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) se encontraban los siguientes:

---

<sup>115</sup> Ver [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_ecu\\_dec16.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_dec16.pdf)

- No se ha creado un nuevo órgano de control para la implementación de la LOTAIP, sino que se encomendó esta tarea a la Defensoría del Pueblo, institución que cuenta con muy pocos recursos para cumplir con su cometido.
- Hace falta reforzar controles tanto por parte del Estado como de la ciudadanía (Control Social)
- Se necesita fortalecer capacitaciones tanto a la ciudadanía como a los funcionarios públicos.
- Se requieren reformas legales en cuanto al tema de sanciones por incumplimiento de la LOTAIP, así como para la determinación de qué constituye información confidencial.
- Hace falta dar entrenamiento a jueces sobre la judicialización de casos de acceso a la información. En muchos casos no conocen bien la legislación, lo que dificulta que conozcan cuál información debe ser pública y cuál es considerada confidencial.
- No existen estadísticas suficientes en términos de resultados sobre la implementación de la LOTAIP. Existe un estudio de la Corte Nacional de Justicia de 2011, pero consideran que no es suficiente.
- No existe claridad de cuántas instituciones están obligadas a cumplir con la LOTAIP ya que no existe un catastro integral que contemple además de las instituciones gubernamentales, las empresas públicas, municipalidades, universidades y en general todas aquellas que reciben fondos públicos.
- En su opinión, se requiere una Ley de Protección de Datos Personales.

[297] Por otra parte, la misma Corporación Participación Ciudadana, indicó como un avance la Resolución de la Defensoría del Pueblo, publicada en el Registro Oficial, Suplemento 579 de 18 de noviembre de 2011, que establece los parámetros para la aplicación de los artículos 7 y 12 de la LOTAIP; y el que las instituciones obligadas aumentan paulatinamente sus niveles de cumplimiento.

[298] Por su parte, la Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador – CORAPE informó que:

- El nivel de información no es igual en todas partes. Por ejemplo, puesto que la LOTAIP se concentra en páginas de Internet, las poblaciones rurales no siempre tienen acceso a ello. Asimismo, las poblaciones de más baja educación, en donde los niveles de alfabetización son mínimos o no existentes, aunque tuvieran acceso a Internet, no pueden leer esta información.
- Al respecto, la radio comunitaria llena muchos de esos vacíos, sobre todo en lo que hace a la rendición de cuentas. En su opinión, la radio comunitaria puede ser una herramienta alternativa útil para mantener informados a todos estos sectores de la población.
- Solamente un 40% de la población tiene acceso a Internet, pero está concentrada en las zonas urbanas.
- La CORAPE aún no cuenta con concesiones en su naturaleza de medio comunitario a pesar de que en 2008 fue reconocida como tal. Expresaron que se requiere trato equitativo.

[299] Finalmente, la representante de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO, indicó que hay una gran rotación de los funcionarios a cargo de proveer información.

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Realizar una evaluación de la utilización y efectividad de los mecanismos para el acceso a la información en poder o bajo el control de las instituciones públicas existentes en Ecuador, como instrumentos para prevenir la corrupción y, como resultado de dicha evaluación, considerar la adopción de medidas para promover, facilitar y consolidar o asegurar la efectividad de los mismos con dicho fin.*

[300] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la implementación de la misma, de la cual se destaca la siguiente<sup>116</sup>:

[301] Por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS):<sup>117</sup>

[302] *“Dado que el país no cuenta con herramientas que permitan medir periódica, sistemática y contextualizadamente la transparencia de las entidades del sector público y en las entidades privadas de interés público, en todas las provincias del Ecuador, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a finales de 2010, contrató una consultoría para desarrollar un prototipo de índice de transparencia basado en un modelo matemático, tomando en cuenta tres niveles de instituciones que manejan recursos públicos: centralizadas, descentralizadas y privadas. El cálculo del grado de transparencia por institución constituye una herramienta que brindará pautas para intervenir de manera adecuada y oportuna en la gestión de las entidades y enfrentar las deficiencias en la transparencia.”*

[303] Por parte de la Defensoría del Pueblo:

[304] *“A fin de evaluar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), la Defensoría del Pueblo elabora informes consolidados a nivel nacional y verifica que las entidades y organismos sujetos a esta Ley cumplan con difundir la información pública.”*<sup>118</sup>

[305] Al respecto, el Comité toma nota de la información suministrada correspondiente a los informes receptados por los informes receptados por la DPE (2010-2013); informes receptados vs. Catastro nacional (2011-2013); informes receptados por la DPE desagregados por Provincia (2011-2012); informes receptados por función del Estado; e informes receptados por tipo de organización.<sup>119</sup>

[306] Asimismo, las actividades resultantes de la cooperación interinstitucional realizadas por la DP para la promoción y protección del derecho de acceso a la información con el CPCCS y la Subsecretaría de Transparencia de Gestión; así como con otras instituciones y organizaciones tanto nacionales como internacionales tales como Quito Honesto, la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) y proyectos de cooperación horizontal con Eurosócial.

[307] El Comité, en vista de lo anterior, toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para la implementación de la medida b) de la anterior recomendación, así como de la

---

<sup>116</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente al seguimiento, págs. 142-151.

<sup>117</sup> *Ídem*, págs. 142-143.

<sup>118</sup> *Ídem*, pág. 143.

<sup>119</sup> *Ídem*, págs. 143-151.

necesidad de que éste continúe dando atención a la misma., toda vez que no se ha realizado la evaluación de la utilización y efectividad de los mecanismos para el acceso a la información en poder o bajo el control de las instituciones públicas existentes en Ecuador a que ésta se refiere. Adicionalmente, toma nota de las dificultades puestas de presente por el Estado analizado.

#### **4.2. Mecanismos de consulta**

##### Recomendación 4.2.

*Complementar los mecanismos de consulta existentes, estableciendo procedimientos, cuando corresponda, que permitan la oportunidad de realizar consultas públicas con anterioridad al diseño de políticas públicas y a la aprobación final de disposiciones legales.*

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Generalizar la publicación y difusión de los proyectos de las disposiciones legales, y celebrar procesos transparentes que permitan la consulta a sectores interesados en relación con la elaboración de proyectos de leyes, decretos o resoluciones en el ámbito del Poder Ejecutivo.*

[308] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la implementación de la misma, de la cual se destaca la siguiente<sup>120</sup>:

[309] La Asamblea Nacional informa que: “En el actual portal web de la Asamblea Nacional existe un enlace denominado “Trámite de los proyectos de ley”, el cual es un cuadro o matriz que contiene información generada a partir del mes de mayo de 2009 y hasta la presente fecha, en forma ininterrumpida, que publica y difunde los proyectos de ley así como sus etapas hasta ser aprobadas. El link directo de la página es el siguiente: <http://www.asambleanacional.gob.ec/tramite-de-las-leyes.html>” (...) <sup>121</sup>

[310] Más adelante en la respuesta, la Asamblea Nacional agrega que: “La Asamblea Nacional, en cumplimiento de lo previsto en el inciso final del Artículo 66 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ha diseñado e implementado el Sistema de Recepción de Propuestas o Proyectos de Ley presentados, en forma individual, por las y los ciudadanos.

[311] “Mediante este Sistema, la ciudadanía, a través del portal web institucional y un mecanismo por demás sencillo y amigable, podrá presentar en forma directa sus propuestas o proyectos normativos a la Asamblea Nacional, recibiendo noticias sobre su procesamiento.

[312] “Estas iniciativas ciudadanas serán remitidas por el Sistema a la Unidad de Técnica Legislativa, órgano que las procesará y, de ser procedente, elaborará el correspondiente Proyecto de Ley que será publicado en el portal web de la Asamblea Nacional, a fin de que las y los Asambleístas lo conozcan y, de ser el caso, lo auspicien con su firma de respaldo.

[313] “Esto permitirá que las iniciativas ciudadanas, al cumplir los requisitos previstos en el numeral 1 del Artículo 134 de la Constitución de la República y numeral 1 del Artículo 54

---

<sup>120</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente al seguimiento, pág. 152-173.

<sup>121</sup> Ídem, pág. 152.

*de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, puedan ser conocidas y calificadas por el Consejo de Administración Legislativa para su posterior trámite en la respectiva Comisión Legislativa.*

[314] *“Por último, se ha previsto que el Sistema permita visualizar los Proyectos de Ley para que la ciudadanía conozca su contenido y avance, y pueda pronunciarse respecto de su aceptación.”*

[315] *“Adicionalmente la Asamblea Nacional ha desarrollado un sistema informático consistente en un cubo de información de sus actividades, que permite obtener información del comportamiento de sus integrantes y coaliciones políticas en las sesiones del Pleno, de tal suerte que es posible sacar todo tipo de estadísticas en tiempo real.”*

[316] Asimismo, el CPCCS pone de presente que en el año 2012 aprobó las políticas de participación ciudadana, control social, rendición de cuentas, transparencia y lucha contra la corrupción. Estas políticas fueron desarrolladas en consulta con organizaciones sociales, instituciones públicas y ciudadanía en general, y consolidadas en un documento único, socializado y validado por la ciudadanía y expertos/as y presentado a la Función de Transparencia y Control Social, FTCS.

[317] El Comité, en vista de lo anterior, toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para la implementación de la medida a) de la anterior recomendación y toma nota de las dificultades puestas de presente por el Estado analizado, así como de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma.

[318] Adicionalmente, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, en las reuniones con las organizaciones de la sociedad civil, de la iniciativa privada, académicos e investigadores, los representantes del Grupo FARO expresaron que el sistema podría mejorarse de manera que permita una mayor diversidad, incluyendo formas espontáneas de participación, y no solamente las permitidas por la normativa actual. Asimismo, manifestaron que el Decreto Ejecutivo 16 es muy restrictivo y que se está iniciando una mesa de diálogo con la institución a cargo de su implementación.

[319] Por su parte, el Grupo CERES expresó que el diálogo con el gobierno es limitado y que podrían mejorarse los canales de comunicación.

[320] Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

[321] *Tomar las medidas necesarias para establecer y definir la institucionalización de las consultas con la sociedad civil. A este respecto, se sugiere considerar la posibilidad de que, previos los trámites correspondientes, el Proyecto de Ley Orgánica de Control Social del Poder Público al que se alude en la sección 4.3.2. del capítulo II del presente informe, sea aprobado como ley por parte de la autoridad competente.*

[322] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen su consideración satisfactoria, la siguiente<sup>122</sup>:

[323] La adopción en abril de 2010 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC), cuyo objeto es propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de

---

<sup>122</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente al seguimiento, págs. 161-173.

participación de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícitas, de manera protagónica, en la toma de decisiones que corresponda, la organización colectiva autónoma y la vigencia de las formas de gestión pública con el concurso de la ciudadanía; instituir instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de deliberación pública entre el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, y la sociedad, para el seguimiento de las políticas públicas y la prestación de servicios públicos; fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; y, sentar las bases para el funcionamiento de la democracia participativa, así como, de las iniciativas de rendición de cuentas y control social (Artículo 1º de la LOPC).

[324] El Comité, en vista de lo anterior, toma nota de la consideración satisfactoria de la implementación de la medida b) de la anterior recomendación.

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Realizar una evaluación integral de la utilización y efectividad de los mecanismos de consulta existentes en Ecuador, como instrumentos para prevenir la corrupción y, como resultado de dicha evaluación, considerar la adopción de medidas para promover, facilitar y consolidar o asegurar la efectividad de los mismos con dicho fin*

[325] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la implementación de esta medida. El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la misma.

#### **4.3. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública**

##### Recomendación 4.3.1

*Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública, al igual que avanzar hacia la derogación de normas que puedan desestimular dicha participación.*

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Establecer mecanismos, adicionales a los existentes, para fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en los esfuerzos para prevenir la corrupción y desarrollar la conciencia pública sobre el problema; y promover el conocimiento de los mecanismos de participación establecidos y su utilización. A este respecto, se sugiere considerar la posibilidad de que, previos los trámites correspondientes, el Proyecto de Ley de Control Social del Poder Público al que se alude en la sección 4.4.2 del capítulo II del presente informe, sea aprobado como ley por parte de la autoridad competente.*

[326] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la consideración satisfactoria de la misma, de la cual se destaca la siguiente<sup>123</sup>:

[327] “Como acciones que evidencian la implementación de la medida citada, se citan las siguientes normas que desarrollan los preceptos constitucionales en materia de promoción de la participación ciudadana, en el Ecuador:

---

<sup>123</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente al seguimiento, págs. 152-173.

- Ley de Participación Ciudadana (Registro Oficial Suplemento 175 de 20 de abril de 2010), que establece mecanismos para fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en los esfuerzos para prevenir la corrupción y desarrollar la conciencia pública sobre el problema
- Reglamento General de Veedurías Ciudadanas (Registro Oficial Suplemento 226 del 1 de julio de 2010)

[328] Asimismo, el Comité toma nota de los mecanismos puestos de presente por el Estado analizado, en la sección correspondiente al análisis del CPCCS, donde se reporta que se encuentra en proceso de socialización e implementación de los mismos, entre los que se encuentran los siguientes:<sup>124</sup>:

- **Espacios participativos de deliberación:** Audiencias Públicas, Cabildos Populares, Cabildos y Consejos Consultivos
- **Mecanismos de vigilancia y control social:** Observatorios, Observación electoral, Veedurías ciudadanas, Rendición de Cuentas, Silla Vacía.
- **Mecanismos participativos a nivel nacional:** Agendas públicas de consulta a la ciudadanía, Consejos Nacionales para la igualdad, Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, Consejos Ciudadanos Sectoriales, Consejo Nacional de Planificación.
- **Mecanismos participativos a nivel local:** Asambleas locales, Asambleas en circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias, Instancias de participación ciudadana a nivel local, Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Presupuestos Participativos, Sistemas de participación ciudadana, Consejos barriales y parroquiales urbanos, Mesa de diálogo, Comisiones permanentes, técnicas o especiales con participación ciudadana en juntas parroquiales rurales, Consejos Cantonales para la Protección de Derechos, Agendas de coordinación intersectorial, Consejos sectoriales de política pública de la Función Ejecutiva, Consejos de cuenca hidrográfica, Juntas administradoras de agua potable, Juntas de riego, Petición de la ciudadanía para la intervención en la gestión de competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, Comunas.
- Los mecanismos para fortalecer la participación de la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales, correspondientes a la atribución de Promoción de la Participación del CPCCS, entre las que se encuentran Asambleas Ciudadanas Locales, cursos de formación de formadores, capacitación y asesoría a servidoras/es públicas/os, jóvenes, ciudadanos y ciudadanas, la promoción de la participación ciudadana por medio del arte, el apoyo a las buenas prácticas de participación que busquen inclusión en la equidad mediante la implementación de fondos concursables y la generación de espacios de deliberación pública en temas de interés de la ciudadanía se citan en el literal D), apartado "i." Del cuestionario.

[329] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la consideración satisfactoria de la medida a) de la anterior recomendación, así como de las dificultades puestas de presente por el Estado analizado.

---

<sup>124</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente a la cuarta ronda, págs. 124-125.

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Derogar las denominadas “leyes de desacato”.*

[330] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como un paso que contribuye a la implementación de la misma, la siguiente<sup>125</sup>:

[331] *“En el borrador del texto del articulado del Proyecto de Código Integral Penal, se verifica que han sido eliminados los delitos relacionados con la recomendación, pero al tratarse simplemente de un “borrador” no se asegura que el texto del referido proyecto se mantenga.”*<sup>126</sup>

[332] El Comité, en vista de lo anterior, toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para la implementación de la medida b) de la anterior recomendación, así como de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma.

#### **4.4. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública**

##### Recomendación 4.4.1

*Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública.*

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Promover formas, cuando sea apropiado, para que aquellos que cumplan funciones públicas permitan, faciliten o asistan a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en el desarrollo de actividades para el seguimiento de su actuación pública. A este respecto, se sugiere considerar la posibilidad de que, previos los trámites correspondientes, el Proyecto de Ley de Control Social del Poder Público al que se alude en la sección 4.5.2 del capítulo II del presente informe, sea aprobado como ley por parte de la autoridad competente*

[333] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la implementación de la misma, de la cual se destaca la siguiente<sup>127</sup>:

- La adopción de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en mayo de 2010.

---

<sup>125</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente al seguimiento, pág. 178-179.

<sup>126</sup> En su documento de observaciones al proyecto de informe preliminar, remitido el 10 de febrero de 2014, el Estado analizado informó que “El Código Orgánico Integral Penal ha sido expedido mediante su publicación en el Registro Oficial No. 180 Suplemento, de 10 de febrero de 2014, el cual, según lo previsto en su Disposición Final, entra en vigencia en ciento ochenta contados a partir de su publicación en el Registro Oficial, con excepción de las disposiciones reformativas al Código Orgánico de la Función Judicial, que entran en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. La Disposición Derogatoria Primera del nuevo Código, deroga el Código Penal, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 147 de 22 de enero de 1971 y todas sus reformas, lo cual incluye los artículos 230, 231, 232 y 233, disposiciones que fueran materia de la medida b), recomendación 4.3.1 y que ya no están previstas en el nuevo Código.” En ese sentido informó también que la derogatoria se producirá el 10 de agosto de 2014.

<sup>127</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente al seguimiento, págs. 179-187.



- La información sobre los procesos de rendición de cuentas implementados por el CPCCS, orientados fundamentalmente a la transparencia de la gestión pública y por ende a la lucha contra la corrupción que facilitan el seguimiento a la gestión de lo público que se detallan en la respuesta al literal D), apartado "i." del cuestionario.
- Las actividades de capacitación y fortalecimiento de la Subsecretaría General de Transparencia y Gestión<sup>128</sup>.
- Audiencias públicas de rendición de cuentas<sup>129</sup>
- Oficinas itinerantes de la exSNTG cuyo objetivo, es receptar denuncias de la ciudadanía y a su vez brindar el asesoramiento jurídico correspondiente así como informar sobre las funciones de la exSNTG.<sup>130</sup>

[334] Sobre el particular, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, los representantes del CPCCS pusieron de presente entre sus dificultades, que hay problemas reales de implementación de la nueva normativa, especialmente con las autoridades locales, y que no se han adecuado los recursos para hacer efectivos estos derechos de participación. Expresaron que hay una necesidad de planificación y seguimiento por parte de la ciudadanía, además de que falta formación integral sobre participación de la ciudadanía. Indicaron que se está intentando incluir el tema dentro de los currículos educativos tanto de bachilleres como de profesionales. Adicionalmente, consideran que hay una falta de articulación de la normativa y que están firmando varios convenios con otras instituciones para poder facilitar la participación de la ciudadanía.

[335] El Comité, en vista de lo anterior, toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para la implementación de la medida a) de la anterior recomendación y de las dificultades puestas de presente por el Estado analizado, así como de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma y replantea la medida de la siguiente manera:

*- Promover formas, cuando sea apropiado, para que aquellos que cumplan funciones públicas permitan, faciliten o asistan a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en el desarrollo de actividades para el seguimiento de su actuación pública.*

[336] Al respecto, cabe señalar que durante la visita *in situ*, en el transcurso de las reuniones con organizaciones de la sociedad civil, de la iniciativa privada, académicos e investigadores, se formularon las siguientes observaciones<sup>131</sup>:

---

<sup>128</sup> *Ídem*, págs. 179-181.

<sup>129</sup> *Ídem*, págs. 181-184.

<sup>130</sup> *Ídem*, pág. 184

<sup>131</sup> En su documento de observaciones al proyecto de informe preliminar, remitido el 10 de febrero de 2014, Ecuador formula la siguiente observación “*Los ciudadanos han recibido las orientaciones técnicas necesarias por parte del CPCCS, para asegurar que el planteamiento del OBJETO -como punto de partida- de la veeduría, esté bien formulado. Conforme el procedimiento para la conformación de veedurías que se establece en el Reglamento General de Veedurías, el CPCCS recepta sus documentos personales, el formulario de inscripción, se verifica el cumplimiento de requisitos, y después, se convoca a un taller de transferencia de información para posteriormente ACREDITARLES como Veedores. “De manera inmediata el CPCCS procede a notificar a la institución observada el inicio de toda veeduría, en cuyo texto se insertan los Art. 22 y 23 de la LOTAIP, sobre la obligación de las instituciones públicas, privadas y sociales, cuyas actividades afecten los intereses de la sociedad, de garantizar el acceso a la*

[337] Con referencia al proceso de veedurías ciudadanas, el Grupo FARO puso de presente que hace falta una prohibición para que la institución observada pueda ejercer cualquier tipo de veto o restricción sobre los informes que se generen a consecuencia de este proceso de control. Al respecto, agregaron que las normativas para las veedurías ponen tantos obstáculos que las hacen imposibles de realizar efectivamente y que hace falta garantías para solicitar y recibir información de instituciones.

[338] Por su parte, la Asamblea Cantonal de Montúfar expresó que hace falta que se fortalezcan los procesos del Sistema Nacional de Contratación Pública en lo relativo a las veedurías ciudadanas por procesos y con respecto a la suscripción de contratos y a la adjudicación de obras y servicios.

## 5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)

### Recomendación 5.1

*Determinar y priorizar áreas específicas en las cuales la República del Ecuador considere que necesita la cooperación técnica de otros Estados parte y organismos internacionales de cooperación, para fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción.*

[339] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la implementación de la misma, la siguiente<sup>132</sup>:

[340] - El CPCCS, pone de presente que en materia de transparencia y lucha contra la corrupción se considera necesaria la cooperación internacional para los siguientes proyectos institucionales:

- Institucionalizar un mecanismo para medir la transparencia de manera sistemática y trabajar políticas públicas y herramientas dirigidas a lograr la transparencia en la gestión pública a través de la generación de un **“Índice sobre transparencia de las instituciones públicas o que manejan fondos públicos del Ecuador”**.
- Dotar a la ciudadanía de información en un lenguaje accesible, para potenciar el control social a la gestión de lo público, la transparencia y lucha contra la corrupción, mediante la generación de **“Mecanismos de seguimiento y evaluación del ciclo de políticas públicas de la FTCS y de las recomendaciones provenientes de Instrumentos Internacionales de Lucha contra la Corrupción.”**
- Establecimiento de un programa específico de protección de denunciantes de actos de corrupción

[341] - La Fiscalía General del Estado manifiesta que *“...es necesario que se mantenga la cooperación técnica entre los Estados parte en cuanto a formas y métodos más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción, como por ejemplo la*

---

*información que la veeduría requiera para cumplir sus objetivos; y sobre sanción por incumplimiento de la referida ley.*

*“Este procedimiento, ha permitido de alguna manera, "reforzar" la gestión de los veedores, desde el inicio mismo de su proceso de veeduría.”*

<sup>132</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente al seguimiento, págs. 187-192.

*coordinación entre la Policía Nacional especializada y la Policía Extranjera en el control de contrabando, defraudación, e incluso en la localización y seguimiento de personas requeridas por la justicia nacional. Este último particular ha sido bien acogido como mecanismo de apoyo mutuo en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado; por ejemplo, en los últimos días, por intermedio del Ministerio del Interior, se coordinó con los Estados vecinos la localización y captura de reos que se encontraban prófugos.”* Adicionalmente, la FGE suministra una lista extensa de temas sobre los que requiere cooperación técnica.

[342] - La Función de Transparencia y Control Social considera necesaria *“la cooperación técnica de otros Estados parte y organismos internacionales de Cooperación, específicamente en la “Implementación del Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción”, que por mandato constitucional le corresponde cumplir a esta función del Estado...”*

[343] Por otra parte, la FGE pone de presente que *“Uno de los principales problemas que se ha dado en la implementación de la cooperación internacional es el tiempo que tarda en materializarse la ayuda solicitada, por lo cual se debería contar con herramientas que permitan tener una comunicación más directa con la entidad de la que se requiere, por ejemplo, cierta asistencia internacional, a fin de evitar filtros innecesarios que retardan la obtención de lo requerido.”*

[344] El Comité, en vista de lo anterior, toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para la implementación de la anterior recomendación y de las dificultades puestas de presente por el Estado analizado, así como de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma.

## Recomendación 5.2

*Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados partes, sobre las formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción.*

[345] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la implementación de la misma, la siguiente<sup>133</sup>:

[346] - Participación del CPCCS en distintas experiencias de intercambio y asistencia técnica, tales como talleres y reuniones en el marco de la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas.

[347] - Promoción por parte de la CGE de una política abierta de cooperación con la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS, para desarrollar las capacidades de muchos funcionarios, a nivel nacional. Asimismo, a Contraloría General del Estado ha recibido cooperación de varias Entidades Fiscalizadoras Superiores de la Región, que han proporcionado asistencia técnica en varios ámbitos, lo que también ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades de gestión institucionales y ha llevado a cabo actividades de cooperación, aprovechando la existencia de los convenios suscritos con las entidades fiscalizadoras superiores de Perú, Colombia, Chile, Taiwán, Nicaragua y Guatemala.

---

<sup>133</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente al seguimiento, págs. 193-198..

[348] - La FGE se ha vinculado y complementado con órganos de control o poderes públicos y con autoridades a nivel internacional, suscribiendo convenios internacionales, por lo cual se ha visibilizado la posibilidad de efectuar investigaciones conjuntas con la Fiscalía General y el Ministerio Público de la República de Colombia y Perú, respectivamente, en las que se han intercambiado pericias técnicas en el ámbito de detección e investigación de delitos, así como también se ha contado con el apoyo de determinados equipos técnicos donados para este fin por los Estados parte; sin embargo, en la práctica no se han tenido experiencias respecto a delitos de corrupción.

[349] Por otra parte, la FGE puso de presente que la principal dificultad radicó en la falta de una política de cooperación y coordinación efectiva entre los Estados parte para la aplicación de las políticas implementadas y el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los convenios internacionales y memorandos de entendimiento entre las Fiscalías y Procuradurías Generales y Ministerios Públicos de República de los Estados parte, lo que en gran medida retarda los resultados de las respuestas a las solicitudes de cooperación, pero que esta situación está siendo revertida por el Fiscal General.

[350] El Comité, en vista de lo anterior, toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para la implementación de la anterior recomendación y de las dificultades puestas de presente por el Estado analizado, así como de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma.

### Recomendación 5.3

*Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar información sobre la misma.*

## **6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)**

*El Comité no formuló recomendaciones a la República de Ecuador sobre este tema.*

## **7. RECOMENDACIONES GENERALES**

### Recomendación 7.1

*Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.*

[351] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la implementación de la misma, la siguiente<sup>134</sup>:

[352] “De conformidad con el Plan de Capacitación del año 2012, de la Contraloría General del Estado, aprobado por el Contralor General el 16 de enero de 2012, los componentes de la capacitación interna y externa para ese año, cubrieron temas de Seguridad y Salud Ocupacional, Control Interno, Sistema Integrado de Responsabilidades, Control del Sistema

---

<sup>134</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente al seguimiento, págs. 198-201..

*Nacional de Contratación Pública, Entrenamiento en el uso de AUTOAUDIT, Auditoría de Gestión, Planificación Estratégica, Indicadores de Gestión, Proyectos de Inversión Pública, Cuadro de Mando Integral, Administración de Bienes, Contratación Pública, Control Social, Participación Ciudadana, Ética, etc. (...)*”

[353] “... cabe señalar que la Dirección de Políticas y Normas del Servicio Público, con aprobación de la Subsecretaría de Políticas y Normas, elaboró la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación, publicada en Registro Oficial No. 865 de 8 de Enero de 2013. La Norma en mención está disponible en la siguiente dirección web: <http://www.relacioneslaborales.gob.ec/biblioteca/...>”

[354] “...Ante este punto se puede informar que las Unidades encargadas de la elaboración de la “Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación” dentro del Ministerio de Relaciones Laborales fueron: La Subsecretaría de Políticas y Normas, y Dirección de Políticas y Normas del Servicio Público.”

[355] “...La Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión (actualmente Secretaría de Transparencia de Gestión) celebró un Contrato con el INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN), con la finalidad de realizar ciclos de capacitación en temas de transparencia, control social y prevención de la corrupción a servidores y servidoras públicas a nivel nacional durante el año 2011. Se realizaron cursos virtuales y presenciales con la participación de 360 servidores de 45 instituciones públicas...”

[356] El Comité, en vista de lo anterior, toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para la implementación de la anterior recomendación, así como de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma.

## Recomendación 7.2

*Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que estuvieran disponibles para la selección indicada por parte del Estado Analizado, que ha sido publicada por la Secretaría Técnica del Comité, en página en “Internet” de la OEA, así como información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendación 7.3 siguiente*

[357] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la implementación de la misma, la siguiente<sup>135</sup>:

[358] El CPCCS con miras a la efectiva aplicación de las Convenciones Internacionales de lucha contra la corrupción (Convención Interamericana Contra la Corrupción y Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción) así como otros acuerdos internacionales con similares características, contrató servicios profesionales de asesoría para el diseño de un sistema integral para la coordinación del proceso de seguimiento a la implementación de las recomendaciones realizadas por las instancias técnicas internacionales competentes. El referido diseño permitirá dar inicio a la ejecución del Sistema de Seguimiento, el cual incluye desarrollo de un sistema

---

<sup>135</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente al seguimiento, págs. 198-201..

informático y el levantamiento de indicadores con el concurso de las instituciones ecuatorianas con competencias en la lucha contra la corrupción.

[359] El Comité, en vista de lo anterior, toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para la implementación de la anterior recomendación, así como de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma.

### Recomendación 7.3

*Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo.*

[360] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la implementación de la misma, la siguiente<sup>136</sup>:

[361] En la FGE, a través de la Dirección de Política Criminal está implementando el delitoscopio, que es un mecanismo de seguimiento, monitoreo y desarrollo de indicadores relativos a algunas de las acciones implementadas por la Fiscalía General del Estado, y es una instancia técnica especializada en metodologías cuantitativas y cualitativas, que se encarga de la recolección, procesamiento, análisis y difusión de indicadores de delincuencia, con el propósito de contar con información válida, estandarizada y oportuna, lo que permitirá el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas de seguridad.

[362] El Comité, en vista de lo anterior, toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para la implementación de la anterior recomendación, así como de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma.

---

<sup>136</sup> Respuesta de la República del Ecuador al cuestionario correspondiente al seguimiento, págs. 198-201..

## **ANEXO I**

### **RECOMENDACIONES VIGENTES Y REFORMULADAS SOBRE LOS TEMAS ANALIZADOS EN LA PRIMERA RONDA**

#### **1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 y 2 DE LA CONVENCIÓN)**

##### **Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento**

###### **Recomendación 1.1.1.**

*Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los conflictos de intereses.*

###### **Medidas sugeridas:**

- a) Determinar con precisión implicancias, prohibiciones, incompatibilidades e inhabilidades relacionadas con conflictos de intereses privados con el interés público.
- b) Establecer restricciones adecuadas, cuando corresponda, para quienes dejan de desempeñar un cargo público, por un período razonable.
- c) Diseñar e implementar mecanismos para difundir y capacitar a todos los servidores públicos sobre las normas de conducta, incluyendo las relativas a conflictos de intereses, y para resolver las consultas de los mismos al respecto, así como proporcionar capacitación y actualización periódica con relación a dichas normas.
- d) Realizar evaluación de la utilización y efectividad de las normas de conducta para prevenir conflictos de intereses y de los mecanismos para su cumplimiento existentes en Ecuador, como instrumentos para prevenir la corrupción y, como resultado de dicha evaluación, considerar la adopción de medidas para promover, facilitar y consolidar o asegurar la efectividad de los mismos con dicho fin.
- e) Realizar un estudio sobre la posibilidad de compilar las normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas a que se refiere la Convención.

#### **1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos**

###### **Recomendación 1.2.1**

*Fortalecer el sistema de control de los recursos de la administración pública.*

###### **Medida sugeridas:**

- a) Esta medida fue considerada no vigente y por lo tanto no requiere atención adicional.

- b) Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar información sobre la misma.
- c) Realizar evaluación de la utilización y efectividad de las normas de conducta para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos públicos y de los mecanismos para su cumplimiento existentes en Ecuador, como instrumentos para prevenir la corrupción y, como resultado de dicha evaluación, considerar la adopción de medidas para promover, facilitar y consolidar o asegurar la efectividad de los mismos con dicho fin.

**1.3. Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento**

Recomendación 1.3.1

*Fortalecer los mecanismos con los que cuenta la República del Ecuador para exigir a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.*

Medidas sugeridas:

- a) Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar información sobre la misma.
- b) Facilitar el cumplimiento de dicha obligación constitucional, a través de los medios de comunicación que se estimen adecuados, regulando su utilización; y desarrollar el programa de protección dispuesto por la ley, de tal manera que los denunciantes encuentren mayores garantías que las existentes frente a las amenazas o retaliaciones de las que puedan ser objeto como consecuencia del cumplimiento de esta obligación.
- c) Capacitar a los funcionarios públicos en relación con la existencia y el propósito de la responsabilidad de denunciar ante las autoridades competentes los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.

**2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN)**

Recomendación 2.1

*Fortalecer los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos*

Medidas sugeridas:

- a) Esta medida fue considerada no vigente y por lo tanto no requiere atención adicional.



- b) Realizar evaluación y seguimiento del cumplimiento de la obligación de presentar declaración patrimonial juramentada por parte de los servidores públicos (incluye ingresos, activos y pasivos), señalando el grado de cumplimiento y las medidas pertinentes que corresponda ajustar o corregir.
- c) Optimizar los sistemas de análisis del contenido de las declaraciones juradas patrimoniales con el objeto de detectar y prevenir conflictos de intereses, así como detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito.

### **3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN)**

#### Recomendación 3.1

*La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada no vigente y por lo tanto no requiere atención adicional.*

#### Recomendación 3.2

*Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar información sobre la misma.*

### **4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA CONVENCIÓN)**

#### **4.1. Mecanismos para el acceso a la información**

##### Recomendación 4.1.1.

*Fortalecer los mecanismos para garantizar el acceso a la información pública.*

##### Medidas sugeridas:

- a) Fortalecer los mecanismos para hacer efectivo el derecho de la sociedad civil y de los ciudadanos al acceso a la información pública y a recurrir las decisiones por medio de las cuales se deniegan las solicitudes de información, de tal manera que se garantice un fácil acceso ciudadano a dichos mecanismos y que los mismos sean efectivos en la protección del derecho a la información pública. A este respecto, fortalecer al órgano de control encargado de implementar la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información (LOTAIP), de manera que cuente con los recursos humanos y presupuestarios necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones, teniendo en consideración los recursos disponibles. Asimismo, considerar las reformas normativas necesarias para optimizar la efectiva implementación de la LOTAIP.
- b) Realizar una evaluación de la utilización y efectividad de los mecanismos para el acceso a la información en poder o bajo el control de las instituciones públicas

existentes en Ecuador, como instrumentos para prevenir la corrupción y, como resultado de dicha evaluación, considerar la adopción de medidas para promover, facilitar y consolidar o asegurar la efectividad de los mismos con dicho fin.

#### **4.2. Mecanismos de consulta**

##### Recomendación 4.2.

*Complementar los mecanismos de consulta existentes, estableciendo procedimientos, cuando corresponda, que permitan la oportunidad de realizar consultas públicas con anterioridad al diseño de políticas públicas y a la aprobación final de disposiciones legales.*

##### Medidas sugeridas:

- a) Generalizar la publicación y difusión de los proyectos de las disposiciones legales, y celebrar procesos transparentes que permitan la consulta a sectores interesados en relación con la elaboración de proyectos de leyes, decretos o resoluciones en el ámbito del Poder Ejecutivo.
- b) Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar información sobre la misma.
- c) Realizar una evaluación integral de la utilización y efectividad de los mecanismos de consulta existentes en Ecuador, como instrumentos para prevenir la corrupción y, como resultado de dicha evaluación, considerar la adopción de medidas para promover, facilitar y consolidar o asegurar la efectividad de los mismos con dicho fin

#### **4.3. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública**

##### Recomendación 4.3.1

*Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública, al igual que avanzar hacia la derogación de normas que puedan desestimular dicha participación.*

##### Medidas sugeridas:

- a) Esta recomendación ha sido considerada satisfactoria y, por lo tanto, no se requiere suministrar información sobre la misma.
- b) Derogar las denominadas “leyes de desacato”.

#### **4.4. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública**

##### Recomendación 4.4.1

*Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública.*

Medidas sugeridas:

- a) Promover formas, cuando sea apropiado, para que aquellos que cumplan funciones públicas permitan, faciliten o asistan a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en el desarrollo de actividades para el seguimiento de su actuación pública.

## **5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)**

### Recomendación 5.1

*Determinar y priorizar áreas específicas en las cuales la República del Ecuador considere que necesita la cooperación técnica de otros Estados parte y organismos internacionales de cooperación, para fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción.*

### Recomendación 5.2

*Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados partes, sobre las formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción.*

### Recomendación 5.3

*Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar información sobre la misma.*

## **6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)**

El Comité no formuló recomendaciones a la República de Ecuador sobre este tema.

## **7. RECOMENDACIONES GENERALES**

### Recomendación 7.1

*Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.*

### Recomendación 7.2

*Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá*

*tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que estuvieran disponibles para la selección indicada por parte del Estado Analizado, que ha sido publicada por la Secretaría Técnica del Comité, en página en “Internet” de la OEA, así como información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendación 7.3 siguiente*

Recomendación 7.3

*Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo.*

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA  
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN  
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN

OEA/Ser.L.  
SG/MESICIC/doc.390/13  
12 agosto, 2013  
Original: español

Visita *in situ* a Ecuador en el marco de la Cuarta Ronda de Análisis  
Del 1 al 3 de octubre de 2013  
Quito, Ecuador

ECUADOR

AGENDA DE LA VISITA *IN SITU*

**COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA  
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA  
CORRUPCIÓN**

**CUARTA RONDA DE ANÁLISIS**

**DE AGENDA DE LA VISITA *IN SITU* EN ECUADOR**

<b>Lunes, 30 de septiembre de 2013</b>	
16:00 hrs. – 17:30 hrs. <i>Hotel Hilton Colón – Sala: HILTON MEETINGS 1</i>	<b>Reunión de coordinación entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.</b>
17:30 hrs. – 18:30 hrs. <i>Hotel Hilton Colón – Sala: HILTON MEETINGS 1</i>	<b>Reunión de coordinación entre los representantes del Estado analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica</b>
18:30 hrs. – 20:00 hrs. <i>Hotel Hilton Colón – Sala: HILTON MEETINGS 1</i>	<b>Cena de trabajo (representantes del Estado analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica)</b>

<b>Martes, 1 de octubre de 2013</b>	
08:30 hrs. – 9:45 hrs. <i>Hotel Hilton Colón – Sala: FERNANDINA</i>	<b>Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores.<sup>137/</sup></b>
<b>Tema 1:</b>	<b>ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>
<b>Participantes:</b>	<p><b><i>Corporación Participación Ciudadana Ecuador</i></b> Nombre: Dr. Simón Jaramillo Cargo: Subdirector Nacional</p> <p><b><i>Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador - CORAPE</i></b> Nombre: Lcda. Gissela Dávila Cobo Cargo: Secretaria Ejecutiva</p> <p><b><i>Académico</i></b> Nombre: Dra. Isabel Ramos Cargo: Profesora investigadora de la FLACSO Ecuador (Programa Estudios Internacionales y Comunicación)</p>
9:50 hrs. – 11:20 hrs. <i>Hotel Hilton Colón – Sala: FERNANDINA</i>	<b>Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores. (continuación)</b>

<sup>137</sup>. Se sugiere invitar a participar a diversas organizaciones y personas en virtud de lo previsto en la disposición 27 de dicha Metodología, que permite invitar a participar en estas reuniones a “organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores”.

<b>Tema 2:</b>	<b>MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA GESTIÓN PÚBLICA</b>
<b>Participantes:</b>	<p><b>Grupo FARO</b> Nombre: Dra. Alicia Arias Salgado Cargo: Directora del área de Desarrollo de Capacidades</p> <p><b>Consortio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social, CERES</b> Nombre: Sra. Evangelina Gómez-Durañona Cargo: Directora Ejecutiva</p> <p>Nombre: Sr. Sebastián Salgado Troya Cargo: Coordinador del Pacto Global de Naciones Unidas en Ecuador</p> <p><b>Asamblea Cantonal de Montúfar</b> Nombre: Lcdo. Efrén Revelo Cargo: Presidente</p> <p>Nombre: Dr. Darwin Pantoja Cargo: Coordinador General</p> <p><b>Académico</b> Nombre: Dr. Santiago Ortiz Cargo: Profesor investigador de la FLACSO Ecuador (Áreas de investigación: participación ciudadana y organización territorial)</p>
11:25 hrs. – 12:55 hrs. <i>Hotel Hilton Colón – Sala: FERNANDINA</i>	<b>Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores (continuación)</b>
<b>Tema 3:</b>	<b>LA PREVENCIÓN, PERSECUCIÓN Y SANCIÓN DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN EN EL ECUADOR</b>
<b>Participantes:</b>	<p><b>Fundación ESQUEL</b> Nombre: Econ. Boris Cornejo Cargo: Presidente Ejecutivo</p> <p><b>Colegio de Abogados del Guayas</b> Nombre: Dr. Jimmy Salazar Gaspar Cargo: Presidente</p> <p><b>Académico</b> Nombre: Diego Zalamea Cargo: Docente Universitario, UASB (Maestría en Derecho Procesal Penal)</p>
12:55 hrs – 14:15 hrs	<b>Almuerzo - Hotel Hilton Colón, Café Colón</b>
14:15 hrs – 15:15 hrs <i>Hotel Hilton Colón – Sala: FERNANDINA</i>	<b>PANEL 1:</b>
<b>Temas:</b>	<p><b>CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL</b></p> <p><b>1.1. FUNCIONES, OBJETIVOS Y ESTRUCTURA</b></p> <p><b>1.2. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS RESPONSABILIDADES</b></p>
<b>Participantes:</b>	<p>Nombre: Abg. Fernando Cedeño Rivadeneira Cargo: Presidente del CPCCS</p> <p>Nombre: Dr. Mario Rivas</p>

	<p>Cargo: Secretario Técnico de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.</p> <p>Nombre: Dr. Santiago Machuca Cargo: Subcoordinador Nacional de Admisión y Orientación Jurídica.</p> <p>Nombre: Dr. Marcelo Jaramillo Cargo: Subcoordinador Nacional de Patrocinio.</p>
15:20 hrs – 16:05 hrs <i>Hotel Hilton Colón – Sala: FERNANDINA</i>	<p><b>PANEL 2:</b></p> <p><b>CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL</b></p>
<b>Temas:</b>	<b>2.1. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y NECESIDADES DE COOPERACIÓN TÉCNICA</b>
<b>Participantes:</b>	<p>Nombre: Arq. Alexandra Moncada Cargo: Coordinadora Técnica de Transparencia, Lucha contra la Corrupción, Participación y Control Social.</p>
16:10 – 17:40 hrs <i>Hotel Hilton Colón – Sala: FERNANDINA</i>	<p><b>PANEL 3:</b></p> <p><b>CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL</b></p>
<b>Temas:</b>	<p><b>3.1. RÉGIMEN DE COMPETENCIAS Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL</b></p> <p><b>3.2. ADOPCIÓN DE DECISIONES</b></p> <p><b>3.3. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES (FISCAL GENERAL DEL ESTADO, CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO, VOCALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA)</b></p>
<b>Participantes:</b>	<p>Nombre: Arq. Alexandra Moncada Cargo: Coordinadora Técnica de Transparencia, Lucha contra la Corrupción, Participación y Control Social.</p> <p>Nombre: Dr. Marcelo Jaramillo Cargo: Subcoordinador Nacional de Patrocinio.</p> <p>Nombre: Soc. Marcela Miranda Pérez Cargo: Consejera del CPCCS</p>
17:45 hrs – 18:30 hrs <i>Hotel Hilton Colón – Sala: FERNANDINA</i>	<p><b>PANEL 4:</b></p> <p><b>CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL</b></p>
<b>Temas:</b>	<p><b>4.1. RÉGIMEN DE RECURSOS HUMANOS</b></p> <p><b>4.2. NORMATIVIDAD INTERNA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS RESPONSABILIDADES</b></p>
<b>Participantes:</b>	<p>Nombre: Abg. Fernando Cedeño Rivadeneira Cargo: Presidente del CPCCS</p> <p>Nombre: Ing. Priscila Kon Cargo: Subcoordinadora Nacional de Talento Humano</p>
18:30 hrs <i>Hotel Hilton Colón – Sala: FERNANDINA</i>	<p><b>Reunión informal<sup>138/</sup></b> con los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.</p>

<sup>138</sup>. El segundo párrafo de la disposición 20 de la *Metodología para la realización de las Visitas In Situ* señala: “...Al concluir las reuniones en cada día de la visita in situ, la Secretaría Técnica propiciará una reunión informal con los miembros del Subgrupo para intercambiar puntos de vista preliminares sobre los temas tratados en ellas...”



<b>Miércoles, 2 de octubre de 2013</b>	
8:30 hrs – 9:30 hrs <i>Hotel Hilton Colón – Sala: FERNANDINA</i>	<b>PANEL 5:</b>
	<b>FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO</b>
<b>Temas:</b>	<b>5.1. FUNCIONES, OBJETIVOS Y ESTRUCTURA 5.2. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS RESPONSABILIDADES</b>
<b>Participantes:</b>	<p>Nombre: Dr. Galo Chiriboga Zambrano Cargo: Fiscal General del Estado</p> <p>Nombre: Arq. Santiago Velasco Andrade Cargo: Director Administrativo Financiero</p> <p>Nombre: Dr. Víctor Hugo López Cargo: Director de Gestión Procesal</p> <p>Nombre: Ing. Alejandro Fuentes Díaz Cargo: Coordinador Misional</p> <p>Nombre: Ab. Elizabeth Regalado Cargo: Relaciones Internacionales</p>
9:35 hrs – 10:35 hrs <i>Hotel Hilton Colón – Sala: FERNANDINA</i>	<b>PANEL 6:</b>
	<b>FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO</b>
<b>Temas:</b>	<b>6.1. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y NECESIDADES DE COOPERACIÓN TÉCNICA 6.2. BUENAS PRÁCTICAS</b>
<b>Participantes:</b>	<p>Nombre: Arq. Santiago Velasco Andrade Cargo: Director Administrativo Financiero</p> <p>Nombre: Dr. Víctor Hugo López Cargo: Director de Gestión Procesal</p> <p>Nombre: Ing. Alejandro Fuentes Díaz Cargo: Coordinador Misional</p> <p>Nombre: Ab. Elizabeth Regalado Cargo: Relaciones Internacionales</p>
10:40 hrs – 11:40 hrs <i>Hotel Hilton Colón – Sala: FERNANDINA</i>	<b>PANEL 7:</b>
	<b>FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO</b>
<b>Temas:</b>	<b>7.1 RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS 7.2 NORMATIVIDAD INTERNA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS RESPONSABILIDADES</b>
<b>Participantes:</b>	<p>Nombre: Arq. Santiago Velasco Andrade Cargo: Director Administrativo Financiero</p> <p>Nombre: Dr. Víctor Hugo López Cargo: Director de Gestión Procesal</p> <p>Nombre: Ing. Alejandro Fuentes Díaz Cargo: Coordinador Misional</p>

	<p>Nombre: Ab. Elizabeth Regalado Cargo: Relaciones Internacionales</p>
<p>11:45 hrs – 12:45 hrs <i>Hotel Hilton Colón – Sala: FERNANDINA</i></p>	<p><b>PANEL 8:</b></p> <p><b>FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO</b></p>
<p><b>Temas:</b></p>	<p><b>8.1. RÉGIMEN DE COMPETENCIAS</b> <b>8.2. MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL</b> <b>8.3. DIFUSIÓN DE SUS OBJETIVOS Y FUNCIONES</b></p>
<p><b>Participantes:</b></p>	<p>Nombre: Arq. Santiago Velasco Andrade Cargo: Director Administrativo Financiero</p> <p>Nombre: Dr. Víctor Hugo López Cargo: Director de Gestión Procesal</p> <p>Nombre: Ing. Alejandro Fuentes Díaz Cargo: Coordinador Misional</p> <p>Nombre: Ab. Elizabeth Regalado Cargo: Relaciones Internacionales</p>
<p>12:45 hrs. – 14:15 hrs</p>	<p><b>Almuerzo - Hotel Hilton Colón, Café Colón</b></p>
<p>14:15 hrs – 15:15 hrs <i>Hotel Hilton Colón – Sala: FERNANDINA</i></p>	<p><b>PANEL 9:</b></p> <p><b>ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y CONSEJO DE LA JUDICATURA</b></p>
<p><b>Temas:</b></p>	<p><b>9.1. OBJETIVOS, FUNCIONES Y ESTRUCTURA</b> <b>9.2. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS RESPONSABILIDADES</b></p>
<p><b>Participantes:</b></p>	<p><b>CORTE NACIONAL DE JUSTICIA</b></p> <p>1. Nombre: Dr. Carlos Ramírez Romero Cargo: Presidente de la Corte Nacional de Justicia</p> <p>2. Nombre: Ab. Eduardo Paz Almeida Cargo: Ayudante Judicial 3</p> <p><b>CONSEJO DE LA JUDICATURA</b></p> <p>1. Nombre: Ab. Néstor Arbito Chica Cargo: Vocal del Consejo de la Judicatura</p> <p>2. Nombre: Eco. Andrea Bravo Mogro Cargo: Directora Nacional de Planificación del Consejo de la Judicatura</p>
<p>15:20 hrs – 16:20 hrs <i>Hotel Hilton Colón – Sala: FERNANDINA</i></p>	<p><b>PANEL 10:</b></p> <p><b>ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y CONSEJO DE LA JUDICATURA</b></p>
<p><b>Temas:</b></p>	<p><b>10.1 DIFICULTADES ENCONTRADAS Y NECESIDADES DE COOPERACIÓN TÉCNICA</b> <b>10.2 BUENAS PRÁCTICAS</b> <b>10.3 MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL</b></p>

<b>Participantes:</b>	<b>CORTE NACIONAL DE JUSTICIA</b>  1. Nombre: Dr. Paúl Iñiguez Ríos Cargo: Juez Nacional de la Corte Nacional de Justicia  2. Nombre: Dr. Darwin Aguilar Gordón Cargo: Coordinador Interinstitucional de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia  <b>CONSEJO DE LA JUDICATURA</b>  1. Nombre: Dr. Tomás Alvear Peña Cargo: Director Nacional de Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial del Consejo de la Judicatura.  2. Nombre: Ab. Néstor Arbito Chica Cargo: Vocal del Consejo de la Judicatura  3. Nombre: Dr. Wilson Navarrete Ortiz Cargo: Director Nacional de Transparencia de Gestión del Consejo de la Judicatura.
16:25 hrs – 17:25 hrs <i>Hotel Hilton Colón – Sala: FERNANDINA</i>	<b>PANEL 11:</b>  <b>ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y CONSEJO DE LA JUDICATURA</b>
<b>Temas:</b>	<b>11.1 ADOPCIÓN DE DECISIONES</b> <b>11.2 RÉGIMEN PRESUPUESTAL</b> <b>11.3 RENDICIÓN DE CUENTAS</b>
<b>Participantes:</b>	<b>CORTE NACIONAL DE JUSTICIA</b>  1. Nombre: Dr. Eduardo Bermúdez Coronel Cargo: Magistrado de la Corte Nacional de Justicia  2. Nombre: Ab. Geovana Garzón Almeida Cargo: Ayudante Judicial 3 de Asesoría Jurídica  <b>CONSEJO DE LA JUDICATURA</b>  1. Nombre: Ab. Néstor Arbito Chica Cargo: Vocal del Consejo de la Judicatura  2. Nombre: Dr. Andrés Segovia Salcedo Cargo: Secretario General del Consejo de la Judicatura.  3. Nombre: Lcda. Alexandra Muñoz Santamaría Cargo: Directora Nacional Financiera
17:30 hrs – 18:30 hrs <i>Hotel Hilton Colón – Sala: FERNANDINA</i>	<b>PANEL 12:</b>  <b>ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y CONSEJO DE LA JUDICATURA</b>
<b>Temas:</b>	<b>12.1. RÉGIMEN DE RECURSOS HUMANOS</b>  <b>12.2. NORMATIVIDAD INTERNA Y MECANISMOS DE CONTROL INTERNO</b>
<b>Participantes:</b>	<b>CONSEJO DE LA JUDICATURA</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nombre: Ing. Juan Manuel Chiriboga Arteta Cargo: Director Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura</li> <li>2. Nombre: Lcdo. Luis Buenaño Orozco Cargo: Director Nacional Administrativo del Consejo de la Judicatura</li> <li>3. Nombre: Ab. Doris Gallardo Cevallos Cargo: Directora General del Consejo de la Judicatura</li> <li>4. Nombre: Dr. Esteban Zavala Palacios Cargo: Director Nacional Jurídico del Consejo de la Judicatura</li> <li>5. Nombre: Ing. Federman Estrada Osejos Cargo: Director Nacional de Informática del Consejo de la Judicatura</li> </ol>
18:30 hrs <i>Hotel Hilton Colón – Sala: FERNANDINA</i>	<b>Reunión informal<sup>139/</sup></b> con los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
<b>Jueves, 3 de octubre de 2013</b>	
08:30 hrs – 09:30 hrs <i>Hotel Hilton Colón – Sala: FERNANDINA</i>	<b>PANEL 13:</b> <b>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</b>
<b>Temas:</b>	<b>13.1. FUNCIONES, OBJETIVOS Y ESTRUCTURA</b> <b>13.2. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS RESPONSABILIDADES</b>
<b>Participantes:</b>	Nombre: Dr. Carlos Pólit Faggioni Cargo: Contralor General del Estado  Nombre: Dr. Jorge Palacios Salcedo Cargo: Funcionario del Departamento de Participación Ciudadana y Análisis de Denuncias
09:35 hrs – 10:35 hrs <i>Hotel Hilton Colón – Sala: FERNANDINA</i>	<b>PANEL 14:</b> <b>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</b>
<b>Temas:</b>	<b>14.1. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y NECESIDADES DE COOPERACIÓN TÉCNICA</b>
<b>Participantes:</b>	Nombre: Dra. Tania Morán Domínguez Cargo: Jefe del Departamento de Participación Ciudadana y Análisis de Denuncias
10:40 hrs – 11:40 hrs <i>Hotel Hilton Colón – Sala: FERNANDINA</i>	<b>PANEL 15:</b> <b>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</b>

<sup>139</sup>. El segundo párrafo de la disposición 20 de la *Metodología para la realización de las Visitas In Situ* señala: “...Al concluir las reuniones en cada día de la visita in situ, la Secretaría Técnica propiciará una reunión informal con los miembros del Subgrupo para intercambiar puntos de vista preliminares sobre los temas tratados en ellas...”

<b>Temas:</b>	<b>15.1 RÉGIMEN DE RECURSOS HUMANOS</b>  <b>15.2 MECANISMOS DE CONTROL INTERNO</b>
<b>Participantes:</b>	Nombre: Dr. Jorge Palacios Salcedo Cargo: Funcionario del Departamento de Participación Ciudadana y Análisis de Denuncias
11:45 hrs – 12:45 hrs <i>Hotel Hilton Colón – Sala: FERNANDINA</i>	<b>PANEL 16:</b>  <b>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</b>
<b>Temas:</b>	<b>16.1. RÉGIMEN DE COMPETENCIAS Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL</b>  <b>16.2. DIFUSIÓN DE OBJETIVOS Y FUNCIONES</b>
<b>Participantes:</b>	Nombre: Dr. Marcelo Mancheno Cargo: Director de Asuntos Éticos, Participación Ciudadana y Control Patrimonial
12:45 hrs. – 14:15 hrs	<b>Almuerzo - Hotel Hilton Colón, Café Colón</b>
14:30 hrs –15:30 hrs <i>Hotel Hilton Colón – Sala: FERNANDINA</i>	<b>PANEL 17: SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA PRIMERA RONDA</b>
<b>Tema:</b>	<b>17.1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO</b>
<b>Participantes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ministerio de Relaciones Laborales</b>  Nombre: MBA. Adolfo Brinkmann  Cargo: Subsecretario de Evaluación y Control Técnico del Servicio Público   Nombre: Dr. Pedro Rueda  Cargo: Asesor del Ministro de Relaciones Laborales</li> <li>- <b>CPCCS</b>  Nombre: Arq. Alexandra Moncada  Cargo: Coordinadora Técnica de Transparencia, Lucha contra la Corrupción, Participación y Control Social.</li> <li>- <b>Fiscalía General del Estado</b>  Nombre: Ab. Elizabeth Regalado  Cargo: Relaciones Internacionales</li> <li>- <b>Asamblea Nacional</b>  Nombre: Dra. Mónica Rodríguez Ayala  Cargo: Coordinadora de la Unidad de Técnica Legislativa   Nombre: Dr. Richard González  Cargo: Asesor de la Unidad Técnica Legislativa</li> <li>- <b>Contraloría General del Estado:</b>  Nombre: Dra. Tania Morán Domínguez  Cargo: Jefe del Departamento de Participación Ciudadana y Análisis de Denuncias</li> </ul>

15:35 hrs –16:35 hrs <i>Hotel Hilton Colón – Sala: FERNANDINA</i>	<b>PANEL 18: SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA PRIMERA RONDA</b>
<b>Tema:</b>	<b>18.1. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL</b>
<b>Participantes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Asamblea Nacional</b> Nombre: Dra. Mónica Rodríguez Ayala Cargo: Coordinadora de la Unidad de Técnica Legislativa  Nombre: Dr. Richard González Cargo: Asesor de la Unidad Técnica Legislativa</li> <li>- <b>CPCCS</b> Nombre: Ing. Víctor Argoti Cargo: <b>Secretario Técnico de Participación y Control Social</b>  Nombre: Lcdo. Julio Terán Cargo: <b>Subcoordinador Nacional de Promoción de la Participación</b></li> <li>- <b>Subsecretaría de Transparencia de Gestión</b> Nombre: Ing. Nora Arauz Sánchez Cargo: Subsecretaria de Prevención y Transparencia.</li> </ul>
16:40 hrs –17:25 hrs <i>Hotel Hilton Colón – Sala: FERNANDINA</i>	<b>PANEL 19: SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA PRIMERA RONDA</b>
<b>Tema:</b>	<b>19.1. ACCESO A LA INFORMACIÓN: LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LOTAIP) Y SU IMPLEMENTACIÓN</b>
<b>Participante:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Defensoría del Pueblo</b>  Nombre: Dr. Ramiro Rivadeneira Cargo: Defensor del Pueblo  Nombre: Dr. Christian Bahamonde Cargo: Asesor Nacional  Nombre: Dr. Cristian Guaicha Cargo: Coordinador Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública</li> </ul>
17:30 hrs –18:15 hrs <i>Hotel Hilton Colón – Sala: FERNANDINA</i>	<b>PANEL 20: SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA PRIMERA RONDA</b>
<b>Tema:</b>	<b>20.1. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS</b>
<b>Participante:</b>	<b>Contraloría General del Estado</b>  Nombre: Dr. Marcelo Mancheno Cargo: Director de Asuntos Éticos, Participación Ciudadana y Control Patrimonial
18:15 hrs <i>Hotel Hilton Colón –</i>	<b>Reunión informal</b> con los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.

<i>Sala: FERNANDINA</i>	
18:45 hrs <i>Hotel Hilton Colón – Sala: FERNANDINA</i>	<b>Reunión final</b> con los representantes del Estado analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.

**AUTORIDADES QUE SIRVIERON DE CONTACTO EN EL ESTADO ANALIZADO  
PARA LA COORDINACIÓN DE LA VISITA *IN SITU*, Y REPRESENTANTES DE LOS  
ESTADOS MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR Y DE LA  
SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC QUE PARTICIPARON EN LA MISMA**

**ESTADO ANALIZADO:**

**ECUADOR**

**Mario Hidalgo Jara**

Experto Titular ante Comité de Expertos del MESICIC  
Analista Técnico para la Implementación de los  
Instrumentos Internacionales de Lucha contra la Corrupción  
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

**ESTADOS MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR:**

**CHILE**

**Jorge Vio Niemeyer**

Experto Titular ante Comité de Expertos del MESICIC  
Auditor General de Gobierno  
Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno

**VENEZUELA**

**Adelina González**

Experta Titular ante Comité de Expertos del MESICIC  
Contralora General  
Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela

**Basilio Jáuregui**

Experto Alterno ante Comité de Expertos del MESICIC  
Director General Técnico  
Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela

**SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC**

**Laura Martínez**

Oficial Jurídico Principal del Departamento de Cooperación Jurídica  
Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA